 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA: 26 de noviembre de 2024
	Página 1 de 128
FALLO No. 016 FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO No. PRF-80763-2019-34477	

TRAZABILIDAD	SIREF N°. AN-80763-2016-27210 ANTECEDENTE-GC-0016-041 ANT-IP-2019-01957
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No	PRF-80763-2019-34477
CUN SIREF	AN-80763-2019-34477
DEPENDENCIA COMPETENTE	GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA.
ENTIDAD AFECTADA	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO NIT. 835.000.300-4
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES	FELIX SUAREZ REYES , identificado con cedula de ciudadanía No. 16.485.434, en su calidad de Rector para la época de los hechos, como contratante del Contrato de Prestación de Servicios No. No. 016 de 2018. CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES , identificado con cedula de ciudadanía No. 6.105.166, Director General de Investigaciones para la época de los hechos, en su calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de 2018. FUNDACION PACIFICO FUTURO , con NIT 900.395.802 representada legalmente por EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS identificado con cedula No. 16.489.555, en calidad de Contratista del Contrato de Prestación de Servicios No. No. 016 de 2018.
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	LA PREVISORA S.A. Compañía Aseguradora, identificada con NIT. 860.002.400-2, debido a la Póliza de seguro No. 3000136. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA , identificada con NIT. 860.524.654-6, por la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000012780 del 26 de enero de 2018.
CUANTIA DEL DAÑO PATRIMONIALINDEXADO	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$43.453.172) a la fecha.
DIRECTIVO PONENTE	EARLD HERNANDO TEJEDA QUINTERO

ASUNTO

Proceden los suscritos Directivos de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, a proferir Fallo Con Responsabilidad Fiscal en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario No. PRF-2019-34477, con ocasión del daño patrimonial sufrido por la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.

COMPETENCIA

Nuestro ordenamiento jurídico estipula que el control fiscal es una función pública que será ejercida por la Contraloría General de la República; así lo establece el artículo 267 de la Constitución Nacional, concordante con el numeral 5 del artículo 268, el cual faculta al Contralor General de la República para establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal.

Por su parte, el numeral 6 del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000, en concordancia con la Sentencia de la Honorable Corte Constitucional sentencia C-403 de 1999 establecen que la Contraloría General de la República tendrá control prevalente y concurrente, respecto a la vigilancia de la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.

De igual forma, la Ley 610 de 2000 preceptúa que la Contraloría General de la República tiene competencia prevalente para adelantar hasta su culminación los procesos de responsabilidad fiscal que se originen en ejercicio del control fiscal. En similar sentido, la Ley 1474 de 2011 ha establecido la competencia de este órgano de control para el conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal y las Resoluciones Orgánicas de la Contraloría General de la República 6541 de 2012, modificada parcialmente por la Resolución 0748-2020 de 26 de febrero de 2020 relacionadas con la distribución de competencias interna; así como el auto No 557 del 12 de noviembre del 2020 por el cual esta colegiatura avocó conocimiento del presente asunto.

Para el caso puntual, se revisará si la Universidad del pacifico es Sujeto de Control de la Contraloría General de la República. Al respecto, La ley 65 de 1988 mediante la cual se creó el establecimiento público Universidad del Pacifico, en su artículo noveno estipulo “(...) **Artículo 9º.** La Contraloría General de la República, ejercerá la vigilancia fiscal de la Universidad (...).”

Para establecer la competencia de esta Gerencia Departamental se debe evaluar lo reglado mediante el artículo 11 de la Resolución Organizacional OGZ-0764-2020 de 2020, proferida por la Contraloría General de la República en el cual se dispone lo siguiente:

“Modificar el artículo 3o de la Resolución Organizacional OGZ número 748 de 2020, la cual quedará así:

“Artículo 3o. Dependencias competentes para adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal. Las dependencias competentes para conocer, tramitar y decidir el proceso de responsabilidad fiscal que corresponde adelantar a la Contraloría General de la República, de acuerdo con los factores de competencia que más adelante se enuncian, son las siguientes:

1. Despacho del Contralor General
2. Sala Fiscal y Sancionatoria
3. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción
4. Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías
5. Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo
6. Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo
7. Direcciones de Investigaciones de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo
8. Gerencias Departamentales Colegiadas”.

Igualmente se debe evaluar lo preceptuado por el artículo 12 de la Resolución REG-OGZ0748-2020 del 26 de febrero de 2020, proferida por la Contraloría General de la Republica en el cual se dispone lo siguiente: “Para la determinación de la competencia para el trámite de la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad al interior de la Contraloría General de la República, se tendrán en cuenta los siguientes factores:

1. Factor Territorial: Lugar en donde se ejecutaron o debieron ejecutar los recursos públicos. Para los efectos de la presente resolución, el factor territorial se refiere a la ejecución presupuestal de los recursos públicos.”

Finalmente, el artículo 23 de la precitada normatividad señala:

“Las Gerencias Departamentales Colegiadas conocerán de los siguientes asuntos:

4. En primera o única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que deban tramitarse respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por las entidades del orden territorial y descentralizadas por servicios.” (Subrayado extra texto)

El caso que hoy nos ocupa se trata de recursos de naturaleza pública del orden nacional, ejecutados por la Universidad del Pacífico en el Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca.

Por todo lo anterior, se concluye que es clara la competencia legal de esta Gerencia Departamental para proferir Fallo en el presente caso.

ANTECEDENTE

La presente actuación tiene su origen en la Auditoría Financiera adelantada a la Universidad del Pacífico – UNPA-, vigencia 2018, y con el propósito de informar a la comunidad los resultados de la misma, se evaluó y conceptuó sobre la gestión adelantada por esta Entidad en la administración de los recursos públicos durante la vigencia 2018, evaluación que tuvo en cuenta los principios de la gestión fiscal: eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales, y los sistemas de control establecidos en la ley: financiero, legalidad, gestión y resultados. Lo anterior, en pro del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Mediante Auto No. 777 del 12 de diciembre de 2019 se da apertura a la indagación preliminar No. ANT_IP-2019-01957. En la cual designan a la funcionaria LEYDI SANCHEZ SANCHEZ de la dependencia del grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, para que sustancie, presente actuación y decrete y practique los medios de prueba ordenados en el presente auto y los que llegaren a decretar posteriormente, bajo la coordinación y supervisión del Coordinador de Gestión de Grupo de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y de la Contralor Provincial MARIA LILIANA VIVAS PAZ quien realiza el seguimiento, revisión y aprueba, en los términos del artículo 23 de la Resolución No. 6541 de 2012 de competencia de la Contraloría General de la República, las leyes 610 de 2000 y la 1474 de 2011, más las instrucciones que imparta el despacho.

Mediante radicado No. 2020IE0055918 del 11 de septiembre de 2020 mediante diligencias de reparto realizadas en Comité Colegiado No. 047 sesión 03 del 4 de septiembre de 2020, se procede a informar que el órgano directivo de la Gerencia Colegiada del Valle del Cauca designa a la doctora PRISCILA CENEIDA ALEGRIA, como sustanciadora de este proceso. Mediante Auto No. 011 del 18 de enero de 2024, el Dr. EARLD HERNANDO TEJEDA avoca conocimiento del presente proceso y finalmente con el Auto No. 155 del 18 de marzo de 2024 se reasigna la sustanciación del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No 80763-2019-34477 a la profesional SANDRA PATRICIA BARCOS GARCIA.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Los hechos objeto de reproche fiscal se circunscriben en lo siguiente:

Mediante Auto No. 557 del 12 de noviembre de 2020, las Directivas de la Gerencia Colegiada del Valle del Cauca, ordenaron la Apertura del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2019-34477, por el presunto detrimento patrimonial ocasionado a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece que: *“Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado”*, se dieron los siguientes hechos:

“La Universidad del Pacífico suscribió el contrato No. 016 con la Fundación Pacífico Futuro NIT. 900.395.802-1, por TREINTA MILLONES DE PESO (\$30.000.000) para “Dictar Capacitación en temas de economía regional frente

al mundo globalizado, turismo, desarrollo y Sociedad a los grupos de investigación y semilleros en las actividades de los programas de administración en negocios internacionales y tecnología en gestión hotelera y turística”, verificado los soportes contractuales no se encontraron los registros de los asistentes a las capacitaciones, incluso en el informe presentado por el contratista se hace referencia a listados de asistencias y videos, soportes que no se encontraron ni en el informe ni en la carpeta contractual, situación indagada al supervisor del contrato en entrevista, quien confirmo al equipo auditor de la Contraloría General de la Republica que estas planillas reposaban en el contrato.

En consecuencia, se evidencia que la Universidad del Pacifico recibió a satisfacción y pago TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) mediante los siguientes comprobantes de Egreso, por un producto que no aportaba las evidencias suficientes que demostraran la ejecución del Objeto Contractual por parte de la Fundación Pacifico Futuro:

Pagos realizados Comprobante de egresos		
No.	Fecha	valor
34	31/01/2018	\$15.000.000
18054	08/08/2018	\$15.000.000
	Total, pagado	\$30.000.000

La gestión contractual de la Universidad, conforme a las normas que regulan la materia, y en especial atendiendo el contenido del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, además, en materia de convenios interadministrativos se remitirá al artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, por lo que se aplicaran los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la constitución política y dará aplicación entre otros a los principios de planeación y legalidad.

La Universidad del Pacifico tiene la responsabilidad de ejercer, para todos los Contratos que perfeccione y desarrolle, una correcta y adecuada vigilancia, seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero.

Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, perdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producidas por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las Contralorías.

La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

La situación detectada se debe a fallas en las funciones de seguimiento y control de la supervisión a la ejecución contractual, lo que conlleva a que se

realicen pagos relacionados con contratos sobre los cuales no se aportan la totalidad de los soportes de su ejecución, causando detrimento al patrimonio público.

Hallazgo tiene incidencia fiscal por TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), correspondiente a los valores pagados por la Universidad y presunta connotación disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”. Lo anterior nos permite inferir que el contratista no ejecuto las actividades pactadas, sin embargo, se autorizó su pago.

La ausencia de supervisión por parte del Director General de Investigaciones y la falta de controles en el área de Tesorería al momento de autorizar los pagos, genero la pérdida de recursos públicos en cuantía de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000).

El presente hallazgo se encuentra registrado en el Informe de auditoría a la Universidad del Pacifico vigencia 2018, identificado como Hallazgo No. 72419 Capacitaciones a grupos de investigación y semilleros Contrato de Prestación de Servicios No.016 de 2018”.

A partir de estos hechos, la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, estimó que se habría generado un detrimento patrimonial al erario por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) sin indexar, correspondiente al valor contractual.

En ese orden de ideas, se evidenció un incumplimiento de las obligaciones de Interventoría y Supervisión, definidas en el artículo 53 de la ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, así como una violación a lo definido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, a la ejecución contractual TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), sin indexar, suma correspondiente al valor total de lo contratado para la Capacitaciones a grupos de investigación y semilleros Contrato No.016 de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas:

- ✓ **Artículos 267 y 268** numeral 5° de la Constitución Política de Colombia.
- ✓ **Ley 610 de 2000**, a través de la cual se fija el trámite de los Procesos de responsabilidad Fiscal.
- ✓ **Resolución Organizacional REG-OGZ-0748-2020 del 26 de febrero de 2020** por la cual se determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo en la Contraloría General de la República.
- ✓ **Decreto 405 del 2020**, por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República.

- ✓ **Ley 1474 de 2011**, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Subsección II Artículos 106 al 109 y Subsección III del artículo 110 al 120.
- ✓ **Ley 80 de 1993**, Estatuto de Contratación Estatal.
- ✓ **Ley 80 de 1993**: “Artículo 26. *Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio:*
 - 1.Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
 - 2.Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. (...)”.
- ✓ **Ley 80 de 1993**, Artículo 60, modificado por el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, sobre la liquidación de los contratos:
 - ✓ “(...) También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
 - ✓ En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (...)”.
- ✓ **Ley 1150 de 2007** y demás normatividad reglamentaria, de manera especial el ultimo inciso del Artículo 11: “(...) Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.”
- ✓ **Ley 42 de 1993** que establece la organización del Control Fiscal Financiero y organismos que lo ejercen, disponiendo en su artículo 49 que la Contraloría General de la Republica vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA

ENTIDAD:	LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
NIT.	835.000.300-4
Representante legal:	RUTH SANCHEZ DE PEREA
Dirección	Km 13 vía al Aeropuerto Barrio el Triunfo Campus Universitario
Teléfonos:	602 240 55 55

La Universidad del Pacífico es un ente Universitario autónomo de servicio público cultural, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, creado por la Ley 65 de 1988, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y a la planeación educativa.

La Universidad del Pacifico tiene su domicilio principal en la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia y de acuerdo con la Ley 65 de 1988, podrá establecer dependencias académicas en otras ciudades del Litoral Pacifico. De acuerdo a la Constitución Política y la Ley, la Universidad, como ente universitario autónomo podrá darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; otorgar los correspondientes títulos; definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; seleccionar a sus profesores; admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función institucional. (Acuerdo No. 014 de 2005).

ACTUACIONES PROCESALES

- ✓ Auto No. 557 Apertura del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, del 12 de noviembre del 2020, (Folios 59-76). Por medio del cual se decreta pruebas de oficio, tales como:
 - ✓ Oficiar a la Universidad del Pacifico para que aporte copia de:
 - Procedimiento para la suscripción de contratos y/o convenios con entidades particulares vigente para el año 2018,
 - Manual de funciones y procedimiento del cargo de Rector y Director de Investigaciones para el periodo 2018,
 - Relación de los grupos de investigación y semilleros de los programas de administración en negocios internacionales y tecnología en gestión hotelera y turística de la universidad, indicando nombres completos, direcciones, teléfonos, correos electrónicos y
 - Remitir la póliza de cumplimiento del contrato N° 016 del 25 de enero del 2018 y la resolución de aprobación de la misma;

Finalmente ordena notificar los presuntos responsables del Auto No. 557, las cuales se surtieron de la siguiente forma:

1. FELIX SUAREZ REYES identificado con cedula de ciudadanía No. 16.485.434 en calidad de Rector, notificado por aviso No. 115 del 22 de diciembre de 2020 (Folios 86-88).
2. CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES identificado con cedula de ciudadanía No. 6.105.166, en calidad de director general de Investigaciones, notificado por aviso No. 018 del 10 de febrero de 2021 (Folios 102-105).

3. FUNDACION PACIFICO FUTURO identificada con Nit 900.395.802 en calidad de Contratista, representante Legal MARICEL VALENCIA CASTRO, notificado por aviso No.116 del 22 de diciembre de 2020 (Folio 112-115).
- ✓ Auto No. 091 del 18 de febrero de 2021, por medio del cual se reasigna sustanciación dentro del ANT_IP-2019-01957 (Folio 126-127).
 - ✓ Auto No. 092 del 18 de febrero de 2021, por medio del cual se reasigna sustanciación dentro del ANT_IP-2019-01957 (FOLIO 128).
 - ✓ Auto No. 438 del 28 de junio de 2021, por medio del cual se avoca conocimiento (folios 202-204).
 - ✓ Auto No. 766 del 05 de noviembre de 2021, por medio del cual se designa apoderado de oficio (folios 230-232).
 - ✓ Auto No. 568 del 18 de agosto de 2022, por medio del cual se sustituye apoderado de oficio (folios 257-258).
 - ✓ Auto No. 242 del 31 de marzo de 2023, por medio del cual se avoca conocimiento (folios 285-286).
 - ✓ Auto No. 336 del 16 de mayo de 2023, por medio del cual se sustituye apoderado de oficio (folios 290-291).
 - ✓ Auto No. 343 del 17 de mayo de 2023, por medio del cual se sustituye apoderado de oficio. (folios 292-293).
 - ✓ Auto No. 453 del 07 de julio de 2023, por medio del cual se sustituye apoderado de oficio (folios 312-314).
 - ✓ Auto No. 493 del 25 de julio de 2023 sustituye apoderado de oficio (folios 318-319).
 - ✓ Auto No. 011 del 18 de enero de 2024, por medio del cual se sustituye apoderado de oficio (folio 324).
 - ✓ Auto No. 30 del 26 de enero, sustituye apoderado de oficio (folios 331-332).
 - ✓ Auto No. 155 del 18 de marzo de 2024, por medio del cual se reasigna sustanciadora y se avoca conocimiento (folio 335):
 - Oficio del 18 de marzo de 2024, solicitud de notificación auto No. 155 (folio 336).
 - Estado No. 047-2024 del 19 de marzo de 2024 (folios 337-338).
 - ✓ Auto de imputación No. 209 del 16 de abril de 2024 (folios 357-380):
 - Oficio del 22 d abril de 2024, solicitud de notificación auto No. 209 (folio 381).
 - Acta de notificación personal electrónica de 23 de abril de 2024 (folio 382).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0047209 del 30 de abril de 2024, notificación personal del auto de imputación No. 209 (folios 383-384).

- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0081767 del 3 de mayo de 2024, acta de notificación personal electrónica del auto de imputación No. 209 (folios 385-387).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0085120 del 8 de mayo de 2024, acta de notificación personal electrónica del auto de imputación No. 209 (folios 395-397).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0089961 del 10 de mayo de 2024, acta de notificación personal electrónica auto de imputación 209 (folios 401-403).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0051031 del 10 de mayo 2024, constancia de devolución de diligencias de notificación personal (folio 404).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0075518 del 23 de abril 2024, acta de notificación personal electrónica (folio 405).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0075518 del 23 de abril 2024, acta de notificación personal electrónica (folio 440).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0075541 del 23 de abril 2024, citación a notificación personal del auto de imputación No. 209 (folios 441-443).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0075572 del 23 de abril 2024, citación a notificación personal del auto de imputación No. 209 (folios 444-445).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0080596 del 2 de mayo 2024, notificación por aviso del auto de imputación No. 209 (folios 446-448).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0076811 del 25 de abril 2024, acta de notificación personal electrónica (folio 449).
 - Oficio del 11 de junio de 2024, acta de notificación personal Auto de imputación No. 209 (folio 466).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0063167 del 13 de junio de 2024, devolución de diligencias notificación personal Auto de imputación No. 209 (folio 467).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0075326 del 12 de julio de 2024, devolución de diligencias de notificación personal electrónica auto de imputación No. 209 (folios 731-737).
- ✓ Auto No. 247 del 7 de mayo de 2024, designa apoderado de oficio (folios388-389).
- ✓ Auto No. 305 del 24 de mayo de 2024, ordena efectuar diligencias (folios 457-458).
- ✓ Auto No. 444 del 24 de julio de 2024, decreta medidas cautelares (folios 743-746).
- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0118383 del 21 de octubre de 2024, solicitud de notificación por estado (folio 801).
 - Estado No. 178 del 22 de octubre de 2024 (folios 802-804).
- ✓ Auto No. 491 del 14 de agosto de 2024, decide sobre la práctica de pruebas en el proceso (folios 749-751):
- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0089824 del 14 de agosto de 2024, solicitud de notificación por estado (folio 752).
 - Estado No. 134 del 15 de agosto de 2024 (folios 753-754).
- ✓ Oficio del 20 noviembre de 2020, solicitud de notificación personal (folio 77).

- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021IE011456 del 15 de febrero de 2021, constancia secretarial devolución de diligencias de notificación. (folio 78).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0148877 del 24 de noviembre de 2020 requerimiento para surtir notificación personal (folios 79-81).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0157124 del 9 de diciembre de 2020 citación para notificación personal (folios 82-84).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0165034 del 22 de diciembre de 2020 citación para notificación personal (folio 85).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0148892 del 24 de noviembre de 2020 requerimiento para surtir notificación personal (folios 89-91).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0162934 del 18 de diciembre de 2020 requerimiento para surtir notificación personal (folio 92).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0006651 del 22 de enero de 2021 requerimiento para surtir notificación personal (folios 96-98).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0011465 del 1 de febrero de 2021 citación para notificación personal (folios 99-101).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0148932 del 24 de noviembre de 2020 requerimiento para surtir notificación personal (folios 106-108).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0157127 del 9 de diciembre de 2020 citación para notificación personal (folios 109-111).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2020EE0148982 el 24 de noviembre de 2020 comunicación vinculación como tercero civilmente responsable al Representante Legal de la Compañía Seguros Cóndor (folios 116-124).
- ✓ Oficio del 4 de diciembre de 2020 novedades en notificación auto de apertura (folio 125).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021ER0038078 del 4 de abril de 2021, acceso a carpeta de información de la aseguradora (folios 131-186).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0050116 del 6 de abril de 2021, entrega expediente digital (folio 187).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0078850 del 19 de mayo de 2021, por medio del cual, se comunica y se solicita información al Representante Legal de la Universidad del Pacífico (Folio 192).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0078913 del 19 de mayo de 2021, citación para rendir versión libre (folio 193).

- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0078885 del 19 de mayo de 2021, citación para rendir versión libre (folio 194).
- ✓ Oficio de fecha 2 de junio de 2021, respuesta a citación a versión libre representante legal Fundación Pacifico Futuro (folio 195).
- ✓ Oficio de fecha 18 de junio de 2021, versión libre de la señora Maricel Valencia Castro (folios 199-201).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021IE0051024 del 28 de junio de 2021, solicitud de notificación por estado auto No. 438 (folio 205).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021ER0084108 del 1 de julio de 2021, solicitud de copia del auto 438 (folio 207).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0124936 del 5 de agosto de 2021, citación a rendir versión libre Christian Tobar (folio 208).
- ✓ Oficio del 13 de agosto de 2021, acta de no comparecencia de Christian Tobar (folio 209).
- ✓ Oficio del 19 de agosto de 2021, rendición de versión libre de Maricel Valencia (folios 210-223).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0171397 del 9 octubre de 2021, solicitud apoderados de oficio universidad Icesi (folio 224).
- ✓ Oficio del 16 de octubre de 2021, créditos de estudiantes como apoderados de oficio (folios 225-229).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021IE0095795 del 8 de noviembre de 2021, solicitud de notificación por estado auto No. 766 (folio 233).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021ER0159793 del 9 de noviembre de 2021, solicitud de copia auto No. 766 (folio 235).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0194200 del 10 de noviembre de 2021, respuesta a solicitud de copia auto No. 766 (folio 237).
- ✓ Oficio del 30 diciembre de 2021, solicitud del expediente (folio 239).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0002165 del 11 de enero de 2022, respuesta a solicitud del expediente (folio 240).
- ✓ Oficio del 10 de marzo de 2022, créditos estudiante para apoderada de oficio (folios 241-245).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE056809 del 1 abril de 2022, solicitud de información (folio 246).

- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2022EE096989 del 6 de junio de 2022, envío de copia de expedientes a la aseguradora (folio 253).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2022EE0098849 del 8 de junio de 2022, solicitud de información (folio 354).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2022ER0133796 del 22 de agosto de 2022, solicitud copia del auto 568 (folio 259).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2022EE0145654 del 25 de agosto de 2022, repuesta a solicitud copia del auto 568 (folio 261).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2022EE0206183 del 24 de noviembre de 2022, solicitud de información a la DIAN (folio 262).
- ✓ Oficio del 16 de diciembre de 2022, sustitución de apoderado de oficio (folios 269-274).
- ✓ Oficio del 16 de diciembre de 2022, sustitución de apoderado de oficio (folio 276).
- ✓ Oficio del 13 de marzo de 2023, sustitución de apoderado de oficio (folios 277-282).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023IE0034096 del 31 de marzo de 2023 solicitud de notificación autos No. 236 y 242 (folio 287).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023EE0079392 del 18 de mayo de 2023, citación para rendir versión libre Félix Suarez (folio 294).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023EE0079512 del 18 de mayo de 2023, citación para rendir versión libre Edgar Felipe Angulo Rivas (folio 295).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023IE0050633 del 19 de mayo de 2023, solicitud de notificación auto No. 336 y 343 (folio 296).
- ✓ Oficio del 23 de mayo de 2023, sustitución de apoderado de oficio (folios 298-299).
- ✓ Oficio del 5 de junio de 2023 solicitud copia de los autos 336 y 343 (folio 301).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023EE0093164 del 8 de junio de 2023, citación para rendir versión libre para Félix Suarez (folio 302).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023EE0093181 del 8 de junio de 2023, segunda citación para rendir versión libre Edgar Felipe Angulo Rivas (folio 303).
- ✓ Oficio del 13 de junio de 2023, créditos apoderado de oficio (folios 304-311).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023IE0068084 del 10 de julio de 2023, solicitud de notificación auto No. 453 (folio 315).

- ✓ Oficio del 10 de julio de 2023, Acta de posesión apoderado de oficio Luis Daniel Colmenares (folio 316).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023IE0073909 del 25 de julio de 2023, solicitud de notificación auto No. 493 (folio 320).
- ✓ Oficio del 1 de agosto de 2023 solicitud de copia auto 493 (folio 322).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023EE0126630 del 1 de agosto de 2023, respuesta a solicitud de copia del auto 493 (folio 323).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2023IE0004628 del 18 de enero de 2024 solicitud de notificación auto No. 011 (folio 325).
- ✓ Oficio del 23 de enero de 2024, solicitud de copia del auto 011 (folios 326-327).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0011458 del 25 de enero de 2024, respuesta a copia solicitud de auto No. 011 (folio 329).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0011719 del 25 de enero de 2024, solicitud de apoderados de oficio universidad libre (folio 330).
- ✓ Oficio del 29 de enero de 2024, acta de posesión apoderado de oficio Juan Esteban Flórez Toro (folio 333).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0011719 del 29 de enero de 2024, solicitud de notificación auto No. 30 (folio 334).
- ✓ Oficio del 20 de marzo de 2024, sustitución de poder de apoderados de oficio (folios341-348).
- ✓ Oficio del 26 de marzo de 2024 créditos estudiantes para apoderada de oficio (folios 349-351).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0058929 del 3 de abril de 2024, solicitud de apoderados de oficio a la Universidad Cooperativa de Colombia (folios 352-353).
- ✓ Oficio del 9 d abril de 2024 créditos estudiante para apoderado de oficio (folios 354-356).
- ✓ Oficio del 22 d abril de 2024, solicitud de notificación auto No. 209 (folio 381).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0047209 del 30 de abril de 2024, notificación personal del auto de imputación No. 209 (folios 383-384).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0081767 del 3 de mayo de 2024, acta de notificación personal electrónica del auto de imputación No. 209 (folios 385-387).

- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0049279 del 7 de mayo de 2024, solicitud de notificación del auto 247 (folio 390).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0049896 del 8 de mayo de 2024, devolución de diligencias notificación personal (folio 391).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0049921 del 8 de mayo de 2024, devolución de diligencias notificación personal (folios 392-394).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0104945 del 17 de mayo de 2024, Descargos frene al Auto de Imputación No. 209 por parte de la Aseguradora (folios 406-437).
- ✓ Oficio del 17 de mayo de 2024, argumentos de defensa (folios 438-439).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0075518 del 7 de mayo 2024, argumentos de defensa (folio 450-452).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0096676 del 7 de mayo 2024, argumentos de defensa (folio 453-456).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0060151 del 5 de junio de 2024, solicitud de notificación auto No. 305 (folio 459).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0060513 del 6 de junio de 2024, evidencia publicación de estado No. 090 (folios 460-461).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0121243 del 6 de junio de 2024, solicitud copia auto No. 090 (folios 462-463).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0106472 del 7 de junio de 2024, acta de notificación personal electrónica (folios 464-465).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0130534 del 18 de junio de 2024, argumentos de defensa (folios 468-655).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0130964 del 18 de junio de 2024, argumentos de defensa (folios 656-711).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0134193 del 21 de junio de 2024, argumentos de defensa, complemento (folios 712-722).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0071371 del 3 de julio de 2024, solicitud de notificación personal (folio 723).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0075358 del 12 de julio de 2024, solicitud de notificación auto No. 412 (folio 738).
- ✓ Oficio del 15 de julio de 2024, solicitud de copia del auto 412 (folio 739).

- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 7095366 del 17 de julio de 2024, evidencia de publicación estado No. 115 (folios 740-741).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0142884 del 31 de julio de 2024, comunicación de vinculación compañía aseguradora (folios 747-748).
- ✓ Oficio del 15 de agosto de 2024, solicitud de copia del auto 491 (folio 755).
- ✓ Oficio del 16 de agosto de 2024, respuesta a solicitud de copia del auto 491 (folio 756).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0239933 del 22 de octubre de 2024, solicitud y respuesta de copia del auto 444 (folios 805-806).
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0242752 del 24 de octubre de 2024, Argumentos de defensa Aseguradora Solidaria (folios 807-819).
- ✓ Resolución Reglamentaria REG-EJE-0081-2021, de fecha veinticinco (25) de marzo 2021, por medio de la cual se suspenden términos. (folio 130).
- ✓ Resolución Reglamentaria REG-EJE-0086-2021, de fecha doce (12) de mayo de 2021, por medio de la cual se suspenden términos. (folios 188 - 189).
- ✓ Resolución Reglamentaria REG-EJE-0107-2022, de fecha seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), por medio de la cual se suspenden términos. (folios 247 - 249).
- ✓ Resolución Reglamentaria REG-EJE-0119-2022, de fecha veintidós (22) de diciembre de dos mil veintidós (2022), por medio de la cual se suspenden términos. (folio 275).
- ✓ Resolución Reglamentaria REG-EJE-0123-2023, de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por medio de la cual se suspenden términos. (folios 283-284).
- ✓ Notificación por Estado No. 099-2021 del 30 de junio de 2021 (folio 206).
- ✓ Notificación por Estado No. 179-2021 del 9 de noviembre de 2021 (folio 236).
- ✓ Notificación por Estado No. 134-2022 del 22 de agosto de 2022 (folio 260).
- ✓ Notificación por Estado No. 053-2023 del 10 de abril de 2023 (folios 288-289).
- ✓ Notificación por Estado No. 077-2023 del 23 de mayo de 2023 (folio 297).
- ✓ Notificación por Estado No. 108-2023 del 11 de julio de 2023 (folio 317).
- ✓ Notificación por Estado No. 118-2023 del 26 de julio de 2023 (folio 321).
- ✓ Notificación por Estado No. 012-2024 del 22 de enero de 2024 (folio 328).
- ✓ Notificación por Estado No. 072 -2024 del 8 de mayo de 2024 (folio 398-400).

- ✓ Acta de posesión del 8 de noviembre de 2021 de Natalia Hoyos Victoria (folio 234).
- ✓ Acta de posesión del 10 de noviembre de 2021 de Álvaro José Cárdenas Perea (folio 238).
- ✓ Acta de posesión apoderado de oficio Francisco Javier Castañeda (folio 300).
- ✓ Acta de notificación personal electrónica de 23 de abril de 2024 (folio 382).
- ✓ Auto No. 615 del 27 de septiembre de 2024, Complementa la Imputación (folios 757-781).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0109002 del 27 de septiembre de 2024, solicitud de notificación (folio 782).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0115165 del 11 de octubre de 2024, Devolución de diligencias de notificación personal (folios 784-800).

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA


Obra en el expediente electrónico el siguiente acervo probatorio:

PRUEBAS DOCUMENTALES:

- Revisión Contrato No. 016-218 (Estudio de Conveniencia, Solicitud de CDP, CDP, Propuesta, Soportes, Contrato, RP, póliza, designación de Supervisor, Acta de Inicio, Informe final, recibido a satisfacción, comprobante 34, comprobante 18054, acta UniPacífico Supervisor Contrato 014,016, 121, 029, 029 04.04.2019 y acta dirección de investigaciones.
- Ayuda de memoria No. 5 de 10/04/2019 presentación observaciones.
- 2019EE0045196 12/04/2019 comunicación observaciones No. 1 A 42.
- 201920010003001 26/04/2019 Respuesta a observaciones.
- Ayuda de memoria No.6 de 02 y 03/05/2019 Análisis de Respuesta.
- Certificación de menor cuantía.
- Constancia ordenadores del gasto 2018.
- Hoja de vida y soportes de Félix Suarez Reyes.
- Hoja de vida y soportes de Christian Enrique Tobar Quiñones
- Pólizas.
 - Póliza de Responsabilidad Civil 2018-2019.
 - Póliza multirriesgo 2017-2018.
 - Póliza multirriesgo 2018-2019.
 - Póliza global de manejo rector y director ADMIN-FINAN 2017-2018.
 - Póliza global de manejo rector y director ADMIN-FINAN 2018-2019.

Una carpeta física del traslado del hallazgo con ciento cuarenta y cinco (145) folios, así:

- ✓ Formato traslado del hallazgo con soportes con cinco (5) folios, del 1 al 5, Carpeta principal 1/2
- ✓ Informe de la Actuación especial de Auditoria.

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA: 26 de noviembre de 2024
	Página 18 de 128
FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477	

Los recaudados durante el trámite del Proceso:

- ✓ Auto 557 del 12/11/2020 de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2019-34477, en (18) folios, del 59 al 76, C. Principal 1.
- ✓ Correo del 20 de noviembre del 2020, Solicitud de Notificación del Auto de Apertura de Responsabilidad Fiscal No. 557 del 12 de noviembre de 2019, un (1) folio el 77, C. Principal.1.
- ✓ Oficio 2021EE0078850 Comunicación a la Entidad del Auto de Apertura y solicitud de información, en un (1) folio, el 192, C. principal 1.
- ✓ Oficio 2021IE0011456 devolución diligencias de notificación, en cuarenta y ocho (48) folios, del 78 al 125. Cuaderno Principal 1.
- ✓ Nota Secretarial de FIJACION EN LISTA No. 033-VALLE DEL CAUCA 01 de marzo de 2021, en un (1) folio, el 129.
- ✓ Oficio 2021IE0008057 solicitud de búsqueda de bienes, en un (1) folio, 1. Cuaderno búsqueda de Bienes.
- ✓ Oficio 2021IE0008233, respuesta a solicitud de búsqueda de bienes en treinta y cuatro (47) folios, del 10 al 57. C. Búsqueda de Bienes.
- ✓ Oficio 2023IE0051200 solicitud de búsqueda de bienes, en un (1) folio, del 58 1. Cuaderno búsqueda de Bienes.
- ✓ Oficio 2023IE0053515, respuesta a solicitud de búsqueda de bienes en nueve (9) folios, del 59 al 67. C. Búsqueda de Bienes.
- ✓ Oficio 2021ER0038078, Previsora poder en cincuenta y cuatro folios (54) folios, del 132 al 186. C. Principal 1.
- ✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2021EE0078850 del 19 de mayo de 2021, por medio del cual, se comunica y se solicita información al Representante Legal de la Universidad del Pacifico (Folio 192). Cuaderno Principal 1.
- ✓ Oficio 20210604_5621031 respuesta a solicitud de información, un (1) CD, folio 197. Cuaderno Principal 1.
- ✓ Oficio 2021EE0078913 citación declaración versión libre y espontánea, a Christian Enrique Tobar Quiñones, director general de Investigaciones, en un (1) folio, el 193, Cuaderno Principal 1.
- ✓ Oficio 2021EE0078885 citación declaración versión libre y espontánea, a Maricel Valencia representante legal de la fundación pacifico futuro, para la época de los hechos, contratista, en un (1) folio, el 194, Cuaderno Principal

- ✓ Correo sin radicado del señor Edgar Felipe Angulo representante legal de la fundación pacifico futuro reprogramación de fecha y hora para rendir versión libre, en un (1) folio, el 195. Cuaderno Principal 1.
- ✓ Respuesta a citación de versión libre, de la señora Maricel valencia, representante legal de la fundación pacifico futuro para la época de los hechos, en tres (3) folio, el 199 al 201. Cuaderno Principal 1.
- ✓ Oficio 2021IE0051024, envió a secretaria común, en un (1) folio, el 205. Cuaderno Principal 1.
- ✓ Nota Secretarial de Fijación En Lista No. 099-Valle del Cauca 30 de junio de 2021, en un (1) folio, el 206.
- ✓ Notificación por Estado 099 del 30/06/2021 del auto de avoco conocimientos, en un (1) folio, el 206. Cuaderno Principal 1.
- ✓ Oficio 2021EE0124936 citación declaración versión libre y espontánea, a Christian Enrique Tobar Quiñones, director general de Investigaciones, en un (1) folio, el 208, Cuaderno Principal 1.
- ✓ Acta de no comparecencia del señor Christian Enrique Tobar Quiñones, en un (1) folio, el 209 Cuaderno principal 1.
- ✓ Ampliación Respuesta a citación de versión libre (evidencias del contrato), de la señora Maricel valencia, representante legal de la fundación pacifico futuro para la época de los hechos, en catorce (14) folios, el 210 al 223. Cuaderno Principal 1.
- ✓ ✓ Oficio 2021EE0171397 solicitud de apoderados de oficios, en un (1) folio, el 224, Cuaderno Principal 1.
- ✓ ✓ Oficio sin radicado de octubre 16 de 2021 de asignación de apoderado de oficio, en tres folios (3), el 225 al 227, carpeta 2/2.
- ✓ ✓ Oficio sin radicado de octubre 20 de 2021 de asignación de apoderado de oficio, en dos folios (2), el 225 al 228, carpeta 2/2.
- ✓ Auto No. 766 del 05 de noviembre de 2021, por medio del cual se designa apoderado de oficio (FOLIOS 230-232). Carpeta 2/2.
- ✓ Oficio 2021IE0095795, envió a secretaria común, en un (1) folio, el 233. Cuaderno Principal 2/2.
- ✓ Nota Secretarial de FIJACION EN LISTA No. 179-VALLE DEL CAUCA 09 de noviembre de 2021, en un (1) folio, el 236.
- ✓ Acta de posesión de apoderado de oficio del señor Christian Enrique Tobar Quiñones, en un (1) folio, el 234 Cuaderno principal 2/2.
- ✓ Notificación por Estado 179 del 09/11/2021 del auto de avoco conocimientos, en un (1) folio, el 206. Cuaderno Principal 2/2.

- ✓ Acta de posesión de apoderado de oficio del señor Félix Suarez Reyes, en un (1) folio, el 238 Cuaderno principal 2/2.
- ✓ Oficio sin radicado de marzo 10 de 2022 de asignación de apoderado de oficio, en cinco folios (5), el 241 al 245, carpeta 2/2.
- ✓ Oficio 2022EE0056809 solicitud de información, en un (1) folio, el 246, Cuaderno Principal 2/2.
- ✓ Resolución 0107 del 06/04/2022 suspensión de términos procesales, en tres (3) folios, del 247 al 249.
- ✓ Con oficio 2023ER0066702 respuesta a solicitud de información, en tres (3) folios.
- ✓ Oficio 2022EE0098849, Solicitud de información, en un (1) folio, el 254, Cuaderno Principal.
- ✓ Con oficio 2023ER0099897 respuesta a solicitud de información, en dos (2) folios, el 255.
- ✓ Nota Secretarial de FIJACION EN LISTA No. 134-VALLE DEL CAUCA 22 de agosto de 2022, en un (1) folio, el 260.
- ✓ Oficio 2022EE0206183, Solicitud de información, en un (1) folio, el 262, Cuaderno Principal.
- ✓ Oficio del 30 de noviembre del 2022, respuesta a solicitud de información, en seis (6) folios.
- ✓ Resolución 0119 del 22/12/2022 suspensión de términos procesales, en un (1) folio, del 275.
- ✓ Resolución 0123 del 28/03/2023 suspensión de términos procesales, en dos (2) folios, del 283 al 284.
- ✓ Nota Secretarial de FIJACION EN LISTA No. 053-VALLE DEL CAUCA 10 de abril de 2023, en un (1) folio, el 288.
- ✓ Oficio 2021EE0124936 del 05/08/2021, citación a Versión Libre y espontánea, a CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES. Contratista, en un (1) folio, el 208.
- ✓ Oficio 2020EE00078913 del 19/05/2021, citación a Versión Libre y espontánea, a CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES. Contratista, en un (1) folio, el 193.
- ✓ Oficio 2020EE00078885 del 19/05/2021, citación a Versión Libre y espontánea, a EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS, representante legal de la Fundación Pacifico Futuro. Contratista, en un (1) folio, el 194.

- ✓ Oficio 2023EE0079392 del 18/05/2023, citación a Versión Libre y espontánea, a FELIX SUAREZ REYES. Contratante, en un (1) folio, el 294.
- ✓ Oficio 2023EE0079512 del 18/05/2023, citación a Versión Libre y espontánea, a EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS, representante legal de la Fundación Pacífico Futuro. Contratista, en un (1) folio, el 295.
- ✓ Nota Secretarial de FIJACION EN LISTA No. 077-VALLE DEL CAUCA 23 de mayo del 2023, en un (1) folio, el 297.
- ✓ Oficio 2023EE0093164 del 08/06/2023, citación a Versión Libre y espontánea, a FELIX SUAREZ REYES. Contratante, en un (1) folio, el 302.
- ✓ Oficio 2023EE0093181 del 08/06/2023, citación a Versión Libre y espontánea, a EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS, representante legal de la Fundación Pacífico Futuro. Contratista, en un (1) folio, el 303.
- ✓ Nota Secretarial de FIJACION EN LISTA No. 108-VALLE DEL CAUCA 11 de julio de 2023, en un (1) folio, el 317.
- ✓ Nota Secretarial de FIJACION EN LISTA No. 118-VALLE DEL CAUCA 26 de julio de 2023, en un (1) folio, el 317.
- ✓ Oficio de asignación con SIGEDOC No. 2020IE0055918 del 11 de septiembre de 2020 a PRISCILA CENEIDA ALEGRIA ALEGRIA para tramitar el PRF-2019-34477.
- ✓ Auto No. 155 del 18 de marzo de 2024, se reasigna a SANDRA PATRICIA BARCOS GARCIA para continuar con la sustanciación del PRF-2019-34477.
- ✓ Auto de imputación No. 209 del 16 de abril de 2024 (folios 357-380):
 - Oficio del 22 d abril de 2024, solicitud de notificación auto No. 209 (folio 381).
 - Acta de notificación personal electrónica de 23 de abril de 2024 (folio 382).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0047209 del 30 de abril de 2024, notificación personal del auto de imputación No. 209 (folios 383-384).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0081767 del 3 de mayo de 2024, acta de notificación personal electrónica del auto de imputación No. 209 (folios 385-387).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0085120 del 8 de mayo de 2024, acta de notificación personal electrónica del auto de imputación No. 209 (folios 395-397).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0089961 del 10 de mayo de 2024, acta de notificación personal electrónica auto de imputación 209 (folios 401-403).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0051031 del 10 de mayo 2024, constancia de devolución de diligencias de notificación personal (folio 404).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0075518 del 23 de abril 2024, acta de notificación personal electrónica (folio 405).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0075518 del 23 de abril 2024, acta de notificación personal electrónica (folio 440).

- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0075541 del 23 de abril 2024, citación a notificación personal del auto de imputación No. 209 (folios 441-443).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0075572 del 23 de abril 2024, citación a notificación personal del auto de imputación No. 209 (folios 444-445).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0080596 del 2 de mayo 2024, notificación por aviso del auto de imputación No. 209 (folios 446-448).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0076811 del 25 de abril 2024, acta de notificación personal electrónica (folio 449).
 - Oficio del 11 de junio de 2024, acta de notificación personal Auto de imputación No. 209 (folio 466).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0063167 del 13 de junio de 2024, devolución de diligencias notificación personal Auto de imputación No. 209 (folio 467).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0075326 del 12 de julio de 2024, devolución de diligencias de notificación personal electrónica auto de imputación No. 209 (folios 731-737).
- ✓ Argumentos de defensa de los presuntos:
- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0104945 del 17 de mayo de 2024, Descargos frene al Auto de Imputación No. 209 por parte de la Aseguradora (folios 406-437).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0130534 del 18 de junio de 2024, argumentos de defensa de Félix Suarez Reyes (folios 468-655).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0130964 del 18 de junio de 2024, argumentos de defensa de Christian Enrique Tobar Quiñones (folios 656-711).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0134193 del 21 de junio de 2024, argumentos de defensa, complemento de Christian Enrique Tobar Quiñones (folios 712-722).
- ✓ Auto No. 491 del 14 de agosto de 2024, decide sobre la práctica de pruebas en el proceso (folios 749-751).
- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0089824 del 14 de agosto de 2024, solicitud de notificación por estado (folio 752).
 - Estado No. 134 del 15 de agosto de 2024 (folios 753-754).
- ✓ Auto No. 615 del 27 de septiembre de 2024, Complementa la Imputación (folios 757-781).
- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0109002 del 27 de septiembre de 2024, solicitud de notificación (folio 782).
 - Oficio radicado SIGEDOC No. 2024IE0115165 del 11 de octubre de 2024, Devolución de diligencias de notificación personal (folios 784-800).

ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LOS VINCULADOS

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 610 de 2000, se le dio traslado del Auto No. 209 del 16 de abril de 2024 – de Imputación de Responsabilidad Fiscal a los Presuntos responsables fiscales vinculados al presente Proceso, así como a la Aseguradora vinculada en calidad de Terceros Civilmente Responsable, quienes presentaron los siguientes escritos:

- FELIX SUAREZ REYES**, notificado por aviso con radicado N0 2024EE0080596 del 02 de mayo del 2024, presento argumentos de defensa por medio de correo electrónico con radicado No 2024ER0133682 del 20/06/2024, actuación visible en el archivo denominado “BASE_DE_DATOS: SEMILLEROS_2018_-II_- _INVESTIGACIONES.pdf y “BASE_DE_DATOS: SEMILLEROS_2018_-II_- _DIRECCION DE INVESTIGACIONES.pdf argumentos de defensa Jorge Alejandro Camacho”. Se transcriben los apartes más importantes:

FELIX SUAREZ REYES, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.485.434, de condiciones civiles ya anotadas en el presente proceso, obrando en mi calidad de Rector de la Universidad Del Pacifico Nit, 835.000.300-4 y Contratante, en el trámite de la referencia, estando dentro del término legal otorgado en el auto No. 209 del 16 de abril de 2024, debidamente notificado en estados, me permito presentar alegatos de defensa frente al proceso Prf-80763-2019-34477, lo cual hago en los siguientes términos:

PRIMERO: con relación a la supuesta ausencia de supervisión por parte del director general de Investigaciones y la falta de controles en el área de Tesorería al momento de autorizar los pagos, genero la pérdida de recursos públicos en cuantía de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000).

El presente hallazgo se encuentra registrado en el Informe de auditoría a la Universidad del Pacifico vigencia 2018, identificado como Hallazgo No. 72419 Capacitaciones a grupos de investigación y semilleros Contrato No.016 de 2018.

A partir de estos hechos, la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, estimó que se habría generado un detrimento patrimonial al erario por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), correspondiente al valor contractual. En ese orden de ideas, se evidenció un incumplimiento de las obligaciones de Interventoría y Supervisión, definidas en el Art. 53 de la ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, así como una violación a lo definido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, a la ejecución contractual TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), suma correspondiente al valor total de lo contratado para la Capacitaciones a grupos de investigación y semilleros Contrato No.016 de 2018”.

Para la fecha que fungí como rector de la universidad del pacifico la directriz que impartí era que no se realizara un pago sin que los contrato tuvieran los informe de los contratista, informe supervisión o recibido a satisfacción y realizar por el área de tesorería una revisión de dicho expediente para su posterior aprobación y pago por parte de esa área y el suscrito, por eso es para mí extraño que en la carpeta que reposa en los archivos de la universidad no se encuentren los informes presentados por el contratista.

SEGUNDO: con relación a la “De acuerdo con las actuaciones que reposan en el expediente, el Despacho realizó las gestiones de notificación de los presuntos responsables fiscales y convocó a los mismos a presentar versión libre y espontánea de los hechos objeto de investigación; sin embargo, a pesar de las repetidas citaciones realizadas mediante los radicados Nos. 2021EE0078913 del 19/05/2021, 2021EE0078885 del 19/05/2021, 2021EE0124936 del 05/08/2021, 2021EE0079392 del 18/05/2023, 2020EE0079512 del 18/05/2023, 2023EE00g3164 del 08/06/2023, 2023EE0093181 del 08/06/2023, no comparecieron, motivo por el cual y con el fin de garantizar el debido proceso de los implicados, el Despacho procedió a designar Apoderado de Oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 610 de 2000; manifiesto lo siguiente no he recibido notificación alguna ni de manera personal ni por correo electrónico entiendo que la situación de inseguridad que viene presentando el distrito de buenaventura desde hace más de 7 año, dificulta que las empresas de servicio de mensajería no lleguen a los diferentes barrios, pero hasta el momento no he cambiado mi dirección de residencia.

TERCERO: Mediante Auto de Apertura Nro. 557 del 12 de noviembre de 2020, se cuestiona los pagos realizados a la Fundación Pacifico Futuro por parte de la Universidad del Pacifico los cuales se realizaron presuntamente a pesar de no verificar los soportes contractuales del contrato de Prestación de servicios No. 016 del 25 de enero del 2018, aun así, fueron pagados y liquidados como si se hubieran realizado, con lo cual se vulnero los fines esenciales del estado y con estos actos se afectó el patrimonio público, al no cumplirse con la finalidad con la que fueron comprometidos los recursos. Como lo manifesté en el punto primero se autorizó el pago porque al contrato se ejecutó de acuerdo al objeto del contrato y los lineamientos exigidos por el supervisor del contrato para satisfacer las necesidades de los estudiantes tanto de los grupos de investigación semilleros y comunidad estudiantil en general, pruebas que se anexaran a esta declaración.

Cuarto:" Llama la atención para esta colegiatura que el listado de estudiantes, aportado por la universidad del Pacifico es totalmente diferente a la relación o listados aportados por la Fundación Pacifico Futuro". Frente a este punto manifiesto que: Conos se determinó por parte de esta rectoría que cualquier estudiante podía asistir a la capacitación se anexaron dichos listados y no se enviaron la totalidad de la información ya que la representante legal en más de dos oportunidades las aporte a la universidad para solicitar que se realizara el pago.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

La Ley 610 de 2000, Artículo 4º. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto s/ resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal Para el establecimiento de responsabilidad fiscal

en cada caso, consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.

Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.

Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Artículo 6°. Daño patrimonial/ al Estado. Para efectos de esta Ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007

Artículo 7°. Pérdida, daño o deterioro de bienes. En los casos de pérdida, daño o deterioro por causas distintas al desgaste natural que sufren las cosas, de bienes en servicio o inservibles no dados de baja, únicamente procederá derivación de responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga relación directa con el ejercicio de actos propios de la gestión fiscal por parte de los presuntos responsables. En los demás eventos de pérdida, daño o deterioro de este tipo de bienes, el resarcimiento de los perjuicios causados al erario procederá como sanción accesoria a /a principal que se imponga dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por tales conductas o como consecuencia civil derivada de la comisión de hechos punibles, según que los hechos que originaron su ocurrencia correspondan a las fa/las que sobre guarda y custodia de los bienes estatales establece el Código Disciplinario Único o a los delitos tipificados en la legislación penal.

Artículo 42. Garantía de defensa de/ implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes da que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar

un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado. En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 131 de 2002.

Artículo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado da oficio con quien se continuará el trámite del proceso. Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la justicia conforme a la ley quienes no podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las sanciones legales correspondientes.

Artículo 49. Notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal. El auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará a los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieran y a la compañía de seguros si la hubiere, en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no estén representados por apoderado, surtido la notificación por edicto se les designará apoderado de oficio, con quien se continuar4 e/ trámite del proceso. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 43.

Artículo 50. Traslado. Los presuntos responsables fiscales dispondrán de un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación personal del auto de imputación o de la desfijación del edicto para presentar los argumentos de defensa mente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría.

Artículo 54. Fallo sin responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferir4 fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en e/ proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.

CONCLUSIÓN DE LA DEFENSA

Se puede determinar que no existe los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal toda vez que no existe un daño al patrimonio de estado y mucho menos se actuó con dolo y el nexa causal entre la conducta reprochable por el legislador al establecer las conductas constitutiva de responsabilidad toda vez que se actuó al momento de la ejecución y vigilancia del contrato de acuerdo a los fines del estado que por una deficiencia en el manejo del archivo de las personas que me

remplazaron en la institución al momento de la auditoría realizada a la universidad en el año 2019 fecha en la cual no me encontraba ejerciendo como rector de dicha universidad y al momento del contradictorio de las observaciones antes de convertirse en hallazgo la universidad no me informo para yo poder aportar la documentación requerida y desvirtuar tanto la observación y que no llegara a materializarse en un hallazgo fiscal.”

POSICION DEL DESPACHO RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR EL SEÑOR FELIX SUAREZ REYES

Respecto a cada uno de los argumentos el despacho considera lo siguiente:

“PRIMERO: con relación a la supuesta ausencia de supervisión por parte del director general de Investigaciones y la falta de controles en el área de Tesorería al momento de autorizar los pagos, genero la pérdida de recursos públicos en cuantía de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000).

El presente hallazgo se encuentra registrado en el Informe de auditoría a la Universidad del Pacífico vigencia 2018, identificado como Hallazgo No. 72419 Capacitaciones a grupos de investigación y semilleros Contrato No.016 de 2018.

A partir de estos hechos, la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, estimó que se habría generado un detrimento patrimonial al erario por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), correspondiente al valor contractual. En ese orden de ideas, se evidenció un incumplimiento de las obligaciones de Interventoría y Supervisión, definidas en el Art. 53 de la ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, así como una violación a lo definido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, a la ejecución contractual TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), suma correspondiente al valor total de lo contratado para la Capacitaciones a grupos de investigación y semilleros Contrato No.016 de 2018”.

Para la fecha que fungí como rector de la universidad del pacifico la directriz que impartí era que no se realizara un pago sin que los contrato tuvieran los informe de los contratista, informe supervisión o recibido a satisfacción y realizar por el área de tesorería una revisión de dicho expediente para su posterior aprobación y pago por parte de esa área y el suscrito, por eso es para mí extraño que en la carpeta que reposa en los archivos de la universidad no se encuentren los informes presentados por el contratista.”

De acuerdo con el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, Nivel Directivo, GRADO 21, el rector tenía entre sus funciones esenciales:

Funciones específicas:

1. *Ejercer la representación legal y la autoridad ejecutiva de la Universidad.*
2. *Dirigir y supervisar el proceso de autoevaluación institucional, así como el funcionamiento general de la universidad y presentar informe al consejo superior.*
3. *Someter a consideración del consejo académico, para su estudio y concepto, y al consejo superior, para su aprobación, los programas de gestión, los presupuestos anuales y los planos de desarrollo institucional.*
4. *Celebrar los contratos, convenios y expedir los actos necesarios para el logro de los objetivos de la universidad, previo el cumplimiento de los requisitos que por su naturaleza y cuantía establezca el estatuto respectivo y en lo no previsto en ellos, por lo contemplado en la ley y demás disposiciones fiscales y presupuestales.*
5. *Nombrar y remover al personal de la universidad con arreglo a las disposiciones correspondientes.*
6. *Presentar al consejo superior el proyecto de presupuesto de rentas y gastos y ejecutarlo una vez expedido.*
7. *Convocar y presidir al consejo académico.*
8. *Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias y ejecutar las decisiones del consejo superior.*
9. *Nombrar y remover al personal directivo, docente y administrativo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.*
10. *Expedir los manuales de funciones, requisitos y competencias laborales de los empleos y los de procedimientos administrativos.*
11. *Aplicar las sanciones disciplinarias que le corresponden por ley o reglamento.*
12. *Autorizar con su firma los títulos que la universidad confiera.*
13. *Velar por la preservación y acrecentamiento del patrimonio material, económico, cultural, y artístico de la universidad.*
14. *Rendir informes periódicos al consejo superior.*
15. *Como servidor público vinculado a la universidad del pacifico y como persona su comportamiento es y será honesto.*
16. *Como servidor público vinculado a la universidad del pacifico, cumplir con los deberes y obligaciones en forma ágil y oportuna con sentido de pertenencia y pertinencia.*
17. *Como servidor público vinculado a la universidad del pacifico, dar un trato igualitario a todos los ciudadanos, llevar a cabo acciones orientadas al interés general, sin privilegios o discriminaciones con personas o grupos.*
18. *Custodiar y cuidar la documentación e información que por su razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.*
19. *Tratar con respecto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.*
20. *Desarrollar la misión, principios y objetivos de la universidad del pacifico, consagrados en el Estatuto General.*
21. *Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.*
22. *Evaluar y controlar el funcionamiento general de la universidad del pacifico e informar de ello al consejo superior universitario.*

- 23.Liderar el proceso de planeación de la universidad, procurando la integración de las sedes y el desarrollo armónico de la universidad en su conjunto.
- 24.Ejecutar las decisiones del consejo superior.
- 25.Suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la universidad del pacifico atendiendo las disposiciones legales vigentes.
- 26.Designar y remover a los directores, el secretario general, los jefes de departamento y otras autoridades académicas y administrativas de conformidad con la ley, los estatutos y reglamentos de la universidad del pacifico.
- 27.Dirigir todo lo relacionado con la conservación y la administración del patrimonio de la universidad del pacifico.
- 28.Nombrar o contratar, previa autorización del consejo superior universitario, los asesores que requiera la universidad del pacifico para la ejecución cabal de sus programas académicos y administrativos, cuando la cuantía lo exija.
- 29.Conceder permisos y licencias al personal de la universidad del pacifico ateniéndose a las normas legales, estatutarias y reglamentarias.
- 30.Presentar los proyectos y planes de inversión a la oficina de planeación del Ministerio de Educación Nacional o el Departamento Nacional de Planeación dentro de los términos legales.
- 31.Designar directores y jefes de departamento en calidad de encargados para periodos no menos de cinco (5) días y no mayor de sesenta (60) días.
- 32.Presentar al consejo superior el estado de la ejecución presupuestal y anualmente el respectivo informe financiero.
- 33.Para la buena marcha institucional, el rector podrá delegar algunas de sus funciones en los directores, u otros funcionarios cuando lo considere necesario y sean administrativamente procedente.
- 34.Las demás funciones señaladas en la constitución, la ley. Los estatutos y reglamentos de la Universidad que no estén expresamente asignadas a otras autoridades.

Para este despacho se encuentra probado que el presunto FELIX SUAREZ REYES, faltando al deber en sus funciones esenciales, contenidas en el MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, en su **numeral 25** el cual establece “Suscribir contratos y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad del Pacifico, atendiendo las disposiciones legales vigentes”. Y **numeral 27** “Dirigir todo lo relacionado con la conservación y la administración del patrimonio de la Universidad del Pacifico”,


La conducta reprochada al señor SUAREZ REYES en su calidad de rector y ordenador del gasto consistió en realizar el pago total del contrato de prestación de servicios No. 016 del 25 de enero del 2018 a la Fundación Pacifico Futuro por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), sin que existiera soporte alguno del cabal cumplimiento del objeto contractual, esto aunado a que y no tomó las acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual, es por ello que le atribuye la responsabilidad.

SEGUNDO: con relación a la “De acuerdo con las actuaciones que reposan en el expediente, el Despacho realizó las gestiones de notificación de los presuntos responsables fiscales y convocó a los mismos a presentar versión libre y espontánea de los hechos objeto de investigación; sin embargo, a pesar de las repetidas citaciones realizadas mediante los radicados Nos. 2021EE0078913 del 19/05/2021, 2021EE0078885 del 19/05/2021, 2021EE0124936 del 05/08/2021, 2021EE0079392 del 18/05/2023, 2020EE0079512 del 18/05/2023, 2023EE00g3164 del 08/06/2023, 2023EE0093181 del 08/06/2023, no comparecieron, motivo por el cual y con el fin de garantizar el debido proceso de los implicados, el Despacho procedió a designar Apoderado de Oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 610 de 2000; manifiesto lo siguiente “no he recibido notificación alguna ni de manera personal ni por correo electrónico entiendo que la situación de inseguridad que viene presentando el distrito de buenaventura desde hace más de 7 año, dificulta que las empresas de servicio de mensajería no lleguen a los diferentes barrios, pero hasta el momento no he cambiado mi dirección de residencia.

Frente a estas aseveraciones es menester indicarle al señor SUAREZ REYES que este despacho remitió en dos oportunidades la citación para la notificación personal del auto de apertura, las cuales fueron recibidas, ante la no comparecencia por parte del vinculado se surtió la notificación del auto No. 557 del 12 de noviembre del 2020 mediante el cual se apertura el presente Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal mediante aviso No 115 del 22 de diciembre del 2020, el cual fue recibido el 28 de diciembre del 2020, tal como se puede observar en las siguientes certificaciones realizadas por la empresa de mensajería 4-72:

3/12/2020

Trazabilidad Web – 4-72



Trazabilidad Web

[Ver certificado entrega](#)

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 ; sigue las [instrucciones](#) de ayuda para habilitarlas

Find | Next

Guía No. RA290664908CO

Fecha de Envío: 26/11/2020 18:36:43

Tipo de Servicio: CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Cantidad: 1

Peso: 200,00

Valor: 7300,00

Orden de servicio: 13886593

Datos del Remitente:

Nombre: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORIA - CALI

Ciudad: CALI

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Dirección: calle 23 a NO. 3 - 95

Teléfono:

Datos del Destinatario:

Nombre: FELIX SUAREZ REYES-2020EE0148877

Ciudad: BUENAVENTURA

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Dirección: KR 57a CALLE 3a No. 2-48

Teléfono:

Carta asociada:

Código envío paquete:

Quien Recibe:

Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
26/11/2020 06:36 PM	PO,CALI	Admitido	
26/11/2020 07:32 PM	PO,CALI	En proceso	
27/11/2020 09:26 AM	PO,BUENAVENTURA	En proceso	
27/11/2020 08:00 PM	PO,CALI	Entregado	
28/11/2020 11:56 AM	PO,CALI	Digitalizado	

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles • Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

Este documento contiene: Página 31 de 128

3/12/2020

svc1.sipost.co/trazawebsip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=RA290664908CO



Entregando lo mejor de los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

472

7102 000

7777 000

PO.CALI OCCIDENTE

MITK Concesión de Correo

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Centro Operativo: PO.CALI

Orden de servicio: 13080593

Fecha Pre-Admisión: 26/11/2020 10:20:29

RA290664908CO

Remitente

Nombre/Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORIA - CALI

Dirección: Calle 23 a NO. 3 - 95

Referencia: 2020EE0148877

Teléfono: NIT/C.C/7.1890999067

Código Postal: 7777009

Ciudad: CALI

Depto: VALLE DEL CAUCA

Código Operativo: 7777009

Destinatario

Nombre/Razón Social: FELIX SUAREZ REYES-2020EE0148877

Dirección: KR 57a CALLE 3a No. 2-48

Tel: 7777009

Código Postal: 7102000

Ciudad: BUENAVENTURA

Depto: VALLE DEL CAUCA

Código Operativo: 7102000

Valores

Peso Físico(gms): 200

Peso Volumétrico(gms): 0

Peso Facturado(gms): 200

Valor Declarado: \$0

Valor Fletes: \$7.300

Costo de manejo: \$0

Valor Total: \$7.300

Dice Contener:

Observaciones del cliente:

Causal Devoluciones:

RE Refusado

NE No existe

NS No reside

NR No reclamado

DE Desconocido

CI Cerrado

NI No contactado

FA Fallado

AC Apartado Clausurado

FM Fuerza Mayor

Fecha de entrega: dd/mm/aaaa

Distribuidor: ORLANDO GONZALEZ SUAREZ

Gestión de entrega: 27 NOV 2020

77770097102000RA290664908CO


Principal: Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional: 01 8000 111 210 / Tel. contacto: (571) 4722000.

El usuario debe expresar constancia que tuvo conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web, 4-72 tendrá sus datos personales para probar la entrega del envío. Para ejercer algún reclamo:

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

17/12/2020

Trazabilidad Web - 4-72



Trazabilidad Web

[Ver certificado entrega](#)

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 ; sigue las [instrucciones](#) de ayuda para habilitarlas

1 of 1

Find | Next

Guía No. RA293054891CO

Fecha de Envío: 10/12/2020 17:48:43

Tipo de Servicio: CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Cantidad: 1

Peso: 200,00

Valor: 7300,00

Orden de servicio: 13919948

Datos del Remitente:

Nombre: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORIA - CALI

Ciudad: CALI

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Dirección: calle 23 a NO, 3 - 95

Teléfono:

Datos del Destinatario:

Nombre: FELIX SUAREZ REYES-2020EE0157124

Ciudad: BUENAVENTURA

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Dirección: CARRERA 57a CALLE 3a N° 2-48

Teléfono:

Carta asociada:

Código envío paquete:

Quien Recibe:

Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
10/12/2020 05:49 PM	PO.CALI	Admitido	
12/12/2020 07:00 PM	PO.CALI	Entregado	
15/12/2020 06:08 PM	PO.CALI	Digitalizado	

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles • Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

Este documento contiene: Página 33 de 128

17/12/2020

svc1.sipost.co/trazaweb/sip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=RA293054891CO



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

472

7102 470

Remite

Destinatario

Valores

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 107 908 662 917-9

Mesa Conexión de Control

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Centro Operativo : PO CALI

Fecha Pre-Admisión: 10/12/2020 11:44:57

Orden de servicio: 13919948

RA293054891CO

Nombre/ Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORIA - CALI

Dirección: Calle 23 a NO. 3 - 95

MT/C.C/T: 3899999067

Referencia: 2020EE0157124

Teléfono:

Código Postal: 760046450

Ciudad: CALI

Depto: VALLE DEL CAUCA

Código Operativo: 7777471

Nombre/ Razón Social: FELIX SUAREZ REYES-2020EE0157124

Dirección: CARRERA 57a CALLE 3a N° 2-48

Tel:

Código Postal: 764504557

Código Operativo: 7102470

Ciudad: BUENAVENTURA

Depto: VALLE DEL CAUCA

Peso Fisico(gra): 200

Peso Volumétrico(gra): 0

Peso Facturado(gra): 200

Valor Declarado: \$0

Valor Flete: \$7.300

Costo de manejo: \$0

Valor Total: \$7.300

Dice Contener:

Observaciones del cliente:

Causal Devoluciones:

RE Rehusado

NE No existe

NR No reside

NR No reclamado

DE Desconocido

DI Dirección errada

C1 C2

N1 N2

FA Fallecido

AC Apartado Clausurado

FM Fuerza Mayor

Cerrado

No contactado

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Macedonia Reyes

C.C. 29222210

Hora:

Fecha de entrega:

Distribuidor:

C.C. ORLANDO CORTES SINISTERPA

Gestión de entrega:

Ter

12 DIC 2020

7777 471

PO CALI

OCCIDENTE

Principal: Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional: 01 8000 111 210 / Tel. contacto: (571) 4722000.
El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web. 4-72 tratará sus datos personales para probar la entrega del envío. Para ejercer alg...

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.




AVISO DE NOTIFICACION No. 115.
Del 22 de Diciembre de 2020.

La Secretaría Común de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, con el objeto de cumplir con lo ordenado en el artículo 106 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, en concordancia con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a NOTIFICAR a:

Señor
FÉLIX SUAREZ REYES, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.485.434.

No. PROVIDENCIA A NOTIFICAR	Auto No. 557, de 12/11/2.020. Por el Cual se Apertura el Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario			
TIPO DE PROVIDENCIA	Apertura del Proceso de Responsabilidad.			
PROFERIDA POR	Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca			
PROCESO	PRF- 2019-34477.			
ENTIDAD AFECTADA	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA-			
SE LE HACE SABER QUE CONTRA LA PRESENTE DECISIÓN PROCEDE:				
PROCEDE	SI	NO	TÉRMINO (DÍAS):	DEPENDENCIA
Argumentos de Defensa:		X		Directivos Colegiados de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca Contraloría General de la Republica,
Recurso de Reposición:		X		
Recurso de Apelación:		X		
Otro:		X		
Fecha de envío de citación para notificación personal: 09 de Diciembre de 2020				
Acompaña al presente aviso copia íntegra del acto administrativo así:				
Anexos: Auto No. 557, de 12/11/2.020. Por el Cual se Apertura el Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario. PRF-80763-2019-34477- Entidad afectada: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA . Contenido en Dieciocho (18) folios Útiles.				

La presente notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Atentamente,

HELDER DO CARMO DIAZ.
Profesional Universitario.
Asignado a Secretaria Común.

El presente documento se suscribe con firma digitalizada o escaneada en atención al Artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo del 2020.
Proyectado por: Helder Do Carmo Diaz.
Revisado por:
Archivo: TRD 80763-344.
Notificaciones por AVISO.

4/1/2021

Trazabilidad Web - 4-72



Trazabilidad Web

[Ver certificado entrega](#)

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 ; sigue las [instrucciones de ayuda](#) para habilitarlas

Guía No. RA295704277CO

Fecha de Envío: 24/12/2020 16:28:53

Tipo de Servicio: CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Cantidad: 1

Peso: 200,00

Valor: 7300,00

Orden de servicio: 13953010

Datos del Remitente:

Nombre: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORIA- CALI

Dirección: calle 23 a NO. 3 - 95

Ciudad: CALI

Teléfono:

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Datos del Destinatario:

Nombre: FELIX SUAREZ REYES-2020EE0165034

Dirección: CARRERA 57a CALLE 3a No 2-48

Ciudad: BUENAVENTURA

Teléfono:

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Carta asociada:

Código envío paquete:

Quien Recibe:

Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
24/12/2020 04:26 PM	PO,CALI	Admitido	
24/12/2020 04:44 PM	PO,CALI	En proceso	
28/12/2020 08:36 AM	PO,BUENAVENTURA	En proceso	
28/12/2020 08:00 PM	PO,CALI	Entregado	
29/12/2020 06:25 PM	PO,CALI	Digitalizado	

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles • Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

Este documento contiene: Página 36 de 128

Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

472

7102 000

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 987 988 002 912-9

México, Correo de Colombia

CONTRATO CERTIFICADO NACIONAL

Código Operativo: PO.CALI Fecha Pre-Admisión: 23/12/2023 12:46:34

Orden de servicio: 19853010

RA295704277C0

Remitente

Destinatario

Valores

Nombre/Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORIA - CALI

Dirección: Calle 23 a NO. 3 - 95 NIT/C: 071.899996007

Referencia: 2023EE0165034 Teléfono: Código Postal: 76004650

Ciudad: CALI Depto: VALLE DEL CAUCA Código Operativo: 777471

Nombre/Razón Social: FELIX SUAREZ REYES-2023EE0165034

Dirección: CARRERA 57a CALLE 3a No 2-48

Tel: Código Postal: Código Operativo: 7102000

Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE DEL CAUCA

Peso Facturado(gms): 200

Peso Volumétrico(gms): 0

Peso Facturado(gms): 200

Valor Declarado: \$0

Valor Paga: \$7.500

Costo de manejo: \$0

Valor Total: \$7.500

Dice Contenedor:

Observaciones del cliente:

Causas Derivaciones:

RF Refusado

NI No existe

NR No reside

NR No reclamado

NR Desconocido

NR Dirección errada

CI Cerrado

CI No contactado

CI Fallado

CI Apartado Clausurado

CI Fuerza Mayor

Firma nombre y/o sello de quien recibe: *Macedonia Reyes*

C.C. *29218525* Hora:

Fecha de entrega: 28 DIC 2024

Distribuidor: *GUILLERMO CORTEZ SINDICATO*

C.C. *28 DIC 2024*

Gestión de entrega: *28 DIC 2024*

7774717102000RA295704277C0

7777 471

PO.CALI OCCIDENTE

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110511
Diag: 25G # 95A - 55 Bogotá D.C.
Linea Bogotá: (57-1) 472 2005
Linea Nacional: 01 8000 111 210
www.472.com.co

De la misma forma esta Gerencia en ejercicio del artículo 42 de la ley 610 del 2000, convocó al vinculado FELIX SUAREZ REYES para que rindiera versión libre y espontanea respecto de los hechos aquí investigados, sin embargo, a pesar de las repetidas citaciones realizadas, el señor FELIX SUAREZ REYES no compareció ante este despacho, motivo por el cual en cumplimiento del artículo 43 de la ley 610 del 2000 y con el fin de garantizar el derecho de derecho de defensa y contradicción se le designó un apoderado de oficio.

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles • Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

Este documento contiene: Página 37 de 128



Contraloría General de la República :: SGD 18-05-2023 10:49
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0079392 Fol: 1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80763 - GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE VALLE DEL CAUCA / PRISCILA CENEIDA
ALEGRIA ALEGRIA
DESTINO FELIX SUAREZ REYES / UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ASUNTO CITACIÓN PARA RENDIR VERSIÓN LIBRE PRF-2019-034477
OBS

2023EE0079392



Señor:
FELIX SUAREZ REYES
Carrera 57a calle 3ª No 2-48
Carrera 57a calle 3ª No 2-42
Barrio Cascajal Buenaventura
Email: fesuares@gmail.com

Cordial saludo.

Asunto: Citación para rendir versión libre PRF-2019-034477

Respetuosamente me dirijo a usted, con el fin de citarlo para ser escuchado en diligencia de versión libre y espontánea dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal **PRF- 80763-2019-34477**, que se adelanta por el presunto daño patrimonial ocasionado a la UNIVESIDAD DEL PACIFICO - UNPA, el día 25 de mayo de 2023 a las once de la mañana (11:00 a.m.)

Para la práctica de la citada diligencia, debe comparecer en este Despacho, ubicado en la Calle 23 A Norte No. 3-95 Piso 8 Edificio San Paolo, Barrio Versalles de la ciudad de Cali- Valle y puede ser asistida por un apoderado de confianza, sin que la falta del mismo constituya causal que invalide la actuación (Art. 42 Ley 610/2000).

Cordialmente,

PRISCILA CENEIDA ALEGRIA ALEGRIA
Profesional grado I
Copia: Expediente PRF- **PRF- 80763-2019-34477**
Proyectado por Priscila Alegria Alegria -Profesional Universitaria 0



**FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477**



Contraloría General de la República :: SGD 08-06-2023 09:04
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0093164 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80763 - GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE VALLE DEL CAUCA / PRISCILA CENEIDA
ALEGRIA ALEGRIA
DESTINO FELIX SUAREZ REYES / UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ASUNTO SEGUNDA CITACIÓN PARA RENDIR VERSIÓN LIBRE PRF-2019-034477
OBS

2023EE0093164



Señor:
FELIX SUAREZ REYES
Carrera 57a calle 3ª No 2-48
Carrera 57a calle 3ª No 2-42
Barrio Cascajal Buenaventura
Email: fesuarez@gmail.com

Cordial saludo.

Asunto: Segunda citación para rendir versión libre PRF-2019-034477

Respetuosamente me dirijo a usted, con el fin de citarlo para ser escuchado en diligencia de versión libre y espontánea dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal **PRF- 80763-2019-34477**, que se adelanta por el presunto daño patrimonial ocasionado a la UNIVESIDAD DEL PACIFICO - UNPA, el día 20 de junio de 2023 a las once de la mañana (11:00 a.m.)

Para la práctica de la citada diligencia, debe comparecer en este Despacho, ubicado en la Calle 23 A Norte No. 3-95 Piso 8 Edificio San Paolo, Barrio Versalles de la ciudad de Cali- Valle y puede ser asistida por un apoderado de confianza, sin que la falta del mismo constituya causal que invalide la actuación (Art. 42 Ley 610/2000).

Cordialmente,

PRISCILA CENEIDA ALEGRIA ALEGRIA
Profesional grado I

Copia: Expediente PRF- **PRF- 80763-2019-34477**
Proyectado por Priscila Alegria Alegria -Profesional Universitaria 0

“TERCERO: Mediante Auto de Apertura Nro. 557 del 12 de noviembre de 2020, se cuestiona los pagos realizados a la Fundación Pacífico Futuro por parte de la Universidad del Pacífico los cuales se realizaron presuntamente a pesar de no verificar los soportes contractuales del contrato de Prestación de servicios No. 016 del 25 de enero del 2018, aun así, fueron pagados y liquidados como si se hubieran realizado, con lo cual se vulnero los fines esenciales del estado y con estos actos se afectó el patrimonio público, al no cumplirse con la finalidad con la que fueron comprometidos los recursos. Como lo manifesté en el punto primero se autorizó el pago porque al contrato se ejecutó de acuerdo al objeto del contrato y los lineamientos exigidos por el supervisor del contrato para satisfacer las necesidades de los estudiantes tanto de los grupos de investigación semilleros y comunidad estudiantil en general, pruebas que se anexaran a esta declaración.”

El presente proceso se sustenta en que pese a la falta absoluta de soportes que den cuenta y certeza de que el objeto del contrato No 016 del 25 de enero del 2018 se hubiera realizado a cabalidad, fue pagado en su totalidad.

Una vez analizada la información reportada por la Universidad del Pacífico - UNPA, frente al control de gestión y resultados, igualmente para efectos de determinar el cumplimiento del objeto contractual, la realización de las obligaciones contractuales y los resultados obtenidos por la Universidad del Pacífico y beneficio o impacto para la comunidad educativa con los procesos contractuales, no se verificaron, actas e informes de supervisión, evidencias fotográficas, planillas de asistencias, o avance del proceso contractual. Encontrando que en este contrato suscrito en la vigencia 2018 del 25 de enero, la ejecución fue Cero, puesto que no existe evidencia que demuestre la ejecución idónea del objeto contratado.

Lo anterior por cuanto la Universidad del Pacífico no anexa los registros o bases de datos de las personas beneficiadas con la capacitación que demuestren el cumplimiento del objeto del contrato, siendo esta la razón de ser de la celebración de este contrato, sin embargo, adjunta los comprobantes de pago, cuentas de cobro y causación de pago realizados a la FUNDACION PACIFICO FUTURO.

Una vez valorados los medios de prueba, se pudo establecer la existencia de un daño al patrimonio público, el cual deviene de hacer un análisis de la documentación aportada por el grupo auditor y recopilada en la indagación preliminar adelantada. De la cuales se establece que no existe evidencia de informe del supervisor o interventor del contrato a pesar que su función es garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en la orden contractual, no existe un escrito donde se evidencie el cumplimiento por parte del contratista.

La situación detectada se debe a fallas en las funciones de seguimiento y control de la supervisión a la ejecución contractual, lo que conlleva a que se realicen pagos relacionados con contratos sobre los cuales no se aportan la totalidad de los soportes de su ejecución, causando detrimento al patrimonio público.

“Cuarto:” Llama la atención para esta colegiatura que el listado de estudiantes, aportado por la universidad del Pacífico es totalmente diferente a la relación o listados aportados por la Fundación Pacífico Futuro”. Frente a este punto manifiesto que: Conos se determinó por parte de esta rectoría que cualquier estudiante podía asistir a la capacitación se anexaron dichos listados y no se enviaron la totalidad de la información ya que la representante legal en más de dos oportunidades las apor to a la universidad para solicitar que se realizara el pago.”

Frente a este punto se tiene que ni la Universidad ni la fundación presentaron evidencia de la invitación para la comunidad en general, se tiene determinado por los estudios previos que dicha capacitación era solo para los grupos de investigación semilleros.

Después de notificado el Auto de imputación No. 209 del 16 de abril de 2024, el presunto FELIX SUAREZ REYES vinculado al presente proceso allega unos documentos, los cuales solicita sean incluidos en el proceso como pruebas; este despacho contesta de manera negativa debido a que dichos documentos ya reposan en el expediente y se valoraron en el momento procesal oportuno. Estos son:

- 1. Contrato suscrito entre la Universidad del Pacífico y la Fundación Pacífico Futuro. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44.
 - 2. Informe de ejecución del contrato presentado por la Fundación Pacífico Futuro con evidencias fotográficas. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44y en el cuaderno principal 2 a folios 212 al 223.
 - 3. Listado de participantes a la capacitación. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44 y en el cuaderno principal 2 a folios 220 al 223.
 - 4. Carta donde se informa a la comunidad estudiantil, que la capacitación es para todos los estudiantes. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44.
 - 5. Acta recibida a satisfacción por parte del supervisor. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44.
 - 6. Hojas de vida de los profesores que dictaron la capacitación. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44.
- **CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES**, notificado personalmente, Acta de Notificación del 11 de junio de 2024, posterior a ello envió documentos con radicado SIGEDOC No. 2024ER0130964 del 18 de junio de 2024, Se transcriben los apartes más importantes de su documento de defensa:

“CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.105.466, Director General de Investigaciones de Universidad del Pacífico, obrando en mi calidad de supervisor del Contrato No. 016 de 2018. Manifiesto lo siguiente:

Como supervisor del Contrato No. 016 de 2018, certifiqué que se realizó a satisfacción toda vez que recibí por parte del contratista las actividades realizadas de acuerdo al objeto contractual, cuando entregue el cargo que

ostentaba en la universidad entregue todos los expedientes con sus soportes de ejecución de los contratos en los cuales fui designado como supervisor, me es extraño que no reposen dichos soportes correspondientes a la ejecución, es importante anotar que para poder realizar los pagos por el área de tesorería solo se realizarían si tenían todos los soportes de ejecución.

Frente al listado se evidencia que solo se enviaron una parte de las personas que asistieron a la capacitación y se encuentran personas diferentes a los seminarios de investigación porque el rector ordeno que la capacitación se debía hacer para toda la comunidad estudiantil, en varias oportunidades entregue los informes al área de tesorería para que realizaran el pago del contrato”.

POSICION DEL DESPACHO RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR EL SEÑOR CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUÍÑONES

Respecto al argumentos presentados el despacho considera lo siguiente:

Sea lo primero indicar que el supervisor y el interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de la interventoría.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes a la Entidad contratante y al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

En este sentido, para profundizar sobre las funciones y responsabilidad de la supervisión, es preciso señalar que el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, establece una definición en los siguientes términos:

ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

En atención a lo anterior, resulta claro que el supervisor tiene la tarea de llevar a cabo un seguimiento, en principio técnico, que puede, por disposición de la Entidad contratante, ampliarse en el seguimiento administrativo, financiero, contable y hasta jurídico y ambiental.

Dentro de las obligaciones de la supervisión, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84 parágrafo 1º de la Ley 1474 de 2011 establece como falta, *“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”*.

De acuerdo con la cláusula novena del Contrato, la vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y financiera de la ejecución y cumplimiento del contrato eran ejercidos por la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, a través del Director de Investigaciones o quien haga sus veces, quien controlara su correcta ejecución y cumplimiento.

Como se puede observar, por parte del señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES como Director de Investigaciones y en calidad de supervisor del contrato materia de investigación, no hubo el mínimo cuidado, supervisión o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente contractual no se encontraron evidencias del seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero que debía realizar el Supervisor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas en la cláusula mencionada para la supervisión e interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que

habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del proyecto.

En su condición de supervisor del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución del contrato. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la supervisión, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo del señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES se encontraba una responsabilidad de supervisar y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de supervisión, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal.

Después de notificado el Auto de imputación No. 209 del 16 de abril de 2024, el presunto CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES vinculado al presente proceso allega unos documentos, los cuales solicita sean incluidos en el proceso como pruebas; este despacho contesta de manera negativa debido a que dichos documentos ya reposan en el expediente y se valoraron en el momento procesal oportuno. Estos son:

- 1. Informe de ejecución del contrato presentado por la Fundación Pacífico Futuro con evidencias fotográficas. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44y en el cuaderno principal 2 a folios 212 al 223.
 - 2. Listado de participantes a la capacitación. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44 y en el cuaderno principal 2 a folios 220 al 223.
 - 3. Acta recibida a satisfacción por parte del supervisor. Se encuentra en el cuaderno principal 1, DVD en el folio 44.
- **FUNDACION PACIFICO FUTURO**, notificada mediante notificación personal electrónica con radicado SIGEDOC No. 2024EE0128386 del 11 de julio de 2024, quien una vez vencido el termino de traslado **NO PRESENTO ARGUMENTOS DE DEFENSA.**

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Conforme a lo consagrado en la Ley 610 de 2000, el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos, con el objeto de lograr el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

La responsabilidad que se declara a través del mencionado proceso fiscal es de naturaleza esencialmente administrativa, pues lo que se juzga es la conducta de un servidor público o de una persona particular jurídica o natural que ejerce funciones públicas, o que maneja recursos públicos, por el incumplimiento de sus deberes o por incurrir en conductas prohibidas o irregulares que afecten o comprometan el manejo de los bienes o recursos públicos, lesionando, por ende, el patrimonio estatal. A su vez, la responsabilidad fiscal es de carácter patrimonial, ya que, en caso de declararse, el imputado deberá resarcir el daño causado al Estado con su gestión fiscal irregular; este resarcimiento se traduce en el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido.

Complementando lo anterior, únicamente puede predicarse responsabilidad fiscal cuando la conducta ejercida por el servidor público o particular se encuentre en el ámbito de la gestión fiscal, elemento esencial para declarar dicha responsabilidad, al tenor de lo normado en el numeral 5 del artículo 268 de la Carta Fundamental.

Es así como la gestión fiscal hace referencia a la gama de actividades económicas, jurídicas o tecnológicas que realizan las personas que administran fondos del Estado, actividades que se entienden en su integridad, deben cumplir los fines esenciales del Estado, y se deben desarrollar con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Conforme la norma en mención y Sentencia SU-620 de la Corte Constitucional, para que exista responsabilidad fiscal no basta que el presunto responsable sea gestor fiscal, sino que deben coexistir los elementos que la componen, estos son, una conducta antijurídica, entendiéndose como tal, el comportamiento contrario a derecho, cometido con dolo o culpa grave; la lesión al patrimonio público representado en pérdida, merma o deterioro a los bienes públicos que amerita ser reparado y que a su vez debe ser cierto, especial, anormal y cuantificable en su real magnitud; y el nexo causal entre la conducta y el daño, es decir, la relación determinante y condicionante de causa efecto.

En este orden de ideas, conforme lo consagrado en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 se prevé que se debe proferir fallo con responsabilidad fiscal cuando:

“(…) obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable”.

En este evento, culminado el período probatorio y no avizorando la presencia de causales que invaliden lo actuado, ni se ha configurado la prescripción o caducidad de la acción fiscal, procede este Cuerpo Colegiado a proferir decisión definitiva que en derecho corresponda, previo análisis de los elementos que comportan la responsabilidad fiscal.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

El Legislador ha previsto que la responsabilidad fiscal se estructura sobre tres elementos, a saber:

- a) Un daño patrimonial al Estado;
- b) Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y;
- c) Un nexo causal entre el daño y la conducta.

Sólo en el evento que confluayan estos elementos, es posible endilgar responsabilidad fiscal, los cuales deben encontrarse demostrados con el acervo probatorio existente y recaudado en el proceso.

En este orden de ideas, acorde a lo expuesto, esta Colegiatura procede a determinar si se encuentran reunidos los elementos de la responsabilidad fiscal necesarios para proferir el presente fallo, conforme las siguientes consideraciones.

DEL CASO CONCRETO

Mediante Auto de Apertura No. 557 del 12 de noviembre de 2020, se cuestiona los pagos realizados a la Fundación Pacífico Futuro por parte de la Universidad del Pacífico los cuales se realizaron a pesar de no existir los soportes contractuales del Contrato de Prestación de Servicios No. 016 del 25 de enero del 2018, aun así, fueron pagados y liquidados como si se hubieran realizado, con lo cual se vulnero los fines esenciales del estado y con estos actos se afectó el patrimonio público, al no cumplirse con la finalidad con la que fueron comprometidos los recursos, tal como se puede evidenciar en la ficha del contrato:

Tabla No.1. Ficha Contrato de Prestación de servicios No. 016 de 2018

DATOS DEL CONTRATANTE	CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		
	IDENTIFICACIÓN	NIT. 835.000.300-4		
	REPRESENTANTE LEGAL	FELIX SUAREZ REYES		
	CARGO	RECTOR		
	IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 16.485.434		
DATOS DEL CONTRATISTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR	LUGAR DE EJECUCION
	No. 016 DE 2018	25 DE ENERO DE 2018	\$30.000.000	Universidad del Pacifico - Km 13 vía al Aeropuerto Barrio el Triunfo Campus Universitario
	CONTRATISTA	FUNDACION PACIFICO FUTURO		
	IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.395.802-1		
	REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS		
	IDENTIFICACIÓN	C.C.No. XXXXXXX		
	PLAZO INICIAL	2 meses	DESDE: 26 DE ENERO DE 2018	HASTA: 26 DE MARZO DE 2018

	FORMA DE PAGO	La Universidad del Pacifico se compromete a pagar el valor del Contrato, supeditado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: Un anticipo por el 50% del valor del contrato después de la legalización del contrato que comprende la firma del contrato por las partes, pago de los timbres que correspondan por parte del contratista, presentación de los contratos de seguro en las modalidades de: anticipo, cumplimiento, calidad del servicio y apropiación de estas por parte de la Universidad del Pacifico y el 50% restante una vez se cumpla con el objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Certificación de recibo a satisfacción de los equipos por parte del supervisor del contrato. b) Presentación y radicación de la factura. c) Certificación de pago de aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma.			
	SUPERVISIÓN	Sera efectuada por parte de la Universidad a través del Director de Investigaciones o quien haga sus veces, quien controla su correcta ejecución y cumplimiento.			
	SUPERVISOR	CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES			
	CARGO	Director de Investigaciones			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA			
	CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
	OBJETIVO	Dictar capacitación en temas de economía regional frente al mundo globalizado, turismo, desarrollo y sociedad a los grupos de investigación y semilleros en las actividades de los programas de Administración en Negocios Internacionales y Tecnología en Gestión Hotelera y turística.			
	FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS DEL BALANCE (CREE)			
	ESTADO	LIQUIDADO			
PAGOS SOPORTE					
ITEM	FECHA ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	FUENTE FINANCIACIÓN
1	31/01/2018	34	ANTICIPO DEL 50%	\$15.000.000	CREE
2	08/08/2018	18054	50% RESTANTE	\$15.000.000	
TOTAL, PAGOS				\$30.000.000	

Una vez analizada la información reportada por la Universidad del Pacifico - UNPA, frente al control de gestión y resultados, así como para efectos de determinar el cumplimiento del objeto contractual, la realización de las obligaciones contractuales y los resultados obtenidos por la Universidad del Pacifico, no se verificaron, actas e informes de supervisión, evidencias fotográficas, planillas de asistencias, o avance del proceso contractual, constatándose que en este contrato suscrito en la vigencia 2018 el 25 de enero, la ejecución fue Cero, puesto que no existe evidencia que demuestre la ejecución idónea del objeto contratado.

Lo anterior por cuanto la Universidad del Pacifico no anexa los registros o bases de datos de las personas beneficiadas con la capacitación que demuestren el cumplimiento del objeto del contrato, siendo esta la razón, de ser, de la celebración de este contrato, sin embargo, adjunta los comprobantes de pago, cuentas de cobro y causación de pagos realizados a la FUNDACION PACIFICO FUTURO.

Obra en el expediente, el oficio de fecha del 26 de agosto del 2020, de la Oficina de Rectoría de la UNPA, donde dio respuesta a los puntos solicitados mediante oficio No. 2020EE0091873, de la siguiente manera:

- a. El listado de asistente a las capacitaciones de grupos de investigación y semilleros del Contrato No. 016 de 2018, de no contar con este listado emitir Certificación de la inexistencia.
- b. El estudio de la población a beneficiar con el proyecto de Fortalecimiento de los Grupos de Investigación y la identificación de esta.

Respuesta: Con respecto a este requerimiento, me permito informar que en los archivos institucionales no se encontró documentación para atender lo requerido en los puntos a y b, anteriores, por lo cual se CERTIFICA SU NO EXISTENCIA.

- c. Listado de asistente al “Diplomado en formulación y gestión de proyectos” del Contrato No. 016 de 2018, de no contar con este listado emitir Certificación de la inexistencia.
- d. Estudio de la población a beneficiar con el diplomado en formulación y gestión de proyectos” del Contrato No. 016 de 2018
- e. Soporte de la etapa precontractual, contrato y postcontractual del Contrato No. 016 de 2018.

Respuesta: No se encontró documentación para atender lo requerido en los puntos referentes a: c. Listado de asistencia, d. Estudio de población a beneficiar con el diplomado.

Con el Oficio con numero radicado SIGEDOC 5621031 de fecha 04 de junio del 2021, la Oficina de Rectoría de la UNPA, dio respuesta a los puntos solicitados mediante oficio No. 2021EE0078850, de la siguiente manera:

En atención y respuesta a su solicitud de información para atender el requerimiento realizado por la Contraloría citado en el asunto nos permitimos remitir en documentos adjuntos la siguiente información, tomada de las bases de datos y archivos de la dependencia: - Relación de los Grupos de Investigación y Semilleros de los programas académicos de Administración de Negocios Internacionales y Tecnología en Gestión Hotelera y Turística.

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 2018

Semillero	Nombre	Cedula	Código	Docente Líder
International Bussines	Michelle Liceth Arroyo Castro	1111803472	11600475	Héctor Fabio Murillo Castro
	Michelle Elizabeth Bonilla Castro	1036655867	11600478	
	Cristian Alexis Cruz Cataño	1112489687	11600484	
	Karen Margarita Quijano Godoy	1065821062	11600496	
	Jose Luis Ocoró Caicedo	1111795542	11700193	
	Michelle Liceth Arroyo Castro	1111803472	11600475	
	Michelle Elizabeth Bonilla Castro	1036655867	11600478	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Pacific’s Researchers	Byron Andres Caicedo	1111802332	21600060	Urbano Angulo Arboleda
	Juan Diego López Duque	1111817092	21600172	
	Valentina Pinilla Muñoz	1235140802	21600466	
	Karen Sayuri Granja Cachimbo	1111815214	21600143	
	Andrés Mauricio Riascos Bonilla	1235138048	21600296	
	Binta Imara Suarez Rodriguez	1006195450	21600469	
	Angelica Maria Buitrago Echavarria	1111769566	21600057	
	Saidy Brisely Angulo Obregon	1111817309	21600022	
	Manuel Hernán Angulo Sinisterra	1111816333	21600027	
	Hijan Alejandra Arias Capote	1235140827	21600034	
	Edwin Arvey Zamora Mosquera	1192911223	21600392	
	Eva Vanessa Rodríguez Mina	1111806433	21600314	
Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Golden Thinkers	Jennifer Diaz Suarez	1111811299	11700079	William Grueso Estacio
	Daniel Abadías Valencia Sinisterra	1192912581	11700292	
	Edward Stiven Torres Sinisterra	1193378916	11700279	
	Marlon Mauricio Angulo Montaño	1006201966	11700014	
	David Alberto Peña Camacho	1111820080	11700215	
	Michel Tatiana Ramos Mondragon	1235140937	11700227	
	Pablo Cesar Velez Herrera	1235138735	11700298	
	Brando Samir Revelo Quiñones	1006202616	11700234	
	Héctor Alfredo Bonilla Jimenez	1111790093	11700034	
	Eveling Jehan Salazar Prado	1111819328	11700260	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Encaminando Nuestros Ideales por un Sueño	Jackeline Cardona Florez	1116270983	1170054	Wilber Quiñonez Montaño
	Jhoana Marcela Villalba Jimenez	1006187685	11700302	
	Eduardo Aguirre Perea	1111805205	11700004	
	Brayan Stiven Arcila Mosquera	1007784358	11700020	
	Cristian Javier Caicedo Torres	1235139619	11700045	
	Kevin Giovani Ceballos Payán	1004214278	11700061	
	Iván Ramiro Giraldo Bernal	1235139321	11700106	
	Jesús Steban Giraldo Bernal	10006200316	11700106	
	Ilza Damaris Reales Sinisterra	1007795590	11700229	
	Geraldine Nicole Riascos Valencia	1111813890	11700243	
	Kelly Vanessa Rosero Mejía	1235140231	11700255	
	Yalis Michel Hinestroza García	1192917412	11700130	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Bussines Desploment	Maria Ela Hineztroza Estrada	1111811211	11600487	Wilber Quiñonez Montaño
	Nini Dalley Bolaños Rivas	1111787385	11600477	
	Karen Liceth Belalcazar	1151444692	11600476	
	Diana Marcela Alegría Escobar	1111810647	11600471	
	Maria Ela Hineztroza Estrada	1111811211	11600487	

SEMILLEROS TECNOLOGÍA GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA AÑO 2018

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Pacífico Turístico	Rosicela Solis Mora	10078496590	11600357	Nixon Arboleda
	Lesly Dallana Micolta Mosquera	1006195631	11600197	
	Yuli Fernanda Quintero Ibarguen	1193445259	21700383	
	Daifeni Montaña Zamora	1111810523	21700295	
	Luisa Gimara Angulo Garcia	99122310538	21700017	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Anadara	Leydi Jhoana González Hurtado	38.471.110	21500124	Nixon Arboleda
	María Elvia Klinger Riáscos	66.735.389	21500142	
	Sandra Milena Caicedo Obando	38.474.105	21500055	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Debates Turísticos	Omar Alberto Cesas Venté	1.111.815.127	21600083	Fidelia Mosquera
	Amalia Biojo Cabezas	1.111.746.769	21500039	
	Emerson Arley Cortes Celorio	1.111.810.531	11600093	Brayan Cristian Chavez Efren Venté

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Turco Ikadal	Ana Ruth Viveros	38.474.074	21700559	Sirley Vasques Chocó
	Katherina Riasacos Sanchez	1.111.816.122	21700463	
	Nhora Isabel Rodríguez Valencia	1.193.445.490	21700463	
	Heidy Danisa Riascos Angulo	1.193.531.058	21700414	
	Luis Carlos Vásquez Rentería	1.111.810.349	11600402	
	Luis Fernando Ibarguen Moña	1.111.810.997	21700240	
	Ana Ruth Viveros	38.474.074	21700559	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Pacífico y Gastronomía	Wendy Stefanny Angulo Girón	1.111.771.360	21700018	Selena Renteria Gomez
	Carlos Stiven Mondragon Angulo	1.006.202.700		
	Franklin Roa Murillo	1.111.757.676	21700453	
	Maira Alejandra Banguera	1.111.750.102	21700264	
	Evelyn Tatiana Valentierra	1.006.197.918	21700534	
	Carol Dayana Cuero Peña	1.235.288.005	21700146	
	Domitilo Montaña Montaña	1.111.768.240	21700290	
	Aracelly Vergara Congollino	31.611.829	21700547	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Centro Cultural Saberes del Pacífico	Yolima Advincula Sinisterra	1.006.190.813	11600001	Fidelia Mosquera
	Sandra Paola Bellaisac Portocarrero	1.151.197.082	21600452	
	Sury Dayana Correa Sinisterra	1.006.195.843	21600099	Brayan Cristian Chavez
	Claudia Teresa Cortes Cuero	29.231.759	21600451	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Sendero Turístico, Ibiwa	Ninfa Díaz Torres	1.151.445.739	21600107	Fidelia Mosquera
	Juan David Gamboa Valencia	1111804734	21600120	
	Helen Tatiana Lerma Cayola	1.111.812.400	21600167	
	Diego Fernando Portocarrero Vivas	1.111.774.282	21600266	Brayan Cristian Chavez

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Semilleros de Investigación Turística	Mayra Alejandra Cuero González	1.111.814.749	11600104	Maria Eugenia Lopez Londoño
	Mario Alfonso Angulo Valencia	1.111.785.185	11600024	
	Liceth Zoraida Riaño Ramos	31.587.424	11600305	
	Marlyn Cortés Quintero	1.111.796.970	11600098	
	Maria Eugenia Lopez Londoño	31.602.077		
	Mayra Alejandra Cuero González	1.111.814.749	11600104	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Turismo Creativo y Patrimonio Cultural	Edwar Ivan Góngora	1.111.811.730	11800184	Erlendy Ibarbo Perlaza
	Gloria Milena Montaño	1.004.511.195	11800278	
	Leonar Enrique Palacios	11.118.166.078	11800326	
	Juan David Mosquera Suarez	1.111.818.087	11800298	
	Cintia Dayana Tenorio	1.007.561.977	11800460	
	Carmen Melissa Ramirez Angulo	1.111.812.965	11800353	
	Cristian Johan López Arboleda	1.111.738.379	11800261	
	Wendy Briseth Medranda	1.107.080.483	11800261	

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Inteligencia Activa	Yina Paola Perlaza	1.111.743.655	21700368	Erika Ibarguen
	Lorena Renteria B.	1.111.813.368	21700406	
	Yarling Cuero	1.111.812.691	21700149	
	Lina Yijian Rivas	1.007.795.623	21700448	
	Gustavo Mestizo	1.111.816.427	3157393023	
	Lina Michel Riascos Renteria	1.111.829.992	21700930	
	Jency Lorena Riascos	1.192.912.953	21700432	
	Diego Fernando Valencia Aponza	1.111.743.772	21700519	
	Aracely Vergara	31.611.829	21700547	
	Jackeline Riascos Paredes	1.111.809.181		

Semillero	Estudiante	Cédula	Código	Docente Líder
Semillero de Investigación Turística	Yolima Advincula Sinisterra	1.006.190.813		María Eugenia López Londoño
	Sury Dayana Correa Sinisterra	1.006.195.843		
	Elvira Andra Quiñonez	1.111.770.706		
	Maria Fernanda Garcia	1.111.803.838		
	Maria Eugenia Lopez Londoño	31.602.077		

Se hace claridad que la información remitida sobre los Semilleros de Investigación no incluye datos de dirección, teléfono ni correo electrónico; de los Grupos de Investigación y además solo se incluye el teléfono del coordinador del Grupo.

Mediante el oficio con radicado 5620946 de fecha 19 de agosto del 2021, el representante legal de la Fundación Pacífico Futuro, proporciono la siguiente información:

(...)

El nuevo representante legal fue el director del proyecto y la persona que realizo la ejecución de los contratos con la universidad y también puede dar fe



FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477

de la ejecución de dicho contratos y entrega de los documentos y evidencias de acuerdo con la exigencia de los supervisores y los funcionarios del área.

Nosotros como Fundación le demostramos a la Universidad frente al contrato de implementación de la oferta educativa que el presupuesto y los documentos requeridos para que la universidad presentara al ministerio de educación para la aprobación de la oferta educativa no era el suficiente y los documentos debían ser expedidos por el Consejo Superior, los coordinadores misionales y académicos y otros requisitos que se necesitaban para presentar al ministerio. La fundación solo realizaría la encuesta para levantar la muestra de la oferta que posiblemente podía ofrecer a los nuevos bachilleres del distrito de Buenaventura.

FUNDACION PACIFICO FUTURO -FUNDAFUTURO

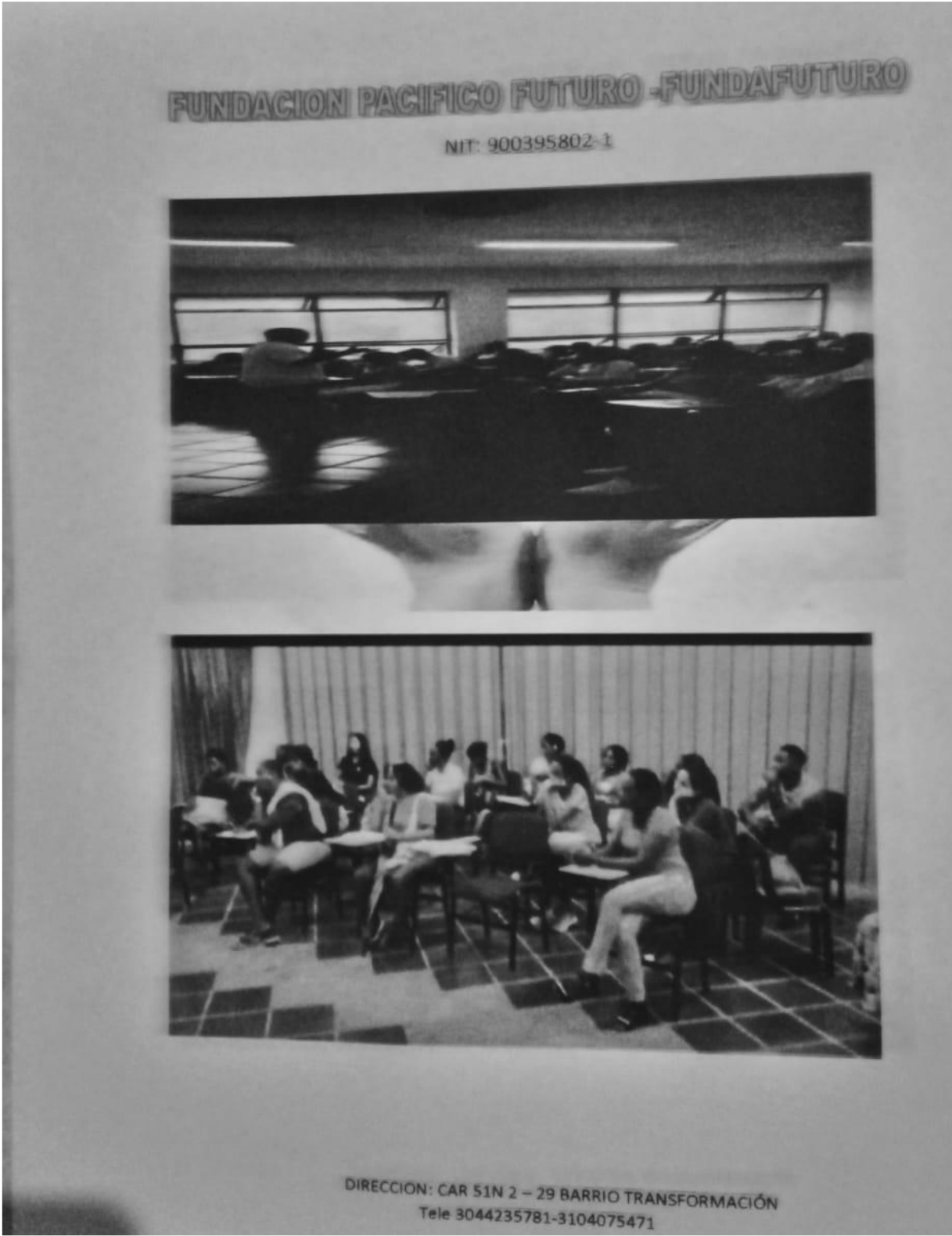
NIT: 900395802-1

ANEXO DE FOTOGRAFÍA DEL CONTRATO NO 016 DEL 25 DE ENERO DEL 2018

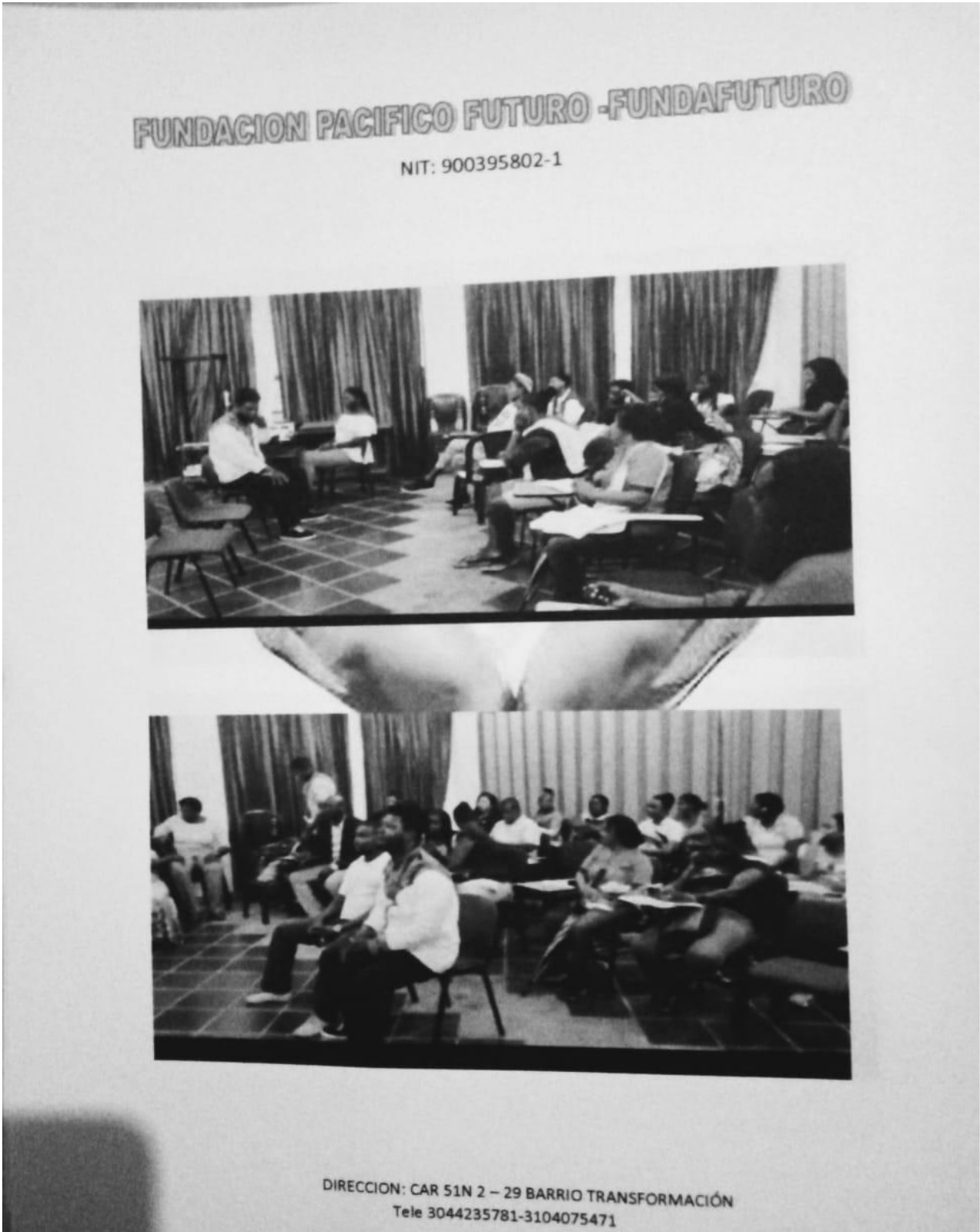


DIRECCION: CAR 51N 2 – 29 BARRIO TRANSFORMACIÓN
Tele 3044235781-3104075471

FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477



FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477



FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477





FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477

FUNDACION PACIFICO FUTURO -FUNDAFUTURO

NIT: 900395802-1

LISTA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A LA CAPACITACIÓN EN TURISMO, DESARROLLO Y SOCIEDAD CAPACITACIÓN EN ECONOMÍA REGIONAL FRENTE AL MUNDO GLOBALIZADO		
Numero de documento	Nombre	Firma
11929132195	Albornoz caicedo Anny	Albornozcaicedo
10039244533	Anchico Castillo Diana	AnchicoCastillo
1006342500	Angulo Garces franci	Angulogarces
1203401158	Michel alexander Mendez	Michelalexander
1153238830	Angie lonara Pothila	Angielonara
1007040703	Garces tamara	garcestamara
1004204305	Hellen maria Garces	Hellenmaria
1005187203	Adriana Guerrero	AdrianaGuero
1115543655	Hilary rentena	hilaryrenteno
11529124034	Michel palaza	Michel palaza
1536465145	Granda Patricia	Granda Patricia
1115443211	Chonono Natalia	natalio Chonono

DIRECCION: CAR 51N 2 – 29 BARRIO TRANSFORMACIÓN
Tele 3044235781-3104075471



FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477

FUNDACION PACIFICO FUTURO -FUNDAFUTURO

NIT: 900395802-1

LISTA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A LA CAPACITACIÓN EN TURISMO, DESARROLLO Y SOCIEDAD CAPACITACIÓN EN ECONOMÍA REGIONAL FRENTE AL MUNDO GLOBALIZADO		
Numero de documento	Nombre	Firma
1111788948	Antony Salazar Vargara	Antony Salazar
1007795702	Simonea micolter	Simonea micolter
1111813846	Gambra yroni Renteria	Gambra yroni
1193479357	Heidy talana beltran	Heidy talana
1066192269	Maria jose Valencia	Maria jose
1111751069	John brainer gomez	John brainer
1115448033	Kelly Shirley paredes	Kelly Shirley
1006204816	Lucy fernanda Munillo	Lucy fernanda
1006191235	Luisa cristina Alvarado	Luisa cristina
1192967682	Veronica Quintero	Veronica Quintero
1006190930	Yazury wendy Quintero	Yazury wendy
1028038282	John eduardo quintero	John eduardo

DIRECCION: CAR 51N 2 – 29 BARRIO TRANSFORMACIÓN
Tele 3044235781-3104075471

FUNDACION PACIFICO FUTURO -FUNDAFUTURO

NIT: 900395802-1

LISTA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A LA CAPACITACIÓN EN TURISMO, DESARROLLO Y SOCIEDAD

CAPACITACIÓN EN ECONOMÍA REGIONAL FRENTE AL MUNDO GLOBALIZADO

Numero de documento	Nombre	Firma
1028161484	Ana delia Solis U.	Ana delia
1007844194	Johan Camilo Ochoa	Johan Camilo
1192921761	Ana Isabel Moreno	Ana Isabel
1077634200	Medaly yisen Moribon	Medaly Yisen
1061112224	Sebastian Hurtado	Sebastian Hurtado
1028161456	Yajaira Alejandra Solis	Yajaira Alejandra
1193040848	Diana Natalia Uruas	Diana Natalia
1111757856	Margarita Elena Sanchez	Margarita Elena
1084060667	Juan Jose Cabrera	Juan Jose Cabrera
1193557809	Stefania Ortiz Rioseco	Stefania Ortiz
1192917058	Heidy Lorena Segura	Heidy Lorena
1006194803	Deivis Steward Rodriguez	Deivis Steward
1006386928	Maria del mar Rodriguez	Maria del mar R.
1193209837	Jonathan angulo	Jonathan angulo
1130937049	Yani yulisa perez	Yani Yulisa

DIRECCION: CAR 51N 2 - 29 BARRIO TRANSFORMACIÓN

Tele: 3044235781-3104075471



FALLO No. 016 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80763-2019-34477

FUNDACION PACIFICO FUTURO -FUNDAFUTURO

NIT: 900395802-1

LISTA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A LA CAPACITACIÓN EN TURISMO, DESARROLLO Y SOCIEDAD CAPACITACIÓN EN ECONOMÍA REGIONAL FRENTE AL MUNDO GLOBALIZADO		
Numero de documento	Nombre	Firma
1006198768	Valencia gina nuño	Valencia gina
1193599266	María Camila bravo	María Camila
1192908240	Cabeza erick montano	Cabeza erick
1006189768	Emil dayana bres	Emil dayana
1006189328	Juan jose dominguez	Juan jose
1007850595	Yessica michel gagula	Yessica michel
1235138889	Mayera yuliett	Mayera yuliett
1006198458	Fernanda michel	Fernanda michel
100750137	Ingrid melissa camacho	Ingrid melissa
1007064082	Ulison michel mosquera	Ulison michel
1006189768	Yennifer maria garcia	Yennifer maria
1235138370	Dhili sorah alvarez	Dhili sorah
1028161213	Gisela Juliana angulo	Gisela Juliana

DIRECCION: CAR 51N 2 – 29 BARRIO TRANSFORMACIÓN
Tele 3044235781-3104075471

Llama la atención para esta colegiatura que el listado de estudiantes, aportado por la universidad del Pacífico es totalmente diferente a la relación o listados aportados por la Fundación Pacífico Futuro.

Una vez valorados la integralidad del material probatorio allegado y recaudado durante el presente tramite, se pudo establecer la existencia de un daño al patrimonio público, el cual consiste en la lesión que sufrió la Universidad del Pacífico en su patrimonio al haberse realizado el pago de la totalidad del contrato de Prestación de servicios No. 016-2018 del 25 de enero del 2018, pese a que no existen soportes que permitan establecer el cabal cumplimiento de la integralidad del objeto contractual.

Este despacho evidencia que los listados de estudiantes beneficiados con las capacitaciones aportados mediante el Oficio con radicado SIGEDOC 5621031 de fecha 04 de junio del 2021 de la Oficina de Rectoría de la universidad del pacifico y los aportados con Oficio con radicado 5620946 de fecha 19 de agosto del 2021 por la señora Maricel Valencia Castro en calidad de representante legal de la FUNDACION PACIFICO FUTURO, son absolutamente diferentes, los estudiantes relacionados por la fundación no concuerdan con los reportados por la universidad, circunstancia que permite colegir el incumplimiento total del Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de 2018, estableciéndose con certeza la existencia de un detrimento patrimonial al Estado en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) - sin indexar.

De las pruebas legalmente recaudadas y valoradas, este despacho deduce la existencia de un detrimento por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) - sin indexar, Cuantía correspondiente al valor total del Contrato de Prestación de Servicios No 016 de 2018, toda vez que sin que se hubiera realizado el pleno cumplimiento del objeto contractual y sin contar con los soportes, fue pagado mediante los comprobantes de egreso No.034 del 31 de enero de 2018 por valor de QUINCE MILLONES (\$15.000.000) como anticipo y el No.18054 del 8 de agosto de 2018 por valor de QUINCE MILL.ONES (\$15.000.000), para un total de TREINTA MILLONES DE PESOS,(\$30.000.000), valor total del contrato.

Bajo tales connotaciones, esta Colegiatura concluye que se encuentra demostrada certeramente la existencia del daño como elemento objetivo o material de responsabilidad fiscal, cumpliéndose el primero de los predicados exigidos por la Ley 610 de 2000 para declarar responsabilidad fiscal.

DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y SU CUANTIFICACIÓN

El daño es uno de los conceptos más elaborados y trabajados de la doctrina perteneciente a la responsabilidad contractual y extracontractual, motivo por el cual, son múltiples los autores que lo han querido abordar, con el objeto de determinar su límite y extensión.

Así tenemos como el doctor Tamayo lo define como “...el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extramatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por

alguien diferente de la víctima”¹; mientras que el profesor De Cupis señala que el daño no es más que un “...perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable”². Por su parte, el doctor Henao lo identifica como “...la aminoración patrimonial de la víctima”³, y el tratadista Escobar Gil, lo determina como “...todo detrimento, menoscabo o perjuicio que a consecuencia de un acontecimiento determinado experimenta una persona en sus bienes espirituales, corporales o patrimoniales, sin importar que la causa sea un hecho humano, inferido por la propia víctima o por un tercero, o que la causa sea un hecho de la naturaleza”⁴

De esta forma tenemos, que, a pesar de la pluralidad de definiciones, todas ellas conservan unos elementos comunes los cuales se refieren al detrimento sufrido por el patrimonio de la víctima, como consecuencia de una acción u omisión ilícita generada por un tercero independiente a la víctima. Así pues, podemos señalar que el daño es el menoscabo o detrimento producido al patrimonio de la persona natural o jurídica o, a la persona en su ser mismo ya sea patrimonial o físico o, moral o extrapatrimonial, por parte de un tercero, producto de una conducta ilícita.

Si bien existe una homogeneidad respecto al concepto del daño, no cabe duda que éste en materia fiscal contempla unos elementos especiales que lo diferencian del daño en materia penal o civil.

Así, se requiere de un sujeto cualificado para su producción, ya que debe ser causado por un gestor fiscal (o un agente que “contribuya” “con ocasión” de la gestión fiscal al detrimento del erario de acuerdo a su “conexidad próxima y necesaria”). Así mismo, la acción dañosa, debe recaer única y exclusivamente sobre los bienes del Estado, escapando a su examen el menoscabo que sufran otros recursos que no sean los públicos.

De lo anterior, se sigue que el sujeto pasivo del daño sea el Estado, concebido este como persona jurídica en cuanto sujeto de derechos y obligaciones, respecto del cual y por esa condición, sólo es posible indemnizar el daño patrimonial o físico, y no el extrapatrimonial o moral.

Definido en abstracto el daño, debe pasar esta instancia a establecer si el mismo se encuentra o no estructurado en el presente asunto.

INDEXACION

Establecido el daño patrimonial al Estado, procede el Despacho a dar cumplimiento al artículo 53 de la Ley 610 de 2000, que a la letra señala:

“Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los periodos correspondientes”:

¹ TAMAYO JARAMILLO, Javier. *Tratado de responsabilidad civil*. Vol. II. Bogotá: Legis, 2013, p. 326.
² DE CUPIS, A. El daño. *Teoría general de la responsabilidad civil*, cit., p. 81.
³ HENAO PÉREZ, Juan Carlos. *El daño*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 84.
⁴ ESCOBAR GIL, Rodrigo. *Responsabilidad contractual de la administración pública*, Bogotá, Ed. Temis, 1989, p. 165.

Debe tenerse en cuenta que la indemnización ha de ser íntegra, o lo que es lo mismo, el daño debe repararse plenamente, con el objeto de tratar de recomponer los recursos fiscales que han sido sustancia del detrimento, lo cual supone que los dineros que deban ser repuestos al erario deban ser indexados con el fin de que el resarcimiento sea integral.

Esto ya que al Estado no se le puede imponer como castigo la pérdida del valor constante del dinero por el paso del tiempo, siendo éste la víctima del daño causado a sus recursos, ni tampoco puede enriquecerse sin justa causa persiguiendo réditos distintos a los sufridos por el daño que se le ha producido, más si se tiene en cuenta que la naturaleza del proceso fiscal es resarcitoria y no sancionatoria, por lo cual, no se puede buscar por medio del proceso fiscal el cobro de sanciones como pretexto para la indemnización de los perjuicios causados. Debe entonces resarcirse dicho perjuicio con el valor del capital afectado más la indexación del mismo, con el fin de que pueda determinarse una reparación integral del daño a los recursos públicos.

Sobre el tema de la indemnización plena la doctrina ha señalado que:

“La enunciación de la presente regla es simple: la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso. Dicho de otra manera, se puede afirmar que “se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño”, o, en palabras de la Corte constitucional colombiana, que “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite”. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento”.

Ahora bien, la indexación ha sido definida por la doctrina como un sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.

El Consejo de Estado, define la indexación de las obligaciones como una figura que nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de tal manera que, en aplicación de principios, tales como, el de equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos.

Por otra parte, la ley 610 de 2000, declara la obligación de resarcir los daños de forma indexada, efecto que ha sido extendido a la cesación y archivo del PRF, según criterio del Consejo de Estado, al señalar que:

“...el resarcimiento del perjuicio supone la configuración de la responsabilidad, de manera que la procedencia del auto de archivo a que se refiere el artículo 47, cuando se acredita el resarcimiento pleno del perjuicio, implica necesariamente que se ha producido un fallo con responsabilidad fiscal y por ello el artículo 53 de la ley 610 impone la obligación al funcionario competente de determinar en él, en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizado a valor presente al momento de la decisión, según los índices del precio al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes”.

Por su parte, el final del artículo 53 de la ley 610 de 2000 dispone que:

“...Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes”.

Situación que ha sido corroborada por la Corte constitucional que al respecto ha señalado:

“El objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, esa reparación debe enmendar integralmente los perjuicios que se hayan causado, esto es: incorporando el daño emergente, el lucro cesante y la indexación que da lugar el deterioro del valor adquisitivo de la moneda. En materia de responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”.

Así mismo en la sentencia C-382 de 2008 cuyo Magistrado Ponente fue el doctor RODRIGO ESCOBAR GIL, sobre este tópico la Corte manifestó:

“Cabe precisar sin embargo que “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado más no puede superar ese límite.”. Y no podría ser de otra manera, ya que, en caso de ordenar una indemnización superior al monto total del daño, generaría un enriquecimiento sin causa. La indemnización por los daños materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que incluya el valor del bien perdido o lesionado (daño emergente), y el monto de lo que se ha dejado de percibir en virtud de tal lesión (lucro cesante), a lo cual se suma la indexación correspondiente que, para el caso de la responsabilidad fiscal, se halla prevista en el inciso segundo del artículo 53 de la ley 610 de 2000. Tal indemnización no puede incluir otros factores que desborden el carácter indemnizatorio de la sanción”.)

Así las cosas, es claro para este Despacho que las sumas para que se tengan como total e íntegramente restituidas deben contener la indexación de las mismas, que para el caso en concreto debe ser contabilizadas a partir del momento en que salieron del Estado hasta el momento en que estos se restituyeron o a la fecha del fallo, para lo cual se tomará la fórmula que de antaño ha utilizado el Consejo de Estado para determinar la indexación y que se transcribe a continuación:

$$R = Rh * \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}}$$

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico del daño investigado (Rh), por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria del pago) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Para el presente caso tenemos:

Rh (\$30.000.000) * índice final (143,83– octubre 2024) / índice inicial (99,30 – 8 de agosto 2018) = Valor presente (\$43.453.172)

Al aplicar la fórmula anterior e indexar el daño patrimonial avaluado en \$30.000.000, el valor del detrimento patrimonial se establece en CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$43.453.172)⁵ a la fecha.

La cuantía del Daño Patrimonial Público indexada es entonces la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$43.453.172)

DE LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL

DE LA GESTION FISCAL Y DE LA CONDUCTA

Una vez establecido lo relativo al daño, es momento para seguir con el examen propuesto en la ley 610 de 2000, con el objeto de establecer si hay lugar para deducir responsabilidad fiscal respecto de los vinculados a esta actuación, para lo cual se analizará la conducta de los mismos, previo análisis del concepto de culpa en materia fiscal.

Al referirnos a la conducta, ineludiblemente hacemos referencia a las acciones atribuidas a las personas naturales de carácter público o, las jurídicas o naturales del régimen privado, que tengan a cargo el desarrollo de la gestión fiscal, entendida esta, en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000.

No obstante, lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, las personas que “con ocasión” de la gestión fiscal ocasionen un detrimento patrimonial al Estado, también son objeto del reproche fiscal. Dicha expresión ha sido interpretada por la Corte Constitucional en la Sentencia 840 de 2001 M.P. Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA, como los actos que “...comporten una

⁵ Actualizado de acuerdo al IPC de marzo de 2021

relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal...”

En consecuencia, la conducta que interesa examinar a la hora de determinar la existencia o no de la Responsabilidad Fiscal, es aquella realizada por una persona natural o jurídica, pública o privada, a título de culpa grave o de dolo y que tenga el dominio de la gestión fiscal o tenga una conexidad próxima y necesaria con ella.

Ahora bien, y como se ha mencionado anteriormente, la conducta sobre la que se califica el daño es la gravemente culposa o la dolosa cometida por el agente que realice gestión fiscal. Respecto a la culpa grave, y de acuerdo con la decisión adoptada por la Corte Constitucional, debe remitirse a lo establecido en la ley civil.

La primera define la culpa grave como aquella que: “consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”.

La doctrina especializada en el tema de la responsabilidad fiscal ha señalado que existe culpa fiscal, es decir culpa grave, cuando el agente, actúa en contravía de los principios de la gestión fiscal, o de los principios de la función pública, al exponer lo siguiente:

“En tal sentido hemos considerado que en lo relativo a la determinación de la responsabilidad fiscal, la culpa se concreta en la violación de tales principios o en la violación de los principios rectores de la responsabilidad administrativa, considerando además que los encargados de tal gestión tienen la carga probatoria de acreditar la diligencia y cuidado en el desarrollo de la misma”.

Igualmente, se ha indicado al respecto que, no basta con la simple violación de los Principios Constitucionales, de la gestión fiscal y de la función administrativa, ya que además debe verificarse el incumplimiento de un deber legal directo, al señalar que:

“La culpa fiscal implicará siempre la violación de los principios de gestión fiscal, pero la determinación de la misma exigirá siempre, identificar una norma imperativa que imponga un deber de conducta al gestor fiscal, norma cuyo incumplimiento permitirá determinar con certeza la existencia de culpa fiscal”.

Por lo anterior, resulta claro para este Despacho, que la culpa en materia de responsabilidad fiscal plantea dos asuntos, por un lado la determinación del incumplimiento de un deber objetivo (establecido en la ley) por parte del agente fiscal, según lo dispuesto en los artículos 6, 90 y 123 de la Constitución Política, los cuales prescriben la responsabilidad de los funcionarios públicos, estudio que además debe realizarse bajo el criterio principalista dispuesto en la Norma Superior en los artículos 209 y 267, respecto de los principios fiscales y de la función pública. Por otra parte, supone el examen del contenido volitivo decantado en el gestor fiscal, el cual está condicionado tanto por la estructura y conocimientos que este posee, como por la exteriorización de su comportamiento.

Ahora bien, en lo que respecta al dolo, este ha sido entendido como la intención positiva de infligir un daño.

Así las cosas, tenemos que a la hora de probar la culpa grave en el proceso de responsabilidad fiscal debemos identificar la norma (entendida esta en el sentido lato) desatendida por el sujeto pasivo del proceso fiscal, como primera medida, para posteriormente realizar una valoración respecto del grado de intensidad que implica tal inobservancia a fin de establecer si esta vulnera la atención que un hombre de cuidado debe de tener en sus propios negocios como medida comparativa.

Por otro lado, la prueba del dolo se encuentra condicionada al establecimiento de la existencia del elemento volitivo, o intencional obrante en el individuo causante del daño, y del elemento cognitivo o de conocimiento de la ilicitud de su obrar, para que proceda la calificación de la conducta del presunto responsable fiscal a título de dolo.

DEL NEXO CAUSAL

El artículo 5° de la Ley 610 de 2000, dispone que el daño, la conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal, son requisitos necesarios, para deducir la responsabilidad fiscal respecto a una persona natural, o jurídica, de origen privado, que ejerza funciones de gestión fiscal.

Sobre el nexo causal se ha dicho que este “...consiste en la imputación de un resultado a la conducta o acción humana bien sea con fundamento en factor subjetivo de atribución (culpa o dolo) o con base en el riesgo”.

Tenemos, entonces, que este se refiere a la relación causal que se predica entre la conducta y el daño, la cual puede ser, no solo de origen fáctico, sino que también puede darse en el plano jurídico. Esto en la medida que la producción de un resultado no sólo se determina mediante la realización de una acción positiva en el mundo exterior, sino que también puede ser producto de una manifestación intelectual que proyecta sus resultados mediante la modificación del mundo sensible.

Así mismo, la causa de un resultado no solo es atribuible al ejercicio de una acción positiva o intelectual, sino que también puede producirse por la omisión de una atribución jurídica por parte del obligado de la misma, la cual trae como consecuencia la producción del resultado lesivo del daño.

El nexo causal, a lo largo de su desarrollo dogmático y jurisprudencial, ha tratado de ser explicado a través de diferentes teorías dentro de las cuales se cuenta como las más influyentes: i) la teoría de la equivalencia de las condiciones; ii) la teoría de la causa próxima; iii) la teoría de la causalidad adecuada y iv) la teoría de la imputación objetiva, siendo la más aplicada en la actualidad, para los casos de responsabilidad civil contractual y extracontractual, la teoría de la causalidad adecuada.

Esta última teoría, al igual que la equivalencia de las condiciones, toma en cuenta todas las condiciones que pudieron originar el daño, para luego mediante la aplicación de las reglas de la experiencia y de la sana crítica, así como la aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, establecer de

manera argumentada, cuál de todas estas, resulta la más adecuada para la producción del daño.

No obstante, en la medida que los resultados provenientes de la omisión no pueden ser explicados por la inacción, ya que la transformación física no puede provenir de una no acción pura, debe predicarse, en estos casos, que la relación entre la conducta y el daño, se da por medio de la imputación o atribución jurídica de un resultado y no mediante el examen del hecho físico productor del resultado, ya que en este caso no existe una acción física.

Así, en todo caso, ya sea producto de una acción o de una omisión, debe establecerse que la misma es el origen del daño, ya como condición adecuada o como imputación de la omisión, para poderse deducir responsabilidad fiscal respecto al presunto responsable, siendo imposible fallar en contra de este cuando tal elemento carezca de demostración.

SOBRE EL ANALISIS DE LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL RESPECTO DE LOS IMPLICADOS EN ESTA ACTUACION

Presentado el marco dogmático de estos temas dentro del proceso de responsabilidad, procede el Despacho a analizar la conducta desplegada por parte de los implicados en esta actuación y el nexo causal establecido entre sus actuaciones u omisiones y el daño producido.

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR FELIX SUAREZ REYES Y EL NEXO CAUSAL CON EL DAÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.485.434, en su calidad de Rector para el periodo en el cargo desde 02/05/2017 hasta 15/02/2019. De acuerdo con el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, Nivel Directivo, GRADO 21, tenía entre sus funciones esenciales:

Funciones específicas:

1. *Ejercer la representación legal y la autoridad ejecutiva de la Universidad.*
2. *Dirigir y supervisar el proceso de autoevaluación institucional, así como el funcionamiento general de la universidad y presentar informe al consejo superior.*
3. *Someter a consideración del consejo académico, para su estudio y concepto, y al consejo superior, para su aprobación, los programas de gestión, los presupuestos anuales y los planos de desarrollo institucional.*
4. *Celebrar los contratos, convenios y expedir los actos necesarios para el logro de los objetivos de la universidad, previo el cumplimiento de los requisitos que por su naturaleza y cuantía establezca el estatuto respectivo y en lo no previsto en ellos, por lo contemplado en la ley y demás disposiciones fiscales y presupuestales.*
5. *Nombrar y remover al personal de la universidad con arreglo a las disposiciones correspondientes.*
6. *Presentar al consejo superior el proyecto de presupuesto de rentas y gastos y ejecutarlo una vez expedido.*
7. *Convocar y presidir al consejo académico.*

8. *Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias y ejecutar las decisiones del consejo superior.*
9. *Nombrar y remover al personal directivo, docente y administrativo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.*
10. *Expedir los manuales de funciones, requisitos y competencias laborales de los empleos y los de procedimientos administrativos.*
11. *Aplicar las sanciones disciplinarias que le corresponden por ley o reglamento.*
12. *Autorizar con su firma los títulos que la universidad confiera.*
13. *Velar por la preservación y acrecentamiento del patrimonio material, económico, cultural, y artístico de la universidad.*
14. *Rendir informes periódicos al consejo superior.*
15. *Como servidor público vinculado a la universidad del pacifico y como persona su comportamiento es y será honesto.*
16. *Como servidor público vinculado a la universidad del pacifico, cumplir con los deberes y obligaciones en forma ágil y oportuna con sentido de pertenencia y pertinencia.*
17. *Como servidor público vinculado a la universidad del pacifico, dar un trato igualitario a todos los ciudadanos, llevar a cabo acciones orientadas al interés general, sin privilegios o discriminaciones con personas o grupos.*
18. *Custodiar y cuidar la documentación e información que por su razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.*
19. *Tratar con respecto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.*
20. *Desarrollar la misión, principios y objetivos de la universidad del pacifico, consagrados en el Estatuto General.*
21. *Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.*
22. *Evaluar y controlar el funcionamiento general de la universidad del pacifico e informar de ello al consejo superior universitario.*
23. *Liderar el proceso de planeación de la universidad, procurando la integración de las sedes y el desarrollo armónico de la universidad en su conjunto.*
24. *Ejecutar las decisiones del consejo superior.*
25. *Suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la universidad del pacifico atendiendo las disposiciones legales vigentes.*
26. *Designar y remover a los directores, el secretario general, los jefes de departamento y otras autoridades académicas y administrativas de conformidad con la ley, los estatutos y reglamentos de la universidad del pacifico.*
27. *Dirigir todo lo relacionado con la conservación y la administración del patrimonio de la universidad del pacifico.*
28. *Nombrar o contratar, previa autorización del consejo superior universitario, los asesores que requiera la universidad del pacifico para la ejecución cabal de sus programas académicos y administrativos, cuando la cuantía lo exija.*
29. *Conceder permisos y licencias al personal de la universidad del pacifico ateniéndose a las normas legales, estatutarias y reglamentarias.*
30. *Presentar los proyectos y planes de inversión a la oficina de planeación del Ministerio de Educación Nacional o el Departamento Nacional de Planeación dentro de los términos legales.*

- 31. *Designar directores y jefes de departamento en calidad de encargados para periodos no menos de cinco (5) días y no mayor de sesenta (60) días.*
- 32. *Presentar al consejo superior el estado de la ejecución presupuestal y anualmente el respectivo informe financiero.*
- 33. *Para la buena marcha institucional, el rector podrá delegar algunas de sus funciones en los directores, u otros funcionarios cuando lo considere necesario y sean administrativamente procedente.*
- 34. *Las demás funciones señaladas en la constitución, la ley. Los estatutos y reglamentos de la Universidad que no estén expresamente asignadas a otras autoridades.*

La conducta de este funcionario consistió en realizar los pagos del contrato de prestación de servicios No. 016 del 25 de enero del 2018, con la Fundación Pacífico Futuro, por TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), sin existir soporte del cumplimiento del objeto contractual y no tomó las acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual.

Por la condición de Ordenador del gasto era su obligación de conformidad con los artículos 32 y 40 del Acuerdo Superior 031 del 11 de julio de 2017 en el cual se establece:

“ARTICULO 32.- RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES DE LA CONTRATACIÓN: *El gestor de la Universidad responderá disciplinaria, civil, patrimonial y penalmente por sus acciones y omisiones en la gestión contractual, en los términos que señala la Constitución y de la Ley”.*

“ARTICULO 40.- RESPONSABILIDAD DEL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: *Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no le conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que ocasionen”.*

Igualmente según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el principio de responsabilidad conlleva lo siguiente:

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas *y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. (Negrilla fuera de texto).*

El señor SUAREZ REYES en calidad de rector de la universidad del pacifico para la época de ocurrencia de los hechos tenía bajo su responsabilidad la dirección de la acción administrativa de la universidad y la tutela sobre las actividades de supervisión sobre el Contrato objeto de reproche en el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Pese a que no se cumplió con la totalidad del objeto ni con la finalidad del contrato, el señor FELIX SUAREZ REUYES en ejercicio del cargo de rector realizó el pago total del contrato.

En este sentido y acorde a lo expuesto, al señor FELIX SUAREZ REYES, le competía, en virtud de las disposiciones legales como representante de la Entidad contratante y ordenador del gasto, ejercer actividades jurídicas y económicas de planeación, ejecución, seguimiento y liquidación del proceso contractual.

De igual manera, las actuaciones de los servidores públicos en la contratación estatal están sujetas al cumplimiento de los principios, deberes y responsabilidades consagrados en la Ley 80 de 1993 que al respecto consagra:

ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. *Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

ARTÍCULO 4º DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. *Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:*
1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. (...) 4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan (...) 5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia.

ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. *Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)

ARTÍCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. *Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo*

ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. *En virtud de este principio:*
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ella (...)

4°. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

ARTÍCULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por el señor FELIX SUAREZ REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.485.434, en su calidad de Rector, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

En estas condiciones se puede afirmar que no se cumplió con el objeto contractual, y el servicio pagado no cumple el fin para el cual fue suscrito, realizándose una inversión ineficaz de recursos de carácter público, así mismo con todo lo anteriormente planteado, queda establecida la calidad de **gestor fiscal** que ostentaba el señor **FELIX SUAREZ REYES** para la época de ocurrencia de los hechos.

El nexo causal entre el daño y la culpa implica que el daño o perjuicio deberá ser inequívocamente el resultado de la culpa de su autor, o lo que es igual, entre ambos elementos debe existir una relación determinante y condicionante de causa-efecto de manera que el daño será el resultado de una conducta activa u omisiva.

Este Despacho determina que existe responsabilidad fiscal con respecto al señor **FELIX SUAREZ REYES** con relación al daño, al haber realizado el pago de la totalidad del valor del Contrato de Prestación de servicios No. 016 del 25 de enero del 2018, pese a que este no se cumplió cabalmente, en este orden de ideas, lo que se reprocha por esta Gerencia Colegiada al señor **FELIX SUAREZ REYES** como ordenador del gasto y representante legal, es haber realizado el pago total del contrato sin el cabal cumplimiento del mismo, contraviniendo lo determinado en la minuta contractual sobre la forma de pago de este, permite el desembolso de la totalidad de los recursos pactados, pese a no haber recibido la Universidad la contraprestación total de los mismos, omitió el deber de adoptar y ejecutar las medidas necesarias para lograr la debida ejecución del contrato en cuestión, toda vez tenía bajo su responsabilidad velar por el cumplimiento contractual, efectuando seguimiento a la labor de supervisión designada al Director General de Investigaciones. En suma, con fundamento en las cláusulas del Contrato, cumplimiento de funciones como rector y finalidades de la contratación estatal, tenía a su cargo la inmediata dirección y responsabilidad de hacer cumplir las normas de contratación, las cláusulas Contractuales y garantizar la oportuna ejecución de este.

Debe calificarse la conducta a título de CULPA GRAVE O DE DOLO.

El artículo 63 del Código Civil Colombiano distingue tres especies de culpa:

"Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."

La Ley 678 de 2011 consagra en su artículo 5°. *"Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado"* y en el artículo 6°. **"Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culpable cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones"**. (negrilla y subrayado extra texto)

En razón a lo anteriormente expuesto, se observa que dentro de la presente investigación reposan soportes probatorios que a la luz jurídica permiten tener certeza que la gestión fiscal desplegada por el presunto FELIX SUAREZ REYES en el ejercicio de las funciones como rector de la Universidad del Pacifico, se realizó sin el acatamiento de los principios regentes consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, para la función administrativa de eficiencia, eficacia y responsabilidad, de los principios establecidos en el artículo 3 Ley 610 de 2000 y de la Ley 80 de 1993, por lo que este despacho considera que el mencionado incurrió en conductas antijurídicas, configurándose la culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone:

"Artículo 118. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.

(...)

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:
d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos;" (Subrayado extra texto).

Entonces siendo la causa del daño estudiado, las acciones y omisiones mencionadas a través de esta providencia, se tiene por sentado la existencia del nexo causal por la relación de causalidad de la conducta desplegada por el señor FELIX SUAREZ REYES, Gestor Fiscal directo y el daño patrimonial ocasionado,

razón por la cual, una vez establecidos los elementos de la responsabilidad fiscal, debe fallarse con responsabilidad fiscal en su contra por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) más el valor de la indexación, para un total de **CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$43.453.172)** a la fecha. La responsabilidad es solidaria, como lo dicta el artículo 119 Ley 1474 de 2011:

ARTÍCULO 119. Solidaridad. *En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.*

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.105.166, en calidad de Director General de Investigaciones, en su calidad de supervisor e Interventor. Respecto a la Supervisión e Interventoría del Contrato de prestación de servicios No. 016 de 2018, es necesario precisar lo siguiente:

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: “...*su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia.*

Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“ARTÍCULO 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

- Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

“ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:
(...)

- 9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”*

- Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“ARTÍCULO 14º.- DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”

- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

“ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

(...)

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

(...)

4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

Artículo 82. de la ley 1474 de 2011. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Sea lo primero indicar que el supervisor e interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de la interventoría.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes a la Entidad contratante y al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y

cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

En este sentido, para profundizar sobre las funciones y responsabilidad de la supervisión, es preciso señalar que el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, establece una definición en los siguientes términos:

ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. *La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.*

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

En atención a lo anterior, resulta claro que el supervisor tiene la tarea de llevar a cabo un seguimiento, en principio técnico, que puede, por disposición de la Entidad contratante, ampliarse en el seguimiento administrativo, financiero, contable y hasta jurídico y ambiental.

Dentro de las obligaciones de la supervisión, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84 parágrafo 1º de la Ley 1474 de 2011 establece como falta, “No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”.

De acuerdo con la cláusula novena del Contrato, la vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y financiera de la ejecución y cumplimiento del contrato eran ejercidos por la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, a través del Director de Investigaciones o quien haga sus veces, quien controlara su correcta ejecución y cumplimiento.

Como se puede observar, por parte del Director de Investigaciones en calidad de supervisor designado del contrato objeto de investigación, es decir el señor TOBAR QUIÑONES, no hubo el mínimo cuidado, supervisión o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con

la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado.

Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente contractual no se encontraron evidencias del seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero que debía realizar el Supervisor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

Las responsabilidades establecidas en la cláusula mencionada para la supervisión e interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del proyecto.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo del señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES se encontraba una responsabilidad de supervisar y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de supervisión, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar en calidad de supervisor e interventor del contrato aquí investigado.

El reproche fiscal se encuentra sustentado en que el señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES, quien actuó como supervisor e interventor, se encontraba la representación de la Universidad del Pacífico y por tanto tenían a su cargo la salvaguarda de los recursos públicos invertidos con el fin de que estos cumplieran el cometido estatal encomendado.

En criterio de este Despacho la Conducta desplegada por el señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES, Director General de Investigaciones y SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios No 016 de 25 de enero de 2018 no corresponde con la conducta que una persona regularmente emplea en el desarrollo de sus negocios propios; por el contrario, inobservó las mínimas obligaciones que debía ejercer como garante de los recursos públicos, razón por la cual se configura el título de culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone: *“Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.”*

Por lo expuesto, la conducta desplegada por el señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES, Director General de Investigaciones y Supervisor del contrato de prestación de servicios No 016 de 25 de enero de 2018, se puede

calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

El nexo causal entre el daño y la culpa implica que el daño o perjuicio deberá ser inequívocamente el resultado de la culpa de su autor, o lo que es igual, entre ambos elementos debe existir una relación determinante y condicionante de causa-efecto de manera que el daño será el resultado de una conducta activa u omisiva.

Este Despacho determina que existe responsabilidad fiscal con respecto al señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES, en relación al daño, al haber permitido que se realizara el pago de la totalidad del valor del contrato de prestación de servicios No. 016 de 2015, pese a que se tenía evidencia de actas de supervisión y seguimiento al mismo, este contrato no se cumplió cabalmente, en este orden de ideas, lo que se reprocha por esta Gerencia Colegiada al señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES como supervisor, es haber aceptado la culminación de las actividades planteadas en el contrato, sin la cabal realización de las mismas, contraviniendo lo determinado en la minuta contractual sobre la forma de pago de este, permite el desembolso de la totalidad de los recursos pactados, pese a no haber recibido la Universidad, la contraprestación total de los mismos, omitió el deber de adoptar y ejecutar las medidas necesarias para lograr la debida ejecución del contrato en cuestión, toda vez tenía bajo su responsabilidad velar por el cumplimiento contractual, efectuando seguimiento directo a la labor de supervisión designada como Director de Investigaciones. En suma, con fundamento en las cláusulas del Contrato, cumplimiento de funciones como supervisor y finalidades de la contratación estatal, tenía a su cargo la inmediata supervisión y responsabilidad de hacer cumplir las normas de contratación, las cláusulas Contractuales y garantizar la oportuna ejecución de este.

Debe calificarse la conducta a título de CULPA GRAVE O DE DOLO.

El artículo 63 del Código Civil Colombiano distingue tres especies de culpa:

"Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."

La Ley 678 de 2011 consagra en su artículo 5°. "Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado" y en el artículo 6°. **"Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culpase cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones".** (negrilla y subrayado extra texto)

En razón a lo anteriormente expuesto, se observa que dentro de la presente investigación reposan soportes probatorios que a la luz jurídica permiten tener certeza que la gestión fiscal desplegada por el presunto CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES en el ejercicio de las funciones como supervisor, se realizó sin el acatamiento de los principios rectores consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, para la función administrativa de eficiencia, eficacia y responsabilidad, de los principios establecidos en el artículo 3 Ley 610 de 2000 y de la Ley 80 de 1993, por lo que este despacho considera que el mencionado incurrió en conductas antijurídicas, configurándose la culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone:

*"Artículo 118. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.
(...)
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:
c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas."* (Subrayado extra texto).

Entonces siendo la causa del daño estudiado, las acciones y omisiones mencionadas a través de esta providencia, se tiene por sentado la existencia del nexo causal por la relación de causalidad de la conducta desplegada por el señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES, Gestor Fiscal directo y el daño patrimonial ocasionado, razón por la cual, una vez establecidos los elementos de la responsabilidad fiscal, debe fallarse con responsabilidad fiscal en su contra por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) más el valor de la indexación, para un total de **CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$43.453.172)** a la fecha. La responsabilidad es solidaria, como lo dicta el artículo 119 Ley 1474 de 2011:

ARTÍCULO 119. Solidaridad. *En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.*

• **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR FUNDACION PACIFICO FUTURO**, En calidad de contratista representada legalmente por EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS identificado con cedula No. 16.489.555 o por quien actualmente

haga sus veces, suscribió el Contrato de prestación de servicios No. 016 de 2018, por lo tanto tenemos que como extremo contractual es beneficiario de unos recursos públicos con ocasión de una interrelación con la actividad administrativa del Estado, y se convierte en colaborador de la función desempeñada por este, a través de un Contrato, con lo cual se somete a las reglas de derecho público para la contratación estatal y las finalidades constitucionales de sus recursos propendiendo por el beneficio general y social, principio que en la Ley 80 de 1993 adquiere un papel central, pues el Estado garantiza a los particulares su beneficio económico o utilidad al momento de contratar, pero conforme a una carga social y destinación concreta de los recursos públicos, y también dentro de la etapa contractual presenta una posición a la administración que somete a su consideración y aprobación bajo los principios o condicionamientos que la misma le imponga, como precio, plazo y demás que son objeto del ámbito contractual, pero no se permite bajo ninguna circunstancia provecho indebido o abusivo de la relación contractual que llegue a atentar o menoscabar los recursos públicos.

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: “...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia.

Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles.

Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que, por delegaciones especiales, adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11).

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación, los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de

1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- ❖ Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

- ❖ Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

“ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

(...)
9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”

- ❖ Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando

las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”

- ❖ Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

“ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

(...)
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

(...)
4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

“Artículo 5o. De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:

1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.

(...).
2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entorpecimientos que pudieran presentarse.

(...).
4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.”

Las citadas normas nos conducen a establecer de forma clara e inequívoca que el Contratista además de ser un tercero que entra a cumplir con la ejecución contractual en una Entidad, se convierte en un colaborador del Estado en su función social, generando a este una obligación universal de lograr el cometido que es, el generar un beneficio social a través del contrato estatal celebrado, por consiguiente; debe actuar de la mejor manera para el cumplimiento del logro, de tal suerte que analizados las pruebas documentales y técnicas que se aportaron al Expediente, podemos advertir que la FUNDACION PACIFICO FUTURO no ejecutó las actividades para las que estaba obligado en virtud de la relación contractual, derivadas del mencionado Contrato, de acuerdo con la cláusula segunda se obligaba a: 1. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA CLAUSULA PRIMERA 2. Cumplir con las especificaciones establecidas en la propuesta presentada 3. Prestar los servicios de capacitación establecidos en el contrato, conforme a las especificaciones de estas: objetivos, intensidad horaria, desarrollo de temas 4. responder por la buena calidad de las capacitaciones dictadas 5. Desplegar sus mejores conocimientos y aptitudes en el desarrollo de la actividad 6. Entregar informe cuando lo requiera el supervisor 7. Contar con el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual 8. Obrar con lealtad y buena fe en la etapa precontractual y contractual, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato. 9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley

con el fin de hacer u omitir algún hecho. Obligaciones que la Entidad contratante incumplió.

Es menester precisar en que los contratistas del Estado son sujetos de control fiscal cuando quiera que manejan bienes o fondos públicos y tal gestión se materializa en el hecho de que el contratista al entrar a negociar con la administración, los términos y obligaciones del contrato y comprometerse específicamente a cumplir con lo pactado, ejerce actos de conexidad próxima con el ejercicio de la gestión fiscal, máxime si se tiene en cuenta que se le entregaron unos recursos en calidad de pagos, que son de carácter público, razón por la cual, su manejo y custodia debe estar inmerso dentro de las obligaciones de un verdadero gestor fiscal, ya que son unos recursos públicos que han sido destinados para cumplir un fin social y como tal le asistía el deber de actuar con lealtad y honestidad a lo largo de toda su participación como Contratista, observando los principios de transparencia, economía y responsabilidad en aras de salvaguardar los recursos del Estado.

La conducta del Contratista se materializa al momento de celebrar el Contrato estatal y de recibir unos recursos en calidad de pago, los cuales, si no son invertidos en su totalidad en el objeto contractual da lugar a derivarle responsabilidad fiscal, al apropiarse de unos recursos públicos que legalmente no le pertenecían por cuanto no se verificaron, actas e informes de supervisión, evidencias fotográficas, planillas de asistencias, o avance del proceso contractual. Encontrando que en este contrato suscrito en la vigencia 2018 del 25 de enero, la ejecución fue Cero, puesto que no existe evidencia que demuestre la ejecución idónea del objeto contratado.

De acuerdo con el material probatorio obrante en el Expediente, la FUNDACION PACIFICO FUTURO faltó a su deber de obrar con lealtad respecto de la Entidad a la cual prestó sus servicios como contratista, lo que generó un provecho económico injustificado para sí, un menoscabo económico del Estado. Se considera pues, una actitud antieconómica en contra de los fines del Estado. Con dicha conducta transgredió toda la normatividad tendiente al adecuado manejo de los recursos públicos y también las propias de la administración y la moralidad pública.

De acuerdo con lo anterior y confirmada la relación contractual entre la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO y la FUNDACION PACIFICO FUTURO Contratista, este Despacho considera que para la FUNDACION PACIFICO FUTURO, se configura el título de culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone: *“Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.”*

En su calidad de Contratista es responsable a título de culpa grave, por el detrimento patrimonial causado a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, por haber recibido a satisfacción el pago del mismo pese a no haber realizado la debida ejecución del contrato, puesto que desde que se inició la ejecución del contrato no ha justificado la inversión de estos recursos en las actividades que se contrataron, por consiguiente se le imputará en su contra responsabilidad fiscal, lo anterior

teniendo en cuenta el incumplimiento del Contrato y de la normatividad en materia contractual.

El nexo causal entre el daño y la culpa implica que el daño o perjuicio deberá ser inequívocamente el resultado de la culpa de su autor, o lo que es igual, entre ambos elementos debe existir una relación determinante y condicionante de causa-efecto de manera que el daño será el resultado de una conducta activa u omisiva.

Este Despacho determina que existe responsabilidad fiscal con respecto a la FUNDACION PACIFICO FUTURO, en relación al daño, al haber recibido el pago de la totalidad del valor del contrato de prestación de servicios No. 016 de 2018, pese a no haberlo cumplió cabalmente, en este orden de ideas, lo que se reprocha por esta Gerencia Colegiada a la FUNDACION PACIFICO FUTURO como Contratista, es haber recibido el pago total del contrato sin el cabal cumplimiento del mismo, contraviniendo lo determinado en la minuta contractual sobre la forma de pago de este, recibe el desembolso de la totalidad de los recursos pactados, pese a no haber recibido la Universidad, la contraprestación total de los mismos, omitió el deber de adoptar y ejecutar las medidas necesarias para lograr la debida ejecución del contrato en cuestión, toda vez tenía bajo su responsabilidad el cumplimiento contractual, efectuando las actividades a su cargo. En suma, con fundamento en las cláusulas del Contrato, cumplimiento de actividades y finalidades de la contratación estatal, tenía a su cargo el deber de cumplir las normas de contratación, las cláusulas Contractuales y garantizar la oportuna ejecución de este.

Debe calificarse la conducta a título de CULPA GRAVE O DE DOLO.

El artículo 63 del Código Civil Colombiano distingue tres especies de culpa:

"Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."

La Ley 678 de 2011 consagra en su artículo 5°. *"Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado"* y en el artículo 6°. **"Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culpase cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la**

Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones". (negrilla y subrayado extra texto)

En razón a lo anteriormente expuesto, se observa que dentro de la presente investigación reposan soportes probatorios que a la luz jurídica permiten tener certeza que la gestión fiscal desplegada por el presunto FUNDACION PACIFICO FUTURO en el ejercicio de las funciones como Contratista, se realizó sin el acatamiento de los principios rectores de la administración pública, por lo que este despacho considera que el mencionado incurrió en conductas antijurídicas, configurándose la culpa grave en su actuar.

Entonces siendo la causa del daño estudiado, las acciones y omisiones mencionadas a través de esta providencia, se tiene por sentado la existencia del nexo causal por la relación de causalidad de la conducta desplegada por **FUNDACION PACIFICO FUTURO**, En calidad de contratista representada legalmente por EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS identificado con cedula No. 16.489.555 o por quien haga sus veces, Gestor Fiscal y el daño patrimonial ocasionado, razón por la cual, una vez establecidos los elementos de la responsabilidad fiscal, debe fallarse con responsabilidad fiscal en su contra por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) más el valor de la indexación, para un total de **CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$43.453.172)** a la fecha. La responsabilidad es solidaria, como lo dicta el artículo 119 Ley 1474 de 2011:

***ARTÍCULO 119. Solidaridad.** En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.*

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

La responsabilidad es solidaria, por su parte el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, prevé la responsabilidad solidaria en los procesos de responsabilidad fiscal con las personas que concurran al hecho hasta la recuperación del detrimento patrimonial:

"Artículo 119. Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial." (Subrayado extra-texto)

En estas condiciones, habiéndose producido el daño al patrimonio público por los responsables antes mencionados, sin que se pueda dividir a prorrata el daño producido se fallará a su cargo responsabilidad solidaria.

DE LOS TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES

A. LA PREVISORA S.A., comunicación del día 17 de mayo de 2024, a través de su apoderado de confianza, presento argumentos de defensa por medio de correo electrónico con radicado No. 2024ER0104945 del 17/05/2024, actuación visible en el archivo denominado “Descargos_La_Previsora_S.A_Con_Póliza_Anexa_PRF-80763-2019-34477.pdf”. Se transcriben los apartes más importantes:

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Objeto de la Investigación Fiscal:

El proceso de responsabilidad fiscal tiene por objeto la investigación de presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 016 del 25 de enero de 2018 cuyo objeto fue: “Dictar Capacitación en temas de economía regional frente al mundo globalizado, turismo, desarrollo y Sociedad a los grupos de investigación y semilleros en las actividades de los programas de administración en negocios internacionales y tecnología en gestión hotelera y turística”. El Auto de Imputación No. 209 del 16 de abril de 2024, reprocha que dentro del expediente contractual no obran soportes que acrediten la realización de las capacitaciones contratadas y que pese a que el informe de entrega del contratista, FUNDACIÓN PACÍFICO FUTURO, menciona como anexos los registros de asistencia, en realidad estos no fueron adjuntados. En su lugar, el fiscalizador censura que sí reposan en el expediente del contrato 2 soportes de pago cada uno por el valor de \$15.000.000.

En mérito de lo anterior, la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, decidió formular cargos de responsabilidad fiscal en contra de: (i) Félix Suárez Rivera, rector de la universidad para la fecha de los hechos, (ii) Christian Enrique Tobar Quiñones, supervisor del contrato y (iii) Fundación Pacífico Futuro, por el presunto detrimento patrimonial en cuantía de \$30.000.000 (valor total del contrato).

Así mismo, el ente de control dispuso mantener la vinculación de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS en calidad de tercero civilmente responsable, con fundamento en la Póliza Global de Manejo No. 3000136, certificados 0 y 1, vigentes entre el 26 de septiembre de 2017 y el 26 de septiembre de 2018 el primero y entre el 26 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2019 el segundo.

Ahora bien, tal y como se explicará de manera detallada a continuación, la Contraloría conocedora en este proceso incurrió en un yerro al vincular a mi procurada con base en dicha póliza, por cuanto, existen una serie de fundamentos fácticos y jurídicos que demuestran indefectiblemente que la misma no podrá afectarse en el caso concreto. Es por esto, que resulta de suma importancia ponerle de presente al Honorable Juzgador, que actualmente nos encontramos en la etapa procesal pertinente e idónea para desvincular a la Compañía Aseguradora que represento.

CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

En términos generales, para que se configure y reconozca la existencia de responsabilidad fiscal en un proceso determinado, es indispensable que en el acervo probatorio queden plenamente acreditados todos y cada uno de los elementos constitutivos de la misma, esto es, una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al gestor fiscal, un daño patrimonial del Estado y un nexo causal entre los elementos previamente expuestos. En efecto, lo anterior ha sido establecido por la regulación colombiana, específicamente por el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual es claro al establecer lo siguiente:

“Artículo 5. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: -

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”

Al respecto, frente a los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de febrero de 2018, expediente 2108483, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro, se ha manifestado en los mismos términos que se han venido desarrollando, como a continuación se expone:

“Para que pueda proferirse decisión declarando la responsabilidad fiscal es menester que en el procedimiento concurren tres características: (i) Un elemento objetivo consistente en que exista prueba que acredite con certeza, de un lado la existencia del daño al patrimonio público, y, de otro, su cuantificación. (ii) Un elemento subjetivo que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica que aquel haya actuado al menos con culpa. (iii) Un elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal”.

En este sentido, a continuación, se argumentarán las razones por las cuales en el caso bajo estudio no se encuentran demostrados, siquiera sumariamente, la configuración de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, en particular el daño patrimonial al Estado y el dolo o culpa grave en la conducta del gestor fiscal. En consecuencia, el honorable Despacho no tendrá una alternativa diferente que archivar el PRF-80763-2019-34477.

A. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - INEXISTENCIA DE DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO

Tal y como se expuso anteriormente, para que se configure la responsabilidad fiscal es imperativo que en el plenario se encuentre suficientemente acreditado un daño patrimonial al Estado. En este sentido, vale la pena analizar la sentencia C-340 de 2007, en la cual se explicó que, a diferencia del proceso de responsabilidad disciplinaria en donde el daño es extrapatrimonial y no susceptible de valoración económica, en la responsabilidad fiscal el perjuicio debe ser cierto y de contenido eminentemente patrimonial. El tenor literal del mencionado fallo es el siguiente:

“b. La responsabilidad que se declara a través de dicho proceso es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de quienes están a cargo de la gestión fiscal, pero es, también, patrimonial, porque se orienta a obtener el resarcimiento del daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal”.

c. Como consecuencia de lo anterior, **la responsabilidad fiscal** no tiene un carácter sancionatorio -ni penal, ni administrativo-, sino que su naturaleza **es meramente**

reparatoria. Por consiguiente, la responsabilidad fiscal es independiente y autónoma, distinta de las responsabilidades penal o disciplinaria que puedan establecerse por la comisión de los hechos que dan lugar a ella.

Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia C-661 de 2000, al referirse a la distinta naturaleza del daño en la responsabilidad disciplinaria y en la fiscal, puntualizó que mientras que el daño en la responsabilidad disciplinaria es extrapatrimonial y no susceptible de valoración económica, **el daño en la responsabilidad fiscal es patrimonial.** En consecuencia, señaló la Corte, “... el proceso disciplinario tiene un carácter sancionatorio, pues busca garantizar la correcta marcha y el buen nombre de la cosa pública, por lo que juzga el comportamiento de los servidores públicos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública, al paso que “... **el proceso fiscal tiene una finalidad resarcitoria, toda vez que el órgano fiscal vigila la administración y el manejo de los fondos o bienes públicos,** para lo cual puede iniciar procesos fiscales en donde busca el resarcimiento por el detrimento patrimonial que una conducta o una omisión del servidor público o de un particular haya ocasionado al Estado”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se ha pronunciado en los mismos términos, al establecer que para que sea procedente la declaratoria de responsabilidad fiscal, definitivamente debe existir un daño patrimonial sufrido por parte del Estado. No obstante, no cualquier tipo de daño es susceptible de ser resarcido en un proceso fiscal, sino solo aquél que se encuentre debidamente acreditado, y que, además, se predique respecto de una entidad u organismo estatal en concreto. Lo previamente explicado fue analizado tal y como se expone a continuación:

“La responsabilidad fiscal estará integrada por una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo entre los dos elementos anteriores. **El daño patrimonial es toda disminución de los recursos del estado,** que cuando es causada por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, genera responsabilidad fiscal. En este orden de ideas, todo daño patrimonial, en última instancia, siempre afectará el patrimonio estatal en abstracto. Sin embargo, cuando se detecta un daño patrimonial en un organismo o entidad, el ente de control debe investigarlo y establecer la responsabilidad fiscal del servidor público frente a los recursos asignados a esa entidad u organismo, pues fueron solamente éstos los que estuvieron bajo su manejo y administración. **Es decir, que el daño por el cual responde, se contrae al patrimonio de una entidad u organismo particular y concreto**”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En otras palabras, para que sea jurídicamente viable la declaratoria de responsabilidad fiscal en un proceso determinado, es esencial que el daño patrimonial al Estado se encuentre debidamente acreditado en el expediente. No obstante, del material demostrativo allegado al plenario, se observa que no se ha producido ningún daño patrimonial a la Universidad del Pacífico en este caso ya que el pago de \$30.000.000 reprochado por el ente de control se realizó con fundamento en la obligación contraída a través del contrato de prestación de servicios No. 016 del 25 de enero de 2018. El ente de control reprocha que, no existe en el expediente contractual un solo soporte de la prestación de los servicios contractuales, no obstante, no tuvo en cuenta los registros tanto fotográficos como de asistencia que aportó el rector de la Universidad del pacífico como evidencia de la ejecución contractual.

Por esta razón, ante la inexistencia de un daño patrimonial causado a la Universidad del Pacífico, es jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal,

por lo que consecuentemente, el Despacho imperativamente tendrá que proferir fallo sin responsabilidad fiscal. Lo anterior, siguiendo lo consagrado en el artículo 54 de la ley 610 de 2000 el cual explica:

“ARTÍCULO 54. FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal”.

De esta forma, resulta conducente que el ente de control profiera una decisión que exonere de responsabilidad a los aquí investigados, en especial a Félix Suárez Rivera, rector de. universidad para la fecha de los hechos y a Christian Enrique Tobar Quiñones, supervisor del contrato.

B. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - POR INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Y/O DOLO EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.

Es de suma importancia ponerle de presente al Despacho que, en cuanto la conducta dolosa o culposa atribuible al gestor fiscal, el grado del elemento culpa no puede ser uno distinto del dolo o de la **culpa grave**. Es decir, para que en un caso se encuentre plenamente acreditado el primero de los elementos de la responsabilidad fiscal, no es suficiente probar la existencia de culpa leve o levísima en el patrón de conducta del gestor, sino que dicho patrón constituya una actuación dolosa o **gravemente** culposa. Lo anterior, ha sido explicado puntualmente por la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-619 de 2002, que declaró inexecutable específicamente el parágrafo segundo del artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que fijaba a la culpa leve como requisito de configuración del primer elemento de la responsabilidad. En efecto, el tenor literal de la providencia de la Corte Constitucional que explica que el grado de culpa en la responsabilidad fiscal es únicamente aquél que demuestre una conducta dolosa o gravemente culposa, es el siguiente:

“6.4. Pero no sólo eso. El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta. Ello, en el entendido que, según lo dijo la Corte en la citada Sentencia SU-620 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la responsabilidad fiscal es tan sólo una "especie de la responsabilidad que en general se puede exigir a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas, por los actos que lesionan el servicio o el patrimonio público."

6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de responsabilidad y remite a la culpa leve. Así, mientras un agente estatal que no cumple gestión fiscal tiene la garantía y el convencimiento invencible de que su conducta leve o levísima nunca le generará responsabilidad patrimonial, en tanto ella por expresa disposición constitucional se limita sólo a los supuestos de dolo o culpa grave, el agente estatal que ha sido declarado responsable fiscalmente, de acuerdo con los apartes de las

disposiciones demandadas, sabe que puede ser objeto de imputación no sólo por dolo o culpa grave, como en el caso de aquellos, sino también por culpa leve.

6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición. Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación proporcional pues, al fin de cuentas, de lo que se trata es de resarcir el daño causado al Estado. En el caso de la responsabilidad patrimonial, a través de la producción de un daño antijurídico que la persona no estaba en la obligación de soportar y que generó una condena contra él, y, en el caso de la responsabilidad fiscal, como consecuencia del irregular desenvolvimiento de la gestión fiscal que se tenía a cargo.

(...)

6.10. En relación con esto último, valga destacar que la Corte, primero en la Sentencia C-046 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y luego en la Sentencia T-973 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), advirtiendo el vacío legislativo dejado por la Ley 42 de 1993 -relativa a la organización del sistema de control fiscal financiero-, ya se había ocupado de reconocer el alto grado de afinidad temática existente entre la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad fiscal, al establecer que a esta última le era aplicable el mismo término de caducidad fijado por el Código Contencioso Administrativo para la acción de reparación directa (C.C.A. art. 136-78). En efecto, recogiendo el criterio sentado en la providencia inicialmente citada, dijo la Corporación en la Sentencia T-973 de 1999, lo siguiente:

"El código contencioso administrativo establece en su artículo 136, subrogado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, los términos de caducidad de las acciones, que, para el caso de la acción de reparación directa, se fija en dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. Y es este mismo término el que, por la remisión expresa que hace el artículo 89 de la ley 42 de 1993 a las normas del código contencioso administrativo, y dada la concordancia y afinidad que tiene con la acción de reparación directa, se aplica para el proceso de responsabilidad fiscal".

6.11. En consecuencia, queda pues superada aquella percepción equivocada, de que el daño patrimonial que le pueden causar al Estado los agentes que no cumplen función fiscal tiene tal grado de diferenciación con el perjuicio que le pueden causar los fiscalmente responsables, que justifica o admite respecto de los segundos un tratamiento de imputación mayor. **Por el contrario, visto el problema desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que, por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad material. En esta medida, el grado de culpa leve a que hacen referencia expresa los artículos 4° parágrafo 2° y 53 de la Ley 610 de 2000 es inconstitucional y será declaro inexequible en la parte resolutive de esta Sentencia.** (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En otras palabras, la Corte Constitucional fue completamente clara en su sentencia al establecer que el primero de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal única y exclusivamente se cumplirá en el evento que el patrón de conducta del gestor fiscal sea aquél que se enmarque dentro del dolo o de la culpa grave. Lo anterior, a su vez genera indefectiblemente que para que pueda predicarse la responsabilidad fiscal

respecto de determinada persona, es necesario demostrar que su actuación fue realizada de forma gravemente culposa o indiscutiblemente dolosa. Por supuesto, este planteamiento correlativamente impide declarar la responsabilidad fiscal en aquellos eventos en los cuales la actuación del gestor fiscal se enmarque únicamente dentro de la culpa leve o levísima.

Señalado lo anterior, resulta de gran importancia examinar si la actuación de los señores Félix Suárez Rivera, rector de la universidad para la fecha de los hechos, Christian Enrique Tobar Quiñones, supervisor del contrato y de la Fundación Pacífico Futuro, puede ser catalogada como una conducta dolosa o gravemente culposa, a la luz de los elementos probatorios que obran en el plenario. Se deben iniciar abordando los conceptos de culpa grave y dolo, que por mandado del artículo 63 del Código Civil, son conceptos que deben asimilarse cuando se realizan análisis de responsabilidad.

En este orden de ideas, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave de la siguiente forma:

“ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Frente al particular, La Corte Suprema de justicia definió el concepto de culpa grave tal y como se evidencia a continuación:

“Con esa orientación es que autorizados doctrinantes han precisado que la culpa grave comporta una negligencia, imprudencia o impericia extremas, no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes” (Mosset Iturraspe J., Responsabilidad por daños, T. I., Ediar, Buenos Aires, 1971, pág.89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de Seguros, T.I., Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1998, pág.228). (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En resumen, la culpa grave es un concepto jurídico que puede identificarse con todos aquellos comportamientos supremamente negligentes que son llevados a cabo por parte de las personas más descuidadas. Ahora, en lo que respecta al dolo, nuevamente se debe abordar el ya analizado artículo 63 del C.C. el cual explica:

“ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Frente al particular, La Corte Suprema de justicia definió el concepto de dolo tal y como se evidencia a continuación:

“Las voces utilizadas por la ley (Art. 63 C. C.) para definir el dolo concuerdan con la noción doctrinaria que lo sitúa y destaca en cualquier pretensión de alcanzar un resultado contrario al derecho, caracterizada por la conciencia de quebrantar una obligación o de vulnerar un interés jurídico ajeno; el dolo se constituye pues, por la intención maliciosa (...)” (subrayado y negrilla fuera del texto original)

En otras palabras, para endilgarle responsabilidad fiscal a las personas previamente identificadas, es indispensable que, utilizando los elementos probatorios conducentes, pertinentes y útiles, se acredite indefectiblemente un patrón de conducta supremamente negligente que se asimile al de las personas más descuidadas, o a la intención positiva de casar un menoscabo al patrimonio público.

Ahora bien, al analizar el acervo probatorio que obra en el plenario, resulta fundamental ponerle de presente al Despacho que ninguna de las pruebas que han sido allegadas permiten acreditar una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de los presuntos responsables. Por el contrario, de la totalidad de los elementos probatorios que obran en el expediente, se logra vislumbrar un patrón de conducta diligente, por cuanto se encuentran totalmente demostrada la ejecución del contrato No. 016 de 2018, a través de registros fotográficos y de asistencia a las capacitaciones brindadas por la Fundación Pacífico Futuro a los estudiantes de la Universidad del Pacífico.

Así las cosas, en ningún escenario la conducta de estas personas puede ser catalogada como una actuación negligente que se asimile al de las personas más descuidadas (gravemente culposa), o con una intención positiva y maliciosa de causar un daño al patrimonio público (dolosa), toda vez que existen elementos probatorios, conducentes, pertinentes y útiles que sin duda alguna acreditan una preocupación por cumplir con sus funciones, de suerte que, al no existir prueba fehaciente del elemento que aquí se discute, corresponderá al ente de control declarar su inexistencia y proceder con el archivo del proceso.

En conclusión, luego de haber analizado la totalidad de las pruebas que obran en el expediente, es claro que de ninguna manera puede endilgarse una actuación dolosa o gravemente culposa los señores Félix Suárez Rivera, rector de la universidad para la fecha de los hechos y Christian Enrique Tobar Quiñones, supervisor del contrato, ni a la Fundación Pacífico Futuro Sin embargo, si por alguna razón el honorable Despacho llega a considerar que su actuación contiene elementos subjetivos que comportan la culpa, resulta fundamental que tenga en cuenta, que aún en ese improbable evento, dicho elemento de ninguna forma puede ser catalogado como gravemente culposo o doloso. En consecuencia, al faltar el elemento de la culpa grave y/o dolo en el patrón de conducta de los implicados, es jurídicamente improcedente una declaratoria de responsabilidad fiscal de esta naturaleza.

Por esta razón, ante la inexistencia de una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de los presuntos responsables, automáticamente se desvirtúa la posibilidad de estatuir un nexo de causalidad entre lo endilgado y el supuesto detrimento, de suerte que no concurren los elementos sine qua non para que se estructure la responsabilidad fiscal en cabeza de los investigados por lo cual resulta jurídicamente improcedente proferir Auto de imputación en este proceso, no quedando otro camino que archivarlo.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE A LA VINCULACIÓN DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Antes de referirme a las razones por las cuales la Contraloría debe desvincular a mi representada en calidad de tercero civilmente responsable, es pertinente precisar que, al momento de proferirse el auto de apertura dentro del presente trámite, en el cual además se ordenó la vinculación de la Compañía de Seguros que represento, se omitió efectuar el estudio de las condiciones particulares y generales del contrato de seguro con fundamento en el cual fue vinculada. En efecto, el Honorable Juzgador no tuvo en cuenta que resulta jurídicamente inviable afectar la Póliza Global Sector Oficial No.

3000136, lo cual indudablemente contraviene el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, el cual dispone:

“Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella”.

Sobre el particular, se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, radicación No. 25000-23-24-000-2002-00907- 01, al señalar:

“El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza. **Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado**, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario **la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas**”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En ese contexto, la vinculación del garante se encuentra circunscrita al riesgo amparado, pues de lo contrario, la norma ya mencionada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no cubiertos por ellas.

Ahora, es importante tener en cuenta que para efectuar la vinculación de una compañía de seguros debe acatarse las directrices planteadas en el instructivo No. 82113-001199 del 19 de junio de 2002, proferido por la Contraloría General de la Republica. Este instructivo regula y aclara el procedimiento de vinculación del asegurador a los Procesos de Responsabilidad Fiscal a que se refiere el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000. En aquel documento se estableció que antes de vincular a una aseguradora, deben observarse algunos aspectos fundamentales respecto de la naturaleza del vínculo jurídico concretado en el contrato de seguro correspondiente. Por cuanto de la correcta concepción de esa relación convencional, se puede determinar si se debe o no hacer efectiva la garantía constituida en la póliza.

El citado instructivo emitido con base en la Ley 610 de 2000, precisó las condiciones o requisitos para la procedencia de la vinculación de las aseguradoras a los procesos de responsabilidad fiscal, determinando que:

“(…) 2. Cuando de vincula -las aseguradoras- se deben observar las siguientes situaciones:

- a) **Verificar la correspondencia entre la causa que genera el detrimento de tipo fiscal y el riesgo amparado:** Por ejemplo: Si se responsabiliza por sobrecostos en un contrato y la póliza cubre únicamente el cumplimiento y calidad del objeto contratado, no hay lugar a vincularla, por cuanto los sobrecostos no son un riesgo amparado y escapan al objeto del seguro.
- b) **Establecer las condiciones particulares pactadas en el contrato de seguro, tales como vigencia de la póliza, valor asegurado, nombre de los afianzados,**

existencia de un deducible, etc., eso para conocer el alcance de la garantía, toda vez que de estas condiciones se desprenderá la viabilidad de la vinculación de la Compañía aseguradora al proceso.

*c) **Examinar el fenómeno de la prescripción**, que si bien es cierto, por vía del art. 1081 del Código de Comercio, es de dos años la ordinaria y de cinco la extraordinaria (...)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

Conforme a lo anterior, es claro que la vinculación de la aseguradora debe estar condicionada a la estricta observancia o análisis previo de las pólizas invocadas para efectuar su vinculación, debiendo sujetarse a las condiciones contractuales del aseguramiento, independientemente del carácter y magnitud de la eventual infracción fiscal. Lo anterior, para determinar si es o no procedente su vinculación, siempre que no se configure alguna causal de inoperancia del contrato de seguro.

En efecto, como lo ha manifestado el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, en el fallo del 18 de marzo de 2010, la vinculación de las compañías de seguros no se efectúa a título de responsable fiscal, sino de tercero civilmente responsable, precisamente en razón a que su participación en el proceso se deriva única y exclusivamente del contrato de seguro y no de algún acto fiscal, o de una conducta suya que pudiera resultar lesiva para el erario público. Es por esto, que su responsabilidad se circunscribe a una de tipo civil o contractual, pero no fiscal, debiendo regirse precisamente por lo establecido en el derecho comercial sobre este particular.

En el caso particular, es evidente que el ente de control no efectuó el análisis y estudio de las condiciones pactadas en la Póliza Global Sector Oficial No. 3000136, limitándose exclusivamente a enunciar la existencia de la misma. Es evidente que, de haberse realizado el respectivo examen, definitivamente la conclusión sería que los hechos objeto de la acción fiscal no se encuentran cubiertos bajo el contrato de seguro documentado en la póliza antes referida.

Dicho lo anterior, se presentarán los argumentos por los cuales se solicita la desvinculación de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS así:

A. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.

Es fundamental que el Honorable Despacho tome en consideración que, en el ámbito de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la Compañía Aseguradora que represento en virtud de la facultad que se consagra en el artículo 1056 del Código de Comercio, asumió a su arbitrio algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado. Es de esta forma, como se explica que al suscribir el contrato asegurativo, la aseguradora decidió otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo, de tal manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes.

En otras palabras, las aseguradoras tienen la libertad de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

(...) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y

ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia de nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual **se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado**”.

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato asegurativo. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...) (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Lo anterior debe ser interpretado armónicamente con los principios generales del Derecho Comercial denominado “autonomía de la voluntad” y “buena fe”, tal como lo explica la Corte Constitucional en sentencia T-065 de 2015, de la siguiente manera:

“La celebración y ejecución de los contratos civiles y comerciales debe desarrollarse de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe. Así lo señala el Código Civil en sus artículos 1602 y 1603, y la Constitución Política en su artículo 83. El primero de estos principios, también conocido como pacta sunt servanda, establece que las personas naturales o jurídicas tienen la facultad de contraer libremente obligaciones y/o derechos mediante la celebración de contratos. Una vez manifiestan allí su voluntad y llegan a un acuerdo, el contrato se transforma en una ley para las partes. Su terminación queda sujeta a la realización de un nuevo acuerdo, o al cumplimiento de una de las causales previstas en la ley o en el mismo contrato. Por lo tanto, mientras no hayan establecido otra cosa, ninguna de ellas queda autorizada para alterar los términos contractuales de manera unilateral porque, de lo contrario, le impondría a la otra una obligación, o le concedería un derecho que jamás consintió. Lo anterior implica que, por regla general y sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley, cualquier modificación de un contrato debe estar sometida al concurso de todas las personas que lo celebraron.

(...)

5.3. Según lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corte, **tratándose específicamente de un contrato de seguro, la buena fe que se espera de las partes es cualificada.** Es decir, que la persona no solo debe tener conciencia de celebrar y ejecutar el contrato de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y la finalidad que persiguen los firmantes. Sino que, además, debe tener certeza de que efectivamente lo está haciendo. De esta manera, la buena fe aplicable a este tipo de situaciones exige un elemento subjetivo, que se refiere a la intensión del actor, y un objetivo, que tiene que ver con la efectiva realización del comportamiento esperado.

5.4. **En conclusión, la celebración y ejecución de un contrato de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe, le permite a cada uno de los contratantes confiar en la palabra del otro y tener una expectativa cierta de los efectos jurídicos del acuerdo celebrado.** De esta manera, la alteración unilateral de alguno de los términos contractuales, o su lectura literal y maliciosa, se traducirían en un acto sorpresivo que traicionaría la confianza depositada”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De conformidad con la facultad otorgada por el artículo 1056 del Código de Comercio, las entidades aseguradoras pueden asumir a su arbitrio, con la salvedad que dispone la ley, los riesgos que le sean puestos a su consideración, pudiendo establecer las condiciones en las cuales asumen los mismos. En este orden de ideas y como se ha venido exponiendo de forma transversal en el documento, no resulta jurídicamente admisible declarar la responsabilidad fiscal en el caso concreto, como quiera que no se ha realizado el riesgo asegurado, esto es, no se encuentran acreditados los requisitos listados en el 5 de la Ley 610 de 2000 en cabeza de los presuntos responsables.

En otras palabras y recapitulando las conclusiones a las que se llegó en el primer capítulo de este escrito, resulta evidente la improcedencia jurídica y fáctica de declarar la existencia de dicha responsabilidad fiscal, por cuanto de los elementos probatorios que obran en el plenario, no se vislumbra ni acredita un patrón de conducta que demuestre una actuación gravemente culposa o dolosa en cabeza de los presuntos responsables, ni la existencia de un daño patrimonial causado a la administración pública.

De esta manera, al ser jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de los señores Félix Suárez Rivera y Christian Enrique Tobar Quiñones, se debe concluir que tampoco se puede exigir pago alguno a mi procurada, derivado de la Póliza Global Sector Oficial No. 3000136, lo que por sustracción de materia significa, la no realización del riesgo asegurado. En consecuencia, el honorable Despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular a La Previsora S.A. Compañía de Seguros del PRF-80763-2019-34477.

B. SUJETOS PROCESALES NO AMPARADOS POR LA PÓLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL NO. 3000136 - CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES Y FUNDACION PACIFICO FUTURO.

De conformidad con el condicionado particular del contrato de seguro documentado en la Póliza Global Sector Oficial No. 3000136, los cargos amparados son los siguientes:

RELACION DE CARGOS AMPARADOS: 8

- 1. RECTOR
- 2. DIRECTOR ADMNISTRATIVO FINANCIERO
- 3. JEFE DE ALMACEN
- 4. ALMACENISTA
- 5. PROFESIONAL APOYO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 6. TESORERO
- 7. MENSAJERO
- 8. MENSAJERO

Así las cosas, resulta claro que Christian Enrique Tobar Quiñones, Director General de Investigaciones para la fecha de los hechos, no está amparado por la póliza, así como tampoco lo está la Fundación Pacifico Futuro ya que se trata de un tercero que no forma parte de la planta de personal de la Universidad del Pacífico. En este punto cabe agregar que este último sujeto procesal debe contar con sus propios contratos de seguro llamados a cubrir los siniestros que le resultaran probados. No obstante, durante la investigación que ha llevado a cabo la Contraloría en el marco del presente juicio fiscal, no ha indagado sobre dichos contratos aun cuando es su deber hacerlo, pues su gestión no se limita a determinar si existe responsabilidad de los funcionarios de la entidad afectada, sino también de su contratista.

En mérito de lo expuesto, comedidamente solicito al ente de control que en el remotísimo evento de llegar a encontrar fiscalmente responsables a Christian Enrique Tobar Quiñones, Director General de Investigaciones para la fecha de los hechos y a la Fundación Pacifico Futuro, se abstenga de afectar la póliza con fundamento en la cual se vinculó a mi defendida a este proceso como consecuencia de tal de tal declaratoria.

C. FALTA DE COBERTURA RESPECTO DE LOS RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL NO. 3000136.

Sin perjuicio de que no se ha realizado el riesgo asegurado, es preciso advertir que en el improbable y remoto caso de que el Honorable Despacho encuentre que el actuar de los presuntos responsables fue doloso o gravemente culposo y que se acredite sin lugar a dudas la existencia de un daño patrimonial al Estado, y por lo tanto, decida declarar la responsabilidad fiscal, se debe tener en cuenta que el hecho investigado no se encuentra amparado en la póliza, ya que puede enmarcarse dentro de las exclusiones pactadas en el contrato de seguro, las cuales cito a continuación:

“EXCLUSIONES Además de las exclusiones contenidas en el clausulado general salvo estipulación expresa en contrario, la presente póliza no se extiende a amparar las pérdidas que sufra la Entidad Beneficiaria como consecuencia de:

1. Mermas o daños que sufran los bienes o valores por cualquier causa natural, salvo si se probare dolo o culpa grave de alguno de los Servidores Públicos cuyo cargo se afianza.
2. Mermas o daños que sufran los bienes o valores por incendio, explosión, erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza, guerra civil e internacional, huelgas, asonadas, motines, movimientos subversivos, y en general, conmociones populares de cualquier clase.
3. Igualmente cualquier delito o faltante fiscal de los cubiertos por esta póliza, en que incurra uno o varios Servidores Públicos al amparo de situaciones creadas por los eventos especificados en el párrafo anterior.
4. Multas o sanciones administrativas o disciplinarias impuestas al Servidor Público por la Entidad Beneficiaria.
5. Créditos concedidos por la Entidad Beneficiaria a un Servidor Público, aun cuando se hayan otorgado a buena cuenta o anticipo sobre comisiones, honorarios, sueldo o cualquier otro concepto, que no fueran pagados por cualquier causa.
6. Mermas, diferencias de inventarios y desapariciones o pérdidas que no sean imputables a un Servidor Público determinado, o aquellas respecto de las cuales no se pueda establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar independientemente que se otorgue el amparo de personal no identificado.
7. Pérdidas derivadas de la conducta de Servidores Públicos que ocupen nuevos cargos creados por la Entidad Beneficiaria, cuando no se haya informado a la compañía después de los treinta (30) días siguientes de la ocupación del nuevo cargo.
8. Lucro cesante o ingresos esperados o cualquier pérdida consecuencial que sufra el asegurado, derivada de una pérdida amparada por esta póliza.
9. Actos conocidos o no por la Entidad Beneficiaria ejecutados por sus Servidores Públicos con anterioridad a la fecha de iniciación del seguro o con posterioridad a su vencimiento.
10. Pérdidas patrimoniales sufridas por la Entidad Beneficiaria por fuera de la vigencia de la presente póliza.
11. Pérdidas derivadas de pagos realizados a terceros equivocadamente o de créditos concedidos a terceros no pagados por cualquier causa, salvo cuando la conducta se tipifique como delitos contra la administración pública o genere un fallo con responsabilidad fiscal contra el Servidor Público.
12. Pérdidas resultantes de faltantes de caja debidas a errores del cajero.

13. Pérdidas causadas por cualquier acto intencional o doloso de la Entidad Beneficiaria.
14. Pérdida de bienes mientras sean objeto de movilización fuera de los predios de la Entidad Beneficiaria, o que se encuentren bajo la custodia de firmas transportadoras.
15. Pérdidas derivadas de actos de un Servidor Público, cuando en la vinculación del mismo a la Entidad Beneficiaria no se haya verificado la veracidad de los datos contenidos en su solicitud de empleo, o no se haya solicitado el pasado judicial vigente y sin antecedentes, certificado de antecedentes disciplinarios vigente y sin antecedentes, certificado de antecedentes fiscales sin antecedentes.
16. Actos de terceros que constituyan delito de hurto en todas sus modalidades (simple, calificado o agravado), delito de estafa, falsedad y asimilados, todo de acuerdo con la legislación penal vigente en Colombia.
17. Renovación automática
18. Reclamaciones propias de otra clase de seguros
- 19. Responsabilidad civil profesional**
- 20. Responsabilidad Civil de Directores y Administradores (D&O)**
21. Perjuicios causados a terceros y o personas naturales y o jurídicas distintas a la Entidad Beneficiaria de la presente póliza.
22. No exigir que los Servidores Públicos que ocupan los Cargos Afianzados tomen el período de vacaciones cada uno.
23. No establecer las funciones de cada cargo, de manera que a ningún Servidor Público se le permita controlar cualquier transacción desde el comienzo hasta el final, debiendo existir un control dual y custodia conjunta.
24. No mantener y emplear un manual de procedimientos y funciones en el que los deberes de cada Servidor Público se definan claramente de tal manera que no se permita a un mismo Servidor Público controlar una transacción y u operación desde su comienzo hasta su terminación.
25. No contar con manuales de control interno para su operación y o manuales de auditoría.
26. No llevar adecuados registros contables de todos los bienes asegurados, de suerte tal que Previsora está en posibilidad de verificar la cuantía de cualquier pérdida.
27. No practicar para los cobradores, cajeros, mensajeros, vendedores y pagadores ambulantes una auditoria diaria; a los demás pagadores la auditoria se hará mensualmente. Los resultados de dicha auditoria deberán constar por escrito, y contener los soportes correspondientes a cada procedimiento debiendo incluir revisión de todos los sistemas y documentos que pertenezcan al cargo respectivo.
28. No cumplir, ejecutar y poner en práctica todas las recomendaciones y o sugerencias que sean establecidas en los informes de auditoría, dejando por escrito constancia de dicho cumplimiento
- 29. No dar cumplimiento a las normas legales y de operación que regulan la actividad desarrollada por la Entidad Beneficiaria de la póliza, el incumplimiento a cualquier disposición dará lugar a que la póliza no tenga cobertura.**

Sin perjuicio de la inexistencia de responsabilidad fiscal de los sujetos procesales, resulta fundamental advertir que en el caso que la Gerencia Departamental del Valle del Cauca encontrara probada la omisión o el incumplimiento de las funciones propias de quien se desempeñaba como rector de la universidad del pacífico al momento de los hechos, necesariamente tendrá que concluir que el evento está excluido de amparo bajo la póliza de manejo global sector oficial No. 3000136 ya que eso implicaría una responsabilidad profesional del entonces funcionario.

Por lo anterior, respetuosamente solicito la desvinculación de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS del PRF-80763-2019-34477, toda vez que la póliza que fundamenta su convocatoria excluye fehacientemente los hechos originarios de la acción fiscal, tal y como se indicó.

D. DE ACREDITARSE UNA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA EN CABEZA DEL ÚNICO PRESUNTO RESPONSABLE AMPARADO POR EL CONTRATO DE SEGURO, EL DOLO COMPORTA UN RIESGO INASEGURABLE.

Partiendo del análisis que se realizó anteriormente, en donde se expuso que para que se reúnan los elementos configurativos de la responsabilidad fiscal es necesario que se demuestre fehacientemente el dolo o la culpa grave en la conducta del gestor, resulta fundamental ponerle de presente al honorable Despacho que, aun en el improbable evento en el que se encuentre acreditada una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de Félix Suárez Rivera, único amparado mediante el contrato de seguro, la Compañía que represento no está llamada a responder patrimonialmente. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 1055 del Código de Comercio cuyo tenor literal reza:

“ARTÍCULO 1055. <RIESGOS INASEGURABLES>. El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por esta razón, en el evento en el que se considere que la actuación del señor Félix Suárez Rivera sí se enmarca dentro del dolo o la culpa grave, es claro que no se podrá ordenar hacer efectiva la Póliza Global Sector Oficial No. 3000136, por cuanto dichos riesgos no son asegurables. En consecuencia, aun ante esta remota circunstancia, el honorable Despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS del PRF- 80763-2019-34477, por cuanto, es claro que el dolo y la culpa grave representan hechos no cubiertos ni amparados.

E. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE MANEJO BLOBAL SECTOR OFICIAL No. 3000136.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupa, sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, exclusivamente bajo esta hipótesis, el ente de control deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTICULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte

Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, **el valor de la prestación a cargo de la aseguradora**, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, **se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado**, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización” (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante, y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda en razón de la porción de riesgo asumido, que en este caso resulta ser la siguiente, para los amparos que a continuación se relacionan:

AMPAROS CONTRATADOS				
No. Amparo		Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	COBERTURA DE MANEJO OFICIAL Deducible: 12.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA MIN 3.00 SMLLV	300.000.000,00	SI	14.400.000,00
2	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Deducible: 12.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA MIN 3.00 SMLLV		NO	0,00
3	FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL Deducible: 12.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA MIN 3.00 SMLLV		NO	0,00

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado, y que el Contrato de Seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dicha póliza consagra unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el ente fiscal en el remoto e improbable evento de imponer a mi representada la obligación de indemnizar.

F. EN CUALQUIER CASO, SE DEBERÁN TENER EN CUENTA DE LOS DEDUCIBLES PACTADOS

Subsidiariamente a los argumentos precedentes, sin perjuicio de los fundamentos expuestos a lo largo del escrito y sin que esta mención constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, en el improbable evento en el que el honorable Despacho considere que la Aseguradora sí tiene la obligación de pagar indemnización alguna, resulta fundamental que tenga en cuenta el deducible pactado en la póliza de manejo global sector oficial No. 3000136:

AMPAROS CONTRATADOS				
No. Amparo		Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	COBERTURA DE MANEJO OFICIAL Deducible: 12.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA MIN 3.00 SMLLV	300.000.000,00	SI	14.400.000,00
2	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Deducible: 12.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA MIN 3.00 SMLLV		NO	0,00
3	FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL Deducible: 12.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA MIN 3.00 SMLLV		NO	0,00

En este orden de ideas, resulta de suma importancia que el Honorable Juzgador tome en consideración que, tanto la definición del deducible como su forma de aplicación, ha sido ampliamente desarrollada por la Superintendencia Financiera de Colombia en distintos conceptos, como el que se expone a continuación:

“Una de tales modalidades, **la denominada deducible**, se traduce en la suma que el **asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización**, de tal

suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

En este orden de ideas, correspondería a las partes en el contrato de seguro determinar el porcentaje de la pérdida que sería asumido por el asegurado a título de deducible, condición que se enmarcaría dentro de las señaladas por el numeral 11 del artículo 1047 del Código de Comercio al referirse a “Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes”. (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

De esta manera, en el hipotético evento en el que mi representada sea declarada civilmente responsable en virtud de la póliza de manejo global sector oficial No. 3000136, es de suma importancia que el Honorable Juzgador descuenta del importe de la indemnización la suma pactada como deducible que, como se explicó, asciende al rubro de 3 SMLMV que liquidados para el 2024 corresponden a la cifra de \$3.900.000.”

POSICION DEL DESPACHO RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR ASEGURADORA LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Respecto a cada uno de los argumentos el despacho considera lo siguiente:

A. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - INEXISTENCIA DE DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO

Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser cierto. Se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una **disminución patrimonial** o moral en el demandante.

La precitada Ley 610 del 15 de agosto de 2000 en su artículo 6 consagra:

“Daño Patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los contralorías.

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público.” (Subrayado declarado inexecutable Sentencia C-340-2007).

Lo primero que se destaca es que el daño patrimonial al Estado es producido en ejercicio de la gestión fiscal. Esto es coherente con el artículo 5 de la misma ley que dispone como uno de los elementos de la Responsabilidad Fiscal “una

conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.” Es lógico que si la responsabilidad fiscal sólo puede ser atribuida a alguien que realiza gestión fiscal necesariamente esa responsabilidad lo será por un daño causado en ejercicio de dicha gestión. Deben reunirse, entonces, los dos elementos: a) una persona que realiza gestión fiscal o actúa con ocasión de esta; y b) el daño debió haber sido producido en ejercicio de esa gestión fiscal o con ocasión de esta. Contrario sensu si el daño lo efectúa una persona que no realiza gestión fiscal o no se produce en ejercicio de la gestión fiscal, no existirá responsabilidad fiscal.

Este punto es central en el estudio de la Responsabilidad Fiscal puesto que ella se estructura sobre el concepto de Gestión Fiscal. La Contraloría General de la República la vigila y la Responsabilidad Fiscal precisamente se deriva de ella. Esta es el pilar, contemplado en el artículo 3 de la ley 610 de 2000, sobre el cual se debe estructurar cualquier teoría seria al respecto. Es el elemento propio que la diferencia de otras responsabilidades y le da autonomía conceptual.

En segundo lugar, la Ley nos dice que la gestión fiscal que produce el daño es aquella antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Lo cual básicamente quiere decir que el daño patrimonial al Estado ocurre cuando los gestores fiscales actúan de forma contraria a los principios que rigen la función administrativa en general y la gestión fiscal en particular.

En síntesis, el Daño Patrimonial al Estado es producido en desarrollo de la Gestión Fiscal. La Ley contempla una serie de calificativos para la gestión fiscal que produce el daño: en general se trata de una gestión fiscal que contraría los principios establecidos para la función administrativa y los fines o cometidos Estatales.

Llama la atención para esta colegiatura que el listado de estudiantes, aportado por la universidad del Pacífico es totalmente diferente a la relación o listados aportados por la Fundación Pacifico Futuro.

Una vez valorados la integralidad del material probatorio allegado y recaudado durante el presente tramite, se pudo establecer la existencia de un daño al patrimonio público, el cual consiste en la lesión que sufrió la Universidad del Pacifico en su patrimonio al haberse realizado el pago de la totalidad del contrato de Prestación de servicios No. 016-2018 del 25 de enero del 2018, pese a que no existen soportes que permitan establecer el cabal cumplimiento de la integralidad del objeto contractual.

Este despacho evidencia que los listados de estudiantes beneficiados con las capacitaciones aportados mediante el Oficio con radicado SIGEDOC 5621031 de fecha 04 de junio del 2021 de la Oficina de Rectoría de la universidad del pacifico y los aportados con Oficio con radicado 5620946 de fecha 19 de agosto del 2021 por la señora Maricel Valencia Castro en calidad de representante legal de la FUNDACION PACIFICO FUTURO, son absolutamente diferentes, los estudiantes relacionados por la fundación no concuerdan con los reportados por la universidad, circunstancia que permite colegir a este cuerpo colegiado el incumplimiento total del contrato de prestación de servicios No 016-2018, estableciéndose con certeza la existencia de un detrimento patrimonial al Estado en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) - sin indexar.

B. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - POR INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Y/O DOLO EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.

Tenemos que la conducta del presunto FELIX SUAREZ REYES, consistió en autorizar los pagos del contrato de prestación de servicios No. 016 del 25 de enero del 2018, con la Fundación Pacífico Futuro, por TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), sin existir soporte del cumplimiento del objeto contractual y no tomó las acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual. Por lo expuesto, la conducta desplegada por el señor FELIX SUAREZ REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.485.434, en su calidad de Rector, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

Ahora, dentro de las obligaciones de la supervisión, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84 parágrafo 1º de la Ley 1474 de 2011 establece como falta, *“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”*.

De acuerdo con la cláusula novena del Contrato, la vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y financiera de la ejecución y cumplimiento del contrato eran ejercidos por la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, a través del Director de Investigaciones o quien haga sus veces, quien controlara su correcta ejecución y cumplimiento. Como se puede observar, por parte del Director de Investigaciones, no hubo el mínimo cuidado, supervisión o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al recibir a satisfacción el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente contractual no se encontraron evidencias del seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero que debía realizar el Supervisor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas en la cláusula mencionada para la supervisión e interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el

alcance del proyecto. En su condición de supervisor del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución del contrato. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la supervisión, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo del señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES se encontraba una responsabilidad de supervisar y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de supervisión, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal. El reproche fiscal se encuentra sustentado ya que en cabeza del señor CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES, quien actuó como supervisor e interventor, se encontraba la representación de la Universidad del Pacífico y por tanto tenían a su cargo la salvaguarda de los recursos públicos invertidos con el fin de que estos cumplieran el cometido estatal encomendado.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por el señor CHRISTIAN ENRIQUETOBAR QUIÑONES, Director General de Investigaciones y SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios No. 016 de 25 de enero de 2018, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones como Director General de Investigaciones y SUPERVISOR del contrato en comento, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022. Así las cosas, observa este Despacho, que ninguno de los documentos que conforman el acervo probatorio recaudado desvirtúa el hecho generador en su totalidad y, por el contrario, lo que se evidencia es un claro incumplimiento contractual, que conlleva a una pérdida de recursos del Estado

Por lo tanto, no es jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de los señores Félix Suárez Rivera y Christian Enrique Tobar Quiñones, y este Despacho concluye que deben resarcir el daño causado, y la aseguradora La Previsora S.A., mediante la Póliza Global Sector Oficial No. 3000136, será quien responda, en caso que los presuntos no cumplan con dicho pago, es por ello que respecto a los presuntos responsables FELIX SUAREZ REYES Y CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES se estableció el nexo causal entre su conducta y el daño en el sentido en que eran las personas llamadas a realizar seguimiento, control, verificación y exigencia del cumplimiento del Contrato No. 016-2018, sin embargo, al no cumplir cabalmente con sus funciones permitieron que se ocasionara el detrimento a la Universidad del Pacífico, al no haberse ejecutado en su totalidad el objeto contractual, no cumplir con sus funciones respecto a este Contrato de prestación de servicios permitió que el Contratista incumpliera con la ejecución de la totalidad del objeto contratado sin ninguna justificación.

A. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.

De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, fue vinculada en calidad de Terceros Civilmente Responsable

Fiscal al presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, la aseguradora **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS.**, identificada con NIT. 860.002.400-2, por las Pólizas de seguro No. 3000136 certificado 0, expedida el 26 de septiembre de 2017, vigencia del 26 de septiembre de 2017 hasta el 26 de septiembre de 2018, en cuantía de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000). Riesgos amparados: Cobertura de manejo oficial, Delitos contra la administración pública y Fallos con responsabilidad fiscal y la Póliza No. 3000136 certificado 1, expedida el 26 de septiembre de 2018, cubre las vigencias desde el 26 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2019, en cuantía de TRESCIENTO MILLONES DE PESOS (\$300.000.000). Riesgos amparados: Cobertura de manejo oficial, Delitos contra la administración pública y Fallos con responsabilidad fiscal.

Tenemos que, en el presente proceso se investiga el Contrato de Prestación de Servicios No. 016-2018, del cual se desprende el incumplimiento en el que incurrió la Fundación Pacífico Futuro, al no realizar en su totalidad el objeto del contrato. Según la póliza que ampara a la Universidad del Pacífico, se tiene que uno de los amparos son Fallos con responsabilidad fiscal y la Póliza No. 3000136 certificado 1, expedida el 26 de septiembre de 2018, cubre las vigencias desde el 26 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2019, es decir, *que La Previsora S.A., compañía que firmo, dice que se pretende acompañar al asegurado contra las pérdidas patrimoniales sufridas en la vigencia de la presente póliza, que impliquen el menoscabo de fondos y bienes públicos, causados por sus servidores públicos en el ejercicio de los cargos amparados, por incurrir en conductas que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o que generen fallos con responsabilidad fiscal, siempre y cuando la pérdida y la conducta que le dio origen al daño tenga lugar dentro de la vigencia de la presente póliza”.*

De acuerdo con lo anterior, la aseguradora con toda libertad escogió cuales serian los riesgos que cubriría la póliza, siempre y cuando estos ocurrieran dentro del plazo o en desarrollo de la relación contractual; en el caso que nos ocupa, el detrimento fue causado por la omisión en sus funciones del señor rector de la Universidad del Pacífico, al no vigilar de manera oportuna y correcta el actuar de sus funcionarios y el cumplimiento del objeto contractual, lo que genero un detrimento patrimonial el cual finalizo en un fallo con responsabilidad fiscal, riesgo amparado por la póliza No. 3000136 certificado 1, expedida el 26 de septiembre de 2018, cubre las vigencias desde el 26 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2019.

En consecuencia, es jurídicamente procedente exigir a la Previsora el pago derivado de la No. 3000136 certificado 1, expedida el 26 de septiembre de 2018, cubre las vigencias desde el 26 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2019, por la realización de riesgo asegurado.

B. SUJETOS PROCESALES NO AMPARADOS POR LA PÓLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL NO. 3000136 - CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES Y FUNDACION PACIFICO FUTURO.

Lo que expresa la aseguradora sobre el contrato de seguro documentado en la Póliza Global Sector Oficial No. 3000136, que dentro de los cargos amparados solo esta el del rector, persona materia de investigación en este proceso, es cierto.

Por lo tanto, el responsable CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES, Director General de Investigaciones para la fecha de los hechos, no está amparado por esta póliza. Es por ello que solo están llamados a responder por el amparo del señor **FELIX SUAREZ REYES** en calidad de rector de la universidad del pacifico.

C. FALTA DE COBERTURA RESPECTO DE LOS RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL NO. 3000136.

En los riesgos amparado por esta póliza están los Delitos contra la administración pública y Fallos con responsabilidad fiscal los cuales no se encuentran dentro de las exclusiones pactadas dentro del contrato de seguro, por lo tanto cuentan con la cobertura, y que por la omisión en sus funciones del rector de la entidad afectada, se genero un daño patrimonial que desencadeno en un fallo fiscal por el cual este debe responder.

D. DE ACREDITARSE UNA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA EN CABEZA DEL ÚNICO PRESUNTO RESPONSABLE AMPARADO POR EL CONTRATO DE SEGURO, EL DOLO COMPORTA UN RIESGO INASEGURABLE.

Como bien lo menciona el artículo 1055 del Código de comercio, el dolo y la culpa grave no son asegurables:

“ ...
ARTÍCULO 1055. <RIESGOS INASEGURABLES>. El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o pólivo”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
...”

Lo que este Despacho investiga no es exactamente la conducta del gestor fiscal, es el incumplimiento del objeto contractual, el cual se deriva de la omisión en la realización de las funciones del rector de la Universidad del Pacifico, lo que ocasiono que el contratista incumpliera y por lo tanto se generara un detrimento patrimonial.

La conducta de este funcionario consistió en autorizar los pagos del contrato de prestación de servicios No. 016 del 25 de enero del 2018, con la Fundación Pacifico Futuro, por TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000), sin existir soporte del cumplimiento del objeto contractual y no tomó las acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por el señor FELIX SUAREZ REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.485.434, en su calidad de Rector, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

El Contratista además de ser un tercero que entra a cumplir con la ejecución contractual en una Entidad, se convierte en un colaborador del Estado en su función social, generando a este una obligación universal de lograr el cometido que es, el generar un beneficio social a través del contrato estatal celebrado, por consiguiente; debe actuar de la mejor manera para el cumplimiento del logro, de tal suerte que analizados las pruebas documentales y técnicas que se aportaron al Expediente, podemos advertir que la FUNDACION PACIFICO FUTURO no ejecutó las actividades para las que estaba obligado en virtud de la relación contractual, derivadas del mencionado Contrato, de acuerdo con la cláusula segunda se obligaba a:

- 1. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA CLAUSULA PRIMERA
- 2. Cumplir con las especificaciones establecidas en la propuesta presentada
- 3. Prestar los servicios de capacitación establecidos en el contrato, conforme a las especificaciones de estas: objetivos, intensidad horaria, desarrollo de temas
- 4. responder por la buena calidad de las capacitaciones dictadas
- 5. Desplegar sus mejores conocimientos y aptitudes en el desarrollo de la actividad
- 6. Entregar informe cuando lo requiera el supervisor
- 7. Contar con el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual
- 8. Obrar con lealtad y buena fe en la etapa precontractual y contractual, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato.
- 9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

Obligaciones que la Entidad contratante incumplió, y por ende se generó el detrimento al Estado, materia que nos ocupa.

No obstante lo anterior, debe recordar la defensa que el presente proceso de responsabilidad fiscal y en especial el presente fallo que ampara la póliza, está reglado por la Ley 610 de 2000 y de conformidad con esta norma y a la luz de lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 2002, que declaró inexecutable el parágrafo segundo del artículo cuarto, solo es posible derivar responsabilidad fiscal a título de dolo o culpa grave, por lo tanto, en el evento de existir tal clausula se puede enmarcar dentro de aquellas catalogadas como abusivas, en donde se genera un compromiso, esto es, amparar un fallo con responsabilidad fiscal siempre y cuando no se derive responsabilidad a título de culpa grave o dolo, lo cual resulta un sinsentido jurídico, pues nunca entonces la póliza podría hacerse efectiva.

Con los argumentos de exclusión de responsabilidad por la calificación de la conducta que esboza el apoderado del tercero civil, el contrato de seguro que tiene como único norte la protección de los bienes y recursos públicos, se constituiría en un instrumento jurídico con el que jamás se alcanzaría la realización de los intereses de la entidad contratante, amparada, asegurada y beneficiaria, por cuanto tal cláusula rompe el equilibrio contractual, en especial, en una de sus dimensiones: el equilibrio jurídico del contrato, desprotegiendo con ello los derechos del asegurado.

Al respecto, la Corte Suprema de justicia ha señalado:

"(...) Ahora, cuando el contrato de agencia o la estipulación dispositiva, sea por adhesión, estándar, en serie, normativo, tipo, patrón, global o mediante condiciones generales de contratación, formularios o recetarios contractuales, términos de referencia

o reenvío u otra modalidad contractual análoga, sus estipulaciones como las de todo contrato, en línea de Con todo, dándose controversias sobre su origen, eficacia o el ejercicio de los derechos, el juzgador a más de las normas jurídicas que gobiernan la disciplina general del contrato, aplicará las directrices legislativas singulares en su formación, celebración, contenido, interpretación, ejecución o desarrollo y terminación, para verificar su conformidad o disparidad con el ordenamiento y, en particular, el ejercicio de poder dominante contractual o la existencia de cláusulas abusivas, o sea, todas aquellas que aún negociadas individualmente, quebrantan la buena fe, probidad, lealtad o corrección y comportan un significativo desequilibrio de las partes, ya jurídico, ora económico, según los derechos y obligaciones contraídos (cas.civ. sentencias de 19 de octubre de 1994, CCXXXI, 747; 2 de febrero de 2001, exp. 5670; 13 de febrero de 2002, exp. 6462), que la doctrina y el derecho comparado trata bajo diversas locuciones polisémicas, tales las de cláusulas vejatorias, exorbitantes, leoninas, ventajosas, excesivas o abusivas con criterios disimiles para denotar la ostensible, importante, relevante, injustificada o transcendente asimetría entre los derechos y prestaciones, deberes y poderes de los contratantes, la falta de equivalencia, paridad e igualdad en el contenido del negocio o el desequilibrio "significativo" principio, se entienden lícitas, ajustadas a la buena fe y justo equilibrio de las partes...⁶

Estas cláusulas de acuerdo con el artículo 44 de la ley 1480 de 2011, están viciadas de nulidad o ineficacia, sin que ello afecte la totalidad del contrato, en la medida en que este pueda subsistir sin la cláusula nula o ineficaz.

Así entonces, siendo imposible decidir un proceso de responsabilidad a título diferente a la culpa grave o dolo, un contrato de seguro no puede pactar exclusión de su responsabilidad de cubrir el riesgo del fallo con responsabilidad fiscal que se expida a tal título, porque el riesgo asegurado es un imposible jurídicamente hablando, por ello, a la luz del artículo 44 de la Ley 1480 de 2011 la cláusula que contiene la condición es ineficaz.

E. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE MANEJO BLOAL SECTOR OFICIAL No. 3000136.

F. EN CUALQUIER CASO, SE DEBERÁN TENER EN CUENTA DE LOS DEDUCIBLES PACTADOS

Este Despacho es conocedor que la indemnización no podrá superar ni exceder el valor asegurado, ni tampoco el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, razón por la cual este hecho será tenido en cuenta en la parte resolutive de esta providencia, esto sustentado en que la Contraloría General de la República a través del Concepto No.80112 — EE61127 de septiembre 07 de 2012 ha dicho al respecto:

"Ahora bien, en el contrato de seguro el asegurador que asume los riesgos que le traslada el tomador, lo hace por el valor del interés asegurable, es decir, por "el valor económico

⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. MP. William Namén Vargas. Sentencia del 19 de octubre de 011. Referencia: 11001-3103-032-2001-00847-01

del interés asegurable", el cual constituye "la medida económica del daño eventual de que puede ser objeto el patrimonio asegurado".

En virtud de lo anterior la Compañía se encuentra en obligación de responder hasta por el monto del valor asegurado y teniendo en cuenta los deducibles pactados.

En consideración a los planteamientos anteriormente desarrollados, se debe ordenar entonces la incorporación al fallo con responsabilidad fiscal de las Pólizas de seguro No. 3000136 certificado 0, expedida el 26 de septiembre de 2017, vigencia del 26 de septiembre de 2017 hasta el 26 de septiembre de 2018, en cuantía de TRESCIENTO MILLONES DE PESOS (\$300.000.000). Riesgos amparados: Cobertura de manejo oficial, Delitos contra la administración pública y Fallos con responsabilidad fiscal.

Renovación de la Póliza No. 3000136 certificado 1, expedida el 26 de septiembre de 2018, cubre las vigencias desde el 26 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2019, en cuantía de TRESCIENTO MILLONES DE PESOS (\$300.000.000). Riesgos amparados: Cobertura de manejo oficial, Delitos contra la administración pública y Fallos con responsabilidad fiscal.

Lo anterior por cuanto la Póliza de manejo sector oficial N°3000136 con sus anexos, modificaciones y condiciones generales tiene cubrimiento de los hechos irregulares materia de la presente actuación.

B. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, comunicación del día 24 de octubre de 2024, a través de su apoderado de confianza, presento argumentos de defensa por medio de correo electrónico con radicado No. 2024ER0242752, de los cuales se transcriben los apartes más importantes:

OBJETO DEL SEGURO Y MODALIDAD DE COBERTURA

Como punto de partida, es menester referirnos que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-648 del 2000, sostiene que la responsabilidad de las aseguradoras está determinada de acuerdo con las condiciones del riesgo amparado, lo que para los operadores jurídicos significa que en la medida en que confluyan o se den el lleno de los parámetros pactados en el contrato de seguros surgirá para la Compañía de Seguros la obligación de indemnizar.

Como se explicará más adelante, la modalidad de cobertura del seguro fue pactado bajo la modalidad de ocurrencia del hecho, lo cual implica que el hecho materia del presunto detrimento patrimonial debió acaecer dentro de la vigencia del seguro, por lo tanto, y siempre que se den los presupuestos o condiciones del riesgo amparado, únicamente podrá hacerse efectiva por una sola vigencia, como quiera que no es viable la acumulación de vigencias de diferentes pólizas ni la acumulación o sumatoria de los valores asegurados de cada contrato de seguro, lo anterior, dándole cumplimiento estricto a los términos pactados contractualmente (en la póliza) y en armonía con lo dispuestos en el artículo 1056 del Código de Comercio.

Por ende, se destaca que la cobertura por ocurrencia, necesariamente se circunscribe a que los hechos causantes del daño o siniestro se inicien en vigencia de la póliza, es por ello que en los términos del artículo 1073 del C. Co., solo se podrá afectar aquella póliza que se encuentre vigente al inicio de la causación del daño, y si ese hecho causante del daño se prolonga en el tiempo, no podrán afectarse las subsiguientes vigencias, sino única y exclusivamente aquella en donde inicia la causación del daño, y en tal sentido es claro el artículo 1073 del C. Co., y por lo tanto no se podrán afectar varias pólizas en hechos continuos.

Ahora bien, la cobertura de este tipo de pólizas opera de manera particular, en una modalidad que conviene estudiar con la debida contextualización del ordenamiento jurídico, pues la obligación que es de la esencia del contrato de seguro, surge para el asegurador una vez cumplida la condición, pues depende de la clase de seguro, de la medida del daño efectivamente sufrido, y del monto pactado como limitante para la operación de la garantía contratada dentro de una vigencia determinada, y al respecto, resulta importante precisar lo siguiente:

Es bien sabido que el legislador permite tres modalidades de cobertura, en consecuencia, el artículo 4º. De la Ley 389 de 1997 dispone:

"El seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad civil, la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al Asegurado o a la Compañía durante la vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación"
"Así mismo se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al Asegurado o Asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato."

En efecto, basta decir que en el caso que nos ocupa, el contrato de seguros mediante el cual se vincula a LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, se trata de una póliza de cumplimiento en favor de Entidades Estatales, que opera conforme a la norma citada, ello quiere decir que el daño o pérdida o detrimento, que constituyen el siniestro, requiere que se produzca en las vigencias, condiciones pactadas, y para las conductas que han sido aseguradas.

Desde este punto de vista, el riesgo amparado debe ser plenamente individualizado en las condiciones generales, especiales y particulares de la póliza, y en los términos en ella previstos que ha de determinarse la responsabilidad de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, de igual forma, ha de prestarles atención a las exclusiones previstas, que son situaciones que por voluntad de las partes no son materia de cobertura, por ende, es deber de la Contraloría **motivar** que los hechos generadores del daño operan en vigencia de la póliza **660-47-994000012780**, conforme lo pregonan las normas relacionadas previamente y la CIRCULAR No. 005 de marzo 16 de 2020.

DE LA INEXISTENCIA DEL DAÑO DADA LA FUERZA VINCULANTE DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o de los intereses patrimoniales del Estado, producidos por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y fines esenciales del Estado. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por personas naturales o jurídicas de derecho privado -con ocasión a una gestión fiscal-, en forma dolosa o culposa que produzcan directamente o contribuyan al detrimento público.

En ese orden de ideas, lo primero, es señalar que dentro del expediente aparece el acta de Liquidación Final del contrato, y por tanto, dicho documento, consagró el finiquito de la relación contractual, que en término legales demuestra la inexistencia de daño, pues el Contrato fue pagado y liquidado en los términos que la Ley y a jurisprudencia ha determinado, lo que permite vislumbrar clara y textualmente que, se recibió a satisfacción el objeto contractual, según se encuentra en el expediente, y por lo tanto, no podrá imputarse un daño para el presente caso, y en ese sentido, la Aseguradora Solidaria, tampoco está llamada a responder como tercero civilmente responsable, toda vez que el acta de Liquidación Final del contrato no reflejó ningún incumplimiento contractual.

Al respecto, vale la pena recordar las reglas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el asunto, de acuerdo con las sentencias proferidas por el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la siguiente manera:

✓ En Sentencia del Consejo de Estado, radicación No. 13070 de 29 de enero de 1998, consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández, demandante: Sociedad Industrias Carper Ltda., demandado: Insfopal, determinó:

“La posibilidad de revisión de una liquidación por el juez del contrato supone la declaratoria de nulidad parcial o absoluta del acto correspondiente. La pretensión de incluir nuevos rubros luego de una liquidación de común acuerdo no es admisible, salvo que se decrete la nulidad de la liquidación por error manifiesto o vicios en el consentimiento o en la ilegitimidad de quien suscribió el acta.”

✓ En Sentencia del Consejo de Estado, radicación No. 10962 de 29 de julio de 1996, Consejero Ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros, demandante: Luis Eduardo González Q., demandado: Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali (Invicali), determinó:

“Respecto a la procedencia de la acción contra el acta de liquidación, ha sostenido reiteradamente la Corporación que (...) la liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en el cual se define quién debe, a quién y cuánto. Como es lógico, es un acuerdo entre personas capaces de disponer, por lo que las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad”

✓ En Sentencia del Consejo de Estado, radicación No. 10496 de 6 de agosto de 1998, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, demandante: Claudex Vitelio

Peñaranda Osorio, demandado: Departamento de Norte de Santander, determinó:

“La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento”

En efecto, basta recordar para el presente caso que, ante la existencia el Acta de Liquidación Final del contrato, mal haría la Contraloría, al pretender ejercer un control de legalidad sobre los actos dados por las partes contratantes para la liquidación del contrato, cuando la Contraloría no tiene competencia constitucional ni legal para ello, pues en efecto, es el juez del contrato quien puede declarar la nulidad parcial o absoluta del acta de liquidación del contrato, y en este caso, no le es dable a la Contraloría, pues se ostenta una liquidación de común acuerdo, pues como ya se dijo, la jurisdicción contencioso administrativa es quien puede legítimamente decretar la nulidad de la liquidación por error manifiesto o vicios en el consentimiento o en la ilegitimidad de quienes suscribieron el acta, y hasta que no se disponga lo contrario, revisada la legalidad del acta de liquidación por el juez del contrato, debe mantenerse como cierto el cumplimiento de las obligaciones reflejadas, y por tanto, las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad.

En tal sentido el acta de Liquidación Final del contrato finiquitó la relación entre las partes que integran el negocio jurídico, pues dicha acta prescribe claramente que el objeto contractual fue recibido a satisfacción por la entidad, y en ese sentido, el asunto se aparta plenamente del aseguramiento otorgado por la Aseguradora Solidaria de Colombia, toda vez que aparece que la Entidad contratista ha cumplido con el objeto del contrato.

En efecto, el Acta de Liquidación refleja el balance de la ejecución de dicho contrato en forma fidedigna sin que haya lugar a reprochar incumplimiento del negocio jurídico, hasta tanto el juez del contrato, es decir, la jurisdicción contencioso administrativa, niegue la eficacia del contenido del acta de liquidación, por lo cual, en ese orden de ideas, al existir evidencia en el cumplimiento del contrato, no hay lugar a indemnizar un daño inexistente.

En ese orden de ideas, según lo expuesto en el presente punto del memorial, solicito respetuosamente desvincular a la Aseguradora Solidaria de Colombia.

RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SE LIMITA A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE SEGUROS POR SER VINCULADA COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

El Artículo 44 de la ley 610 de 2000 con relación a la “Vinculación del garante”. Establece: “Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado”. (subrayado nuestro)

La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, **con la indicación del motivo de procedencia de aquella.**

A su turno la Sentencia C 648/02 de la Corte Constitucional expresó que, **la vinculación del garante está determinada por el RIESGO AMPARADO**, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.

En el caso de autos LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ha sido vinculada por la póliza de cumplimiento No. **660-47-994000012780** que confirió amparos de cumplimiento, anticipo y calidad del servicio. Para claridad es pertinente distinguir el alcance de cada cobertura que se pretende afectar.

Para claridad del despacho debemos analizar las diferentes coberturas otorgadas y determinar si hay o no lugar a afectar alguna de ellas, según los presupuestos de cobertura, anotando **que las coberturas de cumplimiento no son acumulables y son excluyentes entre sí con los amparos de calidad del servicio** pues la primera (cumplimiento) ampara durante la etapa de ejecución del contrato, y la segunda (calidad del servicio), operan a partir de la entrega o recibo a satisfacción, destacando a su vez que los amparos de las pólizas de cumplimiento Entidades Estatales serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. la entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. **estos no son acumulables y son excluyentes entre sí** (ver página 3 denominado **PARÁGRAFO SEGUNDO** del condicionado general que se anexa como prueba).

Conviene aclarar, que la póliza de cumplimiento, tiene como objeto, amparar la conducta del contratista, cuando por su acción u omisión, por hechos relacionados con sus obligaciones contractuales, pueda llegar a causar un perjuicio al contratante por hechos imputables dentro de la ejecución del respectivo contrato, por lo tanto, la condición primordial para la afectación de la póliza es la ocurrencia de una conducta imputable al contratista dentro de la ejecución del contrato, es por ello, que se necesita que se determine de manera clara y precisa cual es al conducta imputable al contratista afianzado respecto de sus obligaciones contractuales.

No obstante, la anterior aclaración, es bueno precisar el contenido y alcance de cada uno de los amparos que se otorgan en la póliza de cumplimiento, para poder desvirtuar la afectación de la misma y en consecuencia solicitar la desvinculación de LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA:

AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Otorga a la entidad Estatal contratante los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza, con sujeción en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuación se estipulan.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: el Amparo de cumplimiento cubre a las entidades estatales contratantes, contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista, de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

La cobertura otorgada por este amparo de cumplimiento tiene como finalidad la de cubrir al asegurado, contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista, de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

En este amparo encontramos que se compone o caracteriza por los siguientes elementos:

1. Cubre perjuicios derivados del incumplimiento: esto quiere decir que **no se indemnizan otro tipo de perjuicios, los cuales pueden presentarse, pero por el hecho de no derivar del incumplimiento contractual imputable al contratista, no podrán reclamarse ni indemnizarse por esta póliza.**
2. El incumplimiento debe ser de obligaciones emanadas del contrato: el incumplimiento que pueda generar perjuicios indemnizables por esta póliza, sólo podrán ser de aquellas obligaciones que emanen o se encuentran determinadas en el contrato amparado, es decir, cualquier otra falta del contratista que no viole obligaciones del contrato, no se podrán reclamar ni indemnizar por esta póliza bajo este amparo y como presupuesto para poder afectar la póliza de cumplimiento en cualquiera de sus amparos, se requiere que se determine cuál es la conducta que se le imputa al contratista.
3. El incumplimiento debe ser imputable al contratista: implica que, no obstante pueda presentarse un incumplimiento de una o varias obligaciones del contrato, este incumplimiento deber ser imputable exclusivamente al contratista, lo que significa que, el incumplimiento que no provenga de actos u omisiones del contratista, exigibles a éste, y sobre las cuales tenga completa disposición, no podrán ser reclamadas ni indemnizadas por esta póliza, como los que tiene que ver con los hechos objeto de cuestionamiento en el presente proceso, es decir, que al no existir una conducta imputable al contratista, mal podría afectarse una póliza de cumplimiento, pues la conducta del contratista es presupuesto para la afectación de la póliza de cumplimiento.

AMPARO DE ANTICIPO:

El amparo de manejo de anticipo cubre a la entidad estatal contratante contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para le ejecución eficiente del contrato.

La cobertura otorgada por este amparo tiene como finalidad cubrir al asegurado, contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

Mal podría afectarse este amparo toda vez que los recursos de anticipo se invirtieron en la ejecución del contrato, lo que configura actos contractuales

amparados por presunción de legalidad, los cuales sólo compete al juez del contrato declarar su nulidad y no a la Contraloría pues escapa de su competencia.

En síntesis, esta cobertura ampara es el manejo para el caso en que no sea juicioso y responsablemente invertido en el convenio, es decir contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

Para este amparo se amerita un estudio más detallado para efectos de determinar si se dio la ocurrencia del riesgo amparado, pues para ello debemos entrar a analizar los conceptos de anticipo, e inversión del anticipo, y en este caso encontramos que los recursos entregados a título de anticipo se invirtieron en la ejecución del contrato, que en los términos del condicionado de la póliza, implican liberar el riesgo, por lo tanto se desvirtúa un uso indebido de recursos que pueda afectar la cobertura de manejo de anticipo.

En ese orden de ideas, el amparo de anticipo no podría ser afectado en este proceso fiscal pues desconocería condiciones no solo del contrato de seguros, sino que implicaría que la Contraloría asumiría competencia que no tiene como declarar nulos actos contractuales, por lo tanto, su afectación debe ser de acuerdo a las condiciones establecidas y pactadas en el contrato de seguros los cuales no han sido analizados por la Contraloría.

AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan **con posterioridad a la terminación del contrato** y que se deriven de (I) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría o (II) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

En el caso de autos, el hecho no tiene relación alguna con una deficiente de calidad del servicio, y en tal sentido mal podrá afectarse el presente amparo.

SE ACLARA que los amparos de las pólizas vinculadas serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. la entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. **estos no son acumulables y son excluyentes entre sí** (ver página 3 denominado **PARÁGRAFO SEGUNDO** del condicionado general que se anexa como prueba).

Con el fin de demostrar todo lo anteriormente relatado, se anexará como **PRUEBA** el condicionado general de la póliza 660-47-994000012780.

PARA DETERMINAR SU RESPONSABILIDAD FISCAL SE DEBE DETERMINAR SI EL CONTRATISTA SE COMPORTÓ COMO GESTOR FISCAL.

En el caso que nos ocupa, la Contraloría advierte de un presunto incumplimiento contractual, pero los actos imputables por dicho incumplimiento contractual no comportan ejercicio de gestión fiscal del contratista, la Contraloría debe establecer de manera clara y precisa Partiendo de la premisa, para el amparo de cumplimiento en particular, si en el mismos se pueden o no dar los elementos de

la gestión fiscal, como desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración o particulares que manejan fondos o bienes de la Nación; al respecto el Consejo de Estado ha expresado: La gestión fiscal, como elemento determinante de la responsabilidad fiscal, se cumple siempre y cuando el particular, maneje o administre fondos o bienes del Estado que le hayan sido asignados o confiados, en el presente caso por la entidad contratante Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, en los estrictos términos de la relación contractual cuestionada por el ente de control departamental, de manera tal que se está en presencia de un contrato estatal. No obstante lo anterior, la Sala observa que el apelante le dio un alcance interpretativo distinto a la sentencia C-840 de 2001, al afirmar que en el marco del contrato público no es posible hacer un listado de actividades en las que el contratista actuó como gestor fiscal, por cuanto en criterio de esta Sala, para ello lo que procede es recurrir al texto contractual para determinar con base en el objeto y la forma de pago de la actividad o servicio pactados, si el particular asumió o no la administración y el manejo de recursos públicos que lo eleven a la condición de gestor fiscal. Es así como la Contraloría General de Antioquia en el presente caso, tenía que verificar si a la contratista BAAN COLOMBIA Ltda. le habían sido puestos a su disposición recursos o fondos públicos de la contratante, en este caso del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. [...] En todo caso, la Sala quiere advertir que con la anterior afirmación, no es que se esté desconociendo o poniendo en tela de juicio la vigilancia de la gestión fiscal que le correspondía adelantar a la Contraloría General de Antioquia, en vista de que se estaba ante una realidad incuestionable como lo era que, por tratarse de un contrato estatal pagado por el IDEA con recursos públicos del Departamento, el ente de control debía cumplir su cometido constitucional y legal. **En el presente caso lo que se analiza es si la parte contratista, según las cláusulas contractuales, se comportó como gestor fiscal. [...] De igual manera, se llama la atención en el sentido de que no es que se esté desconociendo la responsabilidad fiscal que le puede llegar a asistir a un particular; lo que se debe destacar es que no se pueden hacer juicios generalizados como lo hizo la apelante, en el sentido de que siempre que un particular suscriba un contrato estatal -que per se debe involucrar la ejecución de recursos públicos de lo contrario no tendría esta condición-, por este sólo hecho, el particular desplegó gestión fiscal y por ende estaría incurso en este tipo de responsabilidad. Lo anterior, por cuanto para que tenga acogida esta afirmación, se debe mirar cada caso en particular para determinar con fundamento en el tipo de contrato cuestionado, si el particular que manejó o administró bienes o recursos públicos, se desempeñó como gestor fiscal.** Siendo ello así, no es compartido el argumento de la apelación según el cual, en virtud de los planteamientos sentados en la Sentencia C-529 del 11 de noviembre de 1993, mediante la cual la Corte Constitucional afirmó que para el control fiscal no se tiene en cuenta el régimen que asuma las entidades que manejen recursos estatales bien sean de naturaleza pública o privada, pues al estar involucrados recursos públicos --interpretó el apelante- lo que interesa es la vigilancia fiscal por parte del ente de control, afirmación que no es desconocida por la Sala. Lo anterior, por cuanto ésta no puede ser una afirmación absoluta, ya que la responsabilidad fiscal tiene como requisito sine qua non, el ejercicio de una conducta que causó un daño al patrimonio **Estatal producto de la gestión fiscal, que como se ha advertido, para que le pueda ser imputada a un particular, debe tener bajo su órbita de**

desempeño, la administración o manejo sobre los recursos públicos que le hayan sido entregados, de lo contrario no procede

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - - Es un tema ajeno a la responsabilidad fiscal / CONTRATO ESTATAL - Debe estar amparado por pólizas de seguros / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - La vinculación de garante es a título de responsabilidad civil y no fiscal Lo anterior indica que la demandante incurrió en irregularidades o anomalías en la ejecución de los contratos, frente a las cuales la entidad contratante IDEA expresó su inconformidad no por la totalidad del valor de la contratación, sino por unos valores inferiores, lo que evidencia que se está ante un incumplimiento contractual, tema ajeno al de responsabilidad fiscal. **Según la prueba documental allegada al expediente, lo que se observa es que el ente de control demandado fundamentó la responsabilidad fiscal en cabeza de la actora, teniendo como justificación las mismas irregularidades que sirvieron a su vez de apoyo para que el IDEA declarara el incumplimiento y la caducidad del contrato. En suma, la responsabilidad fiscal la fincó en el incumplimiento contractual. [...] No cabe duda que, en el presente caso, la Contraloría confundió el incumplimiento contractual con la responsabilidad fiscal por el perjuicio económico que no se cuestiona bien pudo haber soportado la contratante, el cual fue producto de las irregularidades en la ejecución del contrato, que en todo caso no se puede equiparar con el daño patrimonial -con fundamento en el cual le imputó la responsabilidad fiscal a BAAN COLOMBIA Ltda.-. Aun así, bajo este contexto no se le puede ubicar a la demandante como gestora fiscal. De allí que podría afirmarse que en el sub lite, se confundió la responsabilidad fiscal que procura el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa causada por una persona jurídica pública o privada que ejerció gestión fiscal, como quiera que lo que aconteció fue un incumplimiento contractual por parte de la contratista BAAN COLOMBIA Ltda., supuesto hipotético que no obstaba para que se diera lugar a la compensación por los perjuicios causados a la contratante, haciendo efectivas las pólizas de Seguros del Estado N° 97332406 y 97332405. Afianza la tesis de que en el sub judice se estaba ante el incumplimiento de un contrato y, que el perjuicio de la contratante IDEA se mitigaría haciendo efectivas las pólizas de seguros, partiendo del presupuesto según el cual la jurisprudencia de esta Sección ha dejado sentado que la vinculación del garante al proceso de responsabilidad fiscal lo es a título de responsabilidad civil mas no fiscal, es decir, por razones inherentes al objeto contractual.**

La premisa anterior es predicable en el caso de autos respecto del amparo de Cumplimiento, en donde el contratista, según se advierte en los actos que se le imputan, no ha ejecutado actos propios de la gestión fiscal, como elementos determinantes de la responsabilidad fiscal y, en consecuencia, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA debe ser desvinculada.

ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN LA RESPONSABILIDAD

Resulta ilustrativo el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , expresado dentro del Radicado núm. 1522 (4 de agosto de 2003, Consejero ponente doctor Flavio Rodríguez Arce), en el cual se precisó lo siguiente: "Los elementos genéricos que estructuran la responsabilidad, a saber: a) acción u omisión de carácter culposo o doloso, imputable al servidor o

exservidor público en ejercicio o con ocasión del ejercicio de un cargo; b) un daño, en el evento de la consulta, la pérdida o deterioro de un bien perteneciente a la entidad pública que sufre el perjuicio causado por el servidor o exservidor público; y c) un nexo de causalidad entre el hecho del servidor o exservidor público y el perjuicio causado a la administración, tienen plena aplicación, así no exista de por medio gestión fiscal. De esta manera se deduce que el Estado puede obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por el servidor público que no cumple gestión fiscal, mediante la acción de reparación directa, incoada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la aplicación de las pólizas de seguro que deben amparar los bienes del Estado, conforme lo prevé el artículo 107 de la ley 42 de 1993. Finalmente, es necesario precisar que, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional, "...un agente estatal que no cumple gestión fiscal tiene la garantía y el convencimiento invencible de que su conducta leve o levísima nunca le generará responsabilidad patrimonial". - Sent. C619/02 -. La Sala responde: El resarcimiento de perjuicios por la pérdida, daño o deterioro de bienes del Estado, causados por servidores públicos o personas que no desarrollan gestión fiscal, ha de obtenerse dentro del proceso penal, si la conducta constituye delito, o por medio de la acción de reparación directa, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los otros eventos".

Ahora bien, debemos analizar esos elementos de la responsabilidad fiscal para poder determinar si respecto del amparo cumplimiento que se otorgaron en la póliza de cumplimiento se dan los elementos de la responsabilidad fiscal a saber:

Que sea imputable al contratista. En este caso tenemos que, con relación al amparo de cumplimiento, como ya se ha expresado no hay actos de gestor fiscal imputables al contratista, y solo se da un presunto incumplimiento contractual que como ya lo ha expresado el Consejo de Estado no configura el ejercicio de gestión fiscal.

LIMITE DEL VALOR ASEGURADO

No obstante, lo anterior, y ante la configuración de un fallo en contra de mi representada, hago consistir esta excepción en el hecho que LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA responderá dentro de los términos cuantitativos y económicos derivados de la vigencia del contrato de seguros, y en virtud de tal contrato la aseguradora no está obligada a pagar más allá del valor asegurado,

El límite del valor asegurado se encuentra establecido en el artículo 1079 del Código de Comercio, a saber:

“Artículo. 1079. Responsabilidad del asegurador. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.”.

La responsabilidad de la Compañía en ningún caso y por ningún motivo podrá exceder, los límites indicados en la póliza, aunque durante la vigencia de la póliza se presenten dos o más acontecimientos constitutivos de siniestro.

Para destacar TODO lo anteriormente relatado, obsérvese lo manifestado por el Contralor General de la República doctor CARLOS FELIPE CORDOBA, el cual adoptó la política de prevención del daño antijurídico, y dictó la CIRCULAR No.

005 de marzo 16 de 2020, en la cual conmina con claridad a todos los operadores jurídicos de las Contralorías del País, a tener en cuenta entre otras las siguientes apreciaciones:

“• (...) • Las obligaciones de la aseguradora tienen límites, entre otros, la suma asegurada, la vigencia, los amparos, las exclusiones, los deducibles, los siniestros, establecidos en el clausulado del contrato de seguros correspondiente. (negrilla y subrayado fuera de texto)

- (...)
- (...)

• Teniendo en cuenta el hecho generador sobre el que recae el proceso de responsabilidad fiscal, el mismo debe contrastarse con los siniestros cubiertos por las pólizas de seguros que potencialmente se afectarán y a partir de allí, analizar las condiciones generales y particulares del contrato de seguros, la base o modalidad (ocurrencia, descubrimiento, reclamación o "claims made", etc.) de la cobertura del seguro que se pretende afectar y las demás condiciones del contrato, con miras a determinar tempranamente y con absoluta claridad cuál es la póliza llamada a responder (en virtud a la vigencia, el ramo de seguros, etc.).

• Es importante que, además de identificar la modalidad de cobertura, el operador fiscal verifique los demás elementos de la póliza, como su periodo de prescripción, de retroactividad, las exclusiones que establezca, sus amparos, deducible, valor y de ser posible determinar si la misma ya había sido afectada, lo cual puede afectar la suma asegurada.

• El operador fiscal debe identificar con absoluta claridad cuáles son las modalidades de cobertura (descubrimiento, ocurrencia, o reclamación claims made), así como su vigencia, los periodos de cobertura temporal retroactiva o no de las respectivas pólizas, y demás condiciones, para determinar cuál de ellas se afectará en curso del proceso de responsabilidad fiscal. **En caso de tratarse de la modalidad de seguros de ocurrencia, la póliza a ser afectada debe ser aquella que se encontraba vigente para el momento de acaecimiento del hecho que genere la pérdida del recurso público.** Si la modalidad es por descubrimiento, la póliza afectada será la que se encontraba vigente a la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho que origine la pérdida o solicitud de indemnización. Y si la modalidad del seguro es por reclamación o "claims made", deberá afectarse la póliza vigente al momento de proferir el auto de apertura o de vinculación de la aseguradora. (negrilla y subrayado fuera de texto)

• **El operador fiscal deberá verificar que no se realice una indebida acumulación de vigencias o de valores asegurados de las pólizas de seguros y en consecuencia la vinculación de la aseguradora se hará con sujeción a la/ respectiva modalidad prevista en el contrato de seguro.** (negrilla y subrayado fuera de texto)

• El operador fiscal dentro del ejercicio de verificación antes señalado, debe analizar tanto las condiciones generales como particulares en las cuales se determinan las coberturas y exclusiones de la póliza, vinculando únicamente el valor del amparo al que se refiere el hecho investigado.

- (...)
- (...)
- (...).

Conforme a lo anterior se recalca que es deber de la Contraloría efectuar el análisis del objeto asegurado, sus amparos respectivos, vigencias, etc., debe decirse que, dicha información resulta pertinente a la hora de emitir el acto administrativo que conforme el fallo respectivo.

Conforme a lo precedente, estando dentro del término legal, doy por sustentados los argumentos de defensa contra el auto de imputación emitido dentro del proceso ordinario de la referencia, en defensa de los intereses de **LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**.

PRUEBAS, se anexan las siguientes:

- Caratula de las pólizas **660-47-994000012780**
- El condicionado general de la póliza: Con el fin de demostrar lo que cubre cada amparo y que estos no son acumulables y son excluyentes entre sí. (ver página 3 denominado **PARÁGRAFO SEGUNDO** del condicionado general)....”

POSICION DEL DESPACHO RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Respecto a cada uno de los argumentos el despacho considera lo siguiente:

DE LA INEXISTENCIA DEL DAÑO DADA LA FUERZA VINCULANTE DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Lo primero que se destaca es que el daño patrimonial al Estado es producido en ejercicio de la gestión fiscal. Esto es coherente con el artículo 5 de la misma ley que dispone como uno de los elementos de la Responsabilidad Fiscal “una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.” Es lógico que si la responsabilidad fiscal sólo puede ser atribuida a alguien que realiza gestión fiscal necesariamente esa responsabilidad lo será por un daño causado en ejercicio de dicha gestión. Deben reunirse, entonces, los dos elementos: a) una persona que realiza gestión fiscal o actúa con ocasión de esta; y b) el daño debió haber sido producido en ejercicio de esa gestión fiscal o con ocasión de esta. Contrario sensu si el daño lo efectúa una persona que no realiza gestión fiscal o no se produce en ejercicio de la gestión fiscal, no existirá responsabilidad fiscal.

Este punto es central en el estudio de la Responsabilidad Fiscal puesto que ella se estructura sobre el concepto de Gestión Fiscal. La Contraloría General de la República la vigila y la Responsabilidad Fiscal precisamente se deriva de ella. Esta es el pilar, contemplado en el artículo 3 de la ley 610 de 2000, sobre el cual se debe estructurar cualquier teoría seria al respecto. Es el elemento propio que la diferencia de otras responsabilidades y le da autonomía conceptual.

En segundo lugar, la Ley nos dice que la gestión fiscal que produce el daño es aquella antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Lo cual básicamente

quiere decir que el daño patrimonial al Estado ocurre cuando los gestores fiscales actúan de forma contraria a los principios que rigen la función administrativa en general y la gestión fiscal en particular.

En síntesis, el Daño Patrimonial al Estado es producido en desarrollo de la Gestión Fiscal. La Ley contempla una serie de calificativos para la gestión fiscal que produce el daño: en general se trata de una gestión fiscal que contraría los principios establecidos para la función administrativa y los fines o cometidos Estatales.

Llama la atención para esta colegiatura que el listado de estudiantes, aportado por la universidad del Pacífico es totalmente diferente a la relación o listados aportados por la Fundación Pacífico Futuro.

Una vez valorados la integralidad del material probatorio allegado y recaudado durante el presente tramite, se pudo establecer la existencia de un daño al patrimonio público, el cual consiste en la lesión que sufrió la Universidad del Pacífico en su patrimonio al haberse realizado el pago de la totalidad del contrato de Prestación de servicios No. 016-2018 del 25 de enero del 2018, pese a que no existen soportes que permitan establecer el cabal cumplimiento de la integralidad del objeto contractual.

Este despacho evidencia que los listados de estudiantes beneficiados con las capacitaciones aportados mediante el Oficio con radicado SIGEDOC 5621031 de fecha 04 de junio del 2021 de la Oficina de Rectoría de la universidad del pacifico y los aportados con Oficio con radicado 5620946 de fecha 19 de agosto del 2021 por la señora Maricel Valencia Castro en calidad de representante legal de la FUNDACION PACIFICO FUTURO, son absolutamente diferentes, los estudiantes relacionados por la fundación no concuerdan con los reportados por la universidad, circunstancia que permite colegir a este cuerpo colegiado el incumplimiento total del contrato de prestación de servicios No 016-2018, estableciéndose con certeza la existencia de un detrimento patrimonial al Estado en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) - sin indexar.

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SE LIMITA A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE SEGUROS POR SER VINCULADA COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Respecto a este punto tenemos que el detrimento causado a la Universidad del Pacífico se deriva del incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista, quien no ejerció todas las obligaciones que se encontraban determinadas en el contrato, por lo que este despacho le imputa una conducta gravemente culposa. De acuerdo con el material probatorio obrante en el Expediente, la FUNDACION PACIFICO FUTURO faltó a su deber de obrar con lealtad respecto de la Entidad a la cual prestó sus servicios como contratista, lo que generó un provecho económico injustificado para sí, un menoscabo económico del Estado. Se considera pues, una actitud antieconómica en contra de los fines del Estado.

Con dicha conducta transgredió toda la normatividad tendiente al adecuado manejo de los recursos públicos y también las propias de la administración y la moralidad pública.

De acuerdo con lo anterior y confirmada la relación contractual entre la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO y la FUNDACION PACIFICO FUTURO Contratista, este Despacho considera que la FUNDACION PACIFICO FUTURO, en su calidad de Contratistas es responsable a título de culpa grave, por el detrimento patrimonial causado a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, por haber recibido a satisfacción el pago del mismo pese a no haber realizado la debida ejecución del contrato, puesto que desde que se inició la ejecución del contrato no ha justificado la inversión de estos recursos en las actividades que se contrataron.

PARA DETERMINAR SU RESPONSABILIDAD FISCAL SE DEBE DETERMINAR SI EL CONTRATISTA SE COMPORTÓ COMO GESTOR FISCAL

La FUNDACION PACIFICO FUTURO, suscribió el Contrato de prestación de servicios No. 016-2018, por lo tanto tenemos que como extremo contractual es beneficiario de unos recursos públicos con ocasión de una interrelación con la actividad administrativa del Estado, y se convierte en colaborador de la función desempeñada por este, a través de un Contrato, con lo cual se somete a las reglas de derecho público para la contratación estatal y las finalidades constitucionales de sus recursos propendiendo por el beneficio general y social, principio que en la Ley 80 de 1993, adquiere un papel central, pues el Estado garantiza a los particulares su beneficio económico o utilidad al momento de contratar, pero conforme a una carga social y destinación concreta de los recursos públicos, y también dentro de la etapa contractual presenta una posición a la administración que somete a su consideración y aprobación bajo los principios o condicionamientos que la misma le imponga, como precio, plazo y demás que son objeto del ámbito contractual, pero no se permite bajo ninguna circunstancia provecho indebido o abusivo de la relación contractual que llegue a atentar o menoscabar los recursos públicos.

Es menester precisar en que los contratistas del Estado son sujetos de control fiscal cuando quiera que manejan bienes o fondos públicos y tal gestión se materializa en el hecho de que el contratista al entrar a negociar con la

administración, los términos y obligaciones del contrato y comprometerse específicamente a cumplir con lo pactado, ejerce actos de conexidad próxima con el ejercicio de la gestión fiscal, máxime si se tiene en cuenta que se le entregaron unos recursos en calidad de pagos, que son de carácter público, razón por la cual, su manejo y custodia debe estar inmerso dentro de las obligaciones de un verdadero gestor fiscal, ya que son unos recursos públicos que han sido destinados para cumplir un fin social y como tal le asistía el deber de actuar con lealtad y honestidad a lo largo de toda su participación como Contratista, observando los principios de transparencia, economía y responsabilidad en aras de salvaguardar los recursos del Estado. Dicho esto se tiene que la Fundación Pacífico Futuro, actuó como gestor fiscal en el contrato materia de investigación.

ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN LA RESPONSABILIDAD

En el artículo 5 de la Ley 610 del 2000, se encuentran los elementos de la responsabilidad fiscal, a letra reza:

“ ...
Artículo 5. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.
... ”

Tenemos que la conducta del Contratista se materializa al momento de celebrar el Contrato estatal y de recibir unos recursos en calidad de pago, los cuales, si no son invertidos en su totalidad en el objeto contractual da lugar a derivarle responsabilidad fiscal, al apropiarse de unos recursos públicos que legalmente no le pertenecían por cuanto no se verificaron, actas e informes de supervisión, evidencias fotográficas, planillas de asistencias, o avance del proceso contractual. Encontrando que en este contrato suscrito en la vigencia 2018 del 25 de enero, la ejecución fue Cero, puesto que no existe evidencia que demuestre la ejecución idónea del objeto contratado.

De acuerdo con el material probatorio obrante en el Expediente, la FUNDACION PACIFICO FUTURO faltó a su deber de obrar con lealtad respecto de la Entidad a la cual prestó sus servicios como contratista, lo que generó un provecho económico injustificado para sí, un menoscabo económico del Estado. Se considera pues, una actitud antieconómica en contra de los fines del Estado. Con dicha conducta transgredió toda la normatividad tendiente al adecuado manejo de los recursos públicos y también las propias de la administración y la moralidad pública.

De acuerdo con lo anterior y confirmada la relación contractual entre la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO y la FUNDACION PACIFICO FUTURO Contratista, este Despacho considera que la FUNDACION PACIFICO FUTURO, en su calidad de Contratistas enmarco su conducta en los tres elementos que estipula la norma.

LIMITE DEL VALOR ASEGURADO

Este Despacho es conocedor que la indemnización no podrá superar ni exceder el valor asegurado, ni tampoco el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, razón por la cual este hecho será tenido en cuenta en la parte resolutive de esta providencia, esto sustentado en que la Contraloría General de la República a través del Concepto No.80112 — EE61127 de septiembre 07 de 2012 ha dicho al respecto:

"Ahora bien, en el contrato de seguro el asegurador que asume los riesgos que le traslada el tomador, lo hace por el valor del interés asegurable, es decir, por "el valor económico del interés asegurable", el cual constituye "la medida económica del daño eventual de que puede ser objeto el patrimonio asegurado".

Finalmente, este despacho indica que junto a los argumentos de defensa con radicación SIGEDOC No. 2024ER0242752 de fecha 24 de octubre de 2024, la compañía aseguradora SOLIDARIA allegó los siguientes medios de prueba y solicita que sean incorporados al proceso:

Documentales:

- a. Caratula de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000012780 anexo 0.
- b. El condicionado general de la póliza.

RESPECTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS EL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Frente a los medios de prueba requeridos, el despacho al analizar los documentos que aportó, los considera útiles, conducentes y pertinentes porque tienen relación con los hechos materia de la presente investigación, por lo cual fueron incorporados como medios de prueba en el presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

En virtud de lo anterior la Compañía se encuentra en obligación de responder hasta por el monto del valor asegurado y teniendo en cuenta los deducibles pactados.

En consideración a los planteamientos anteriormente desarrollados, se debe ordenar entonces la incorporación al fallo con responsabilidad fiscal de la póliza de cumplimiento estatal No. 660-47-994000012780, expedida el 26 de enero de 2018, vigencia del 25 de enero de 2018 hasta el 26 de julio de 2018, amparando el cumplimiento del contrato No 016 del 25 de enero del 2018.

Lo anterior por cuanto la de cumplimiento estatal No. 660-47-994000012780 con sus anexos, modificaciones y condiciones generales expedida el 26/01/2018 tiene cubrimiento de los hechos irregulares materia de la presente actuación.

Así las cosas y de acuerdo a las anteriores razones fácticas y jurídicas, **LOS SUSCRITOS DIRECTIVOS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,**

RESUELVEN:

ARTICULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL A TÍTULO DE CULPA GRAVE, en cuantía de **CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$43.453.172),** en forma solidaria, en contra de las siguientes personas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia:

- **FELIX SUAREZ REYES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.485.434, en su calidad de Rector para la época de los hechos, y como contratante del Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de 2018.
- **CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.105.166, Director General de Investigaciones para la época de los hechos, y en su calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de 2018.
- **FUNDACION PACIFICO FUTURO,** NIT. 900.395.802 representada legalmente por EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS identificado con cedula No. 16.489.555, en calidad de Contratista del Contrato de Prestación de Servicios No. 016 de 2018.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR COMO TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES a las compañías de seguros que se nombran a continuación e INCORPORAR al presente Fallo con Responsabilidad Fiscal, las siguientes Pólizas, conforme a la parte motiva de este proveído:

1. **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS** identificada con NIT. 860.002.400-2, que emitieron las pólizas:
 - ✓ Pólizas de seguro No. 3000136 certificado 0, expedida el 26 de septiembre de 2017, vigencia del 26 de septiembre de 2017 hasta el 26 de septiembre de 2018, en cuantía de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000).** Riesgos amparados: Cobertura de manejo oficial, Delitos contra la administración pública y Fallos con responsabilidad fiscal.
 - ✓ Renovación de la Póliza No. 3000136 certificado 1, expedida el 26 de septiembre de 2018, cubre las vigencias desde el 26 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2019, en cuantía de **TRESCIENTO MILLONES DE PESOS (\$300.000.000).** Riesgos amparados: Cobertura de

manejo oficial, Delitos contra la administración pública y Fallos con responsabilidad fiscal.

2. **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, identificada con NIT. 860.524.654-6, que emitieron las pólizas:

- ✓ Póliza de Garantía Única de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000012780 emitida el 26 de enero de 2018, cubre las vigencias desde el 25 de enero de 2018 hasta el 26 de julio de 2018, en cuantía de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) Riesgos amparados: Cumplimiento.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente providencia, atendiendo a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los términos de lo señalado en los artículos 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 a los presuntos responsables fiscales:

- **FELIX SUAREZ REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.485.434, Rector para el periodo en el cargo desde 02/05/2017 hasta 15/02/2019, al correo electrónico: fesurez@gmail.com.
- **CHRISTIAN ENRIQUE TOBAR QUIÑONES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.105.166, Director General de Investigaciones y supervisor del contrato; vinculado a la Universidad del pacifico en el periodo del cargo desde el 26/09/2017 hasta 06/08/2018, en calidad de supervisor, al correo electrónico: christiantobarq@gmail.com.
- **FUNDACION PACIFICO FUTURO**, identificada con Nit 900.395.802 representante Legalmente por EDGAR FELIPE ANGULO RIVAS identificado con cedula No. 16.489.555, o quien haga sus veces, en calidad de Contratista conforme al contrato de prestación de servicios No. 016 del 25 de enero del 2017, al correo electrónico: fundafuturo1667@hotmail.com.
- **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, identificada con NIT. 860.524.654-6, representada Legalmente por CARLOS ANDRES BARBOSA BONILLA identificado con cedula No. 1.019.024.615 con T.P. número 255.450 del C. S., o quien haga sus veces, en calidad de tercero civilmente responsable a los correos electrónicos notificaciones@solidaria.com.co con copia a cabarbosa@solidaria.com.co.
- **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con NIT. 860.002.400-2, representada Legalmente por GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA identificado con cedula No. 19.395.114 con T.P. número 39.116 del C. S., o quien haga sus veces, en calidad de tercero civilmente responsable a los correos electrónicos notificaciones@solidaria.com.co con copia a cabarbosa@solidaria.com.co.

ARTICULO CUARTO: RECURSOS. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 610 de 2000 y los artículos 74 y ss. de la Ley 1437 de 2011, el cual deben ser interpuesto ante la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, en la oficina de correspondencia, o a través de los correos electrónicos responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co, sandra.barcos@contraloria.gov.co advirtiéndole que durante dicho término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría Común ubicada en la Calle 23 A Norte No. 3 - 95 Edificio San Paolo Barrio Versalles, de la ciudad de Cali-Valle del Cauca.

ARTICULO QUINTO: MEDIDAS CAUTELARES. Mantener las medidas cautelares decretadas mediante Auto No. 444 del 24 de julio de 2024, las cuales continuarán vigentes hasta el proceso de Jurisdicción Coactiva, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEXTO: En firme y ejecutoriada la presente providencia, súrtanse los siguientes traslados y comunicaciones:

- Remitir copia auténtica del fallo a la dependencia que deba conocer del proceso de Jurisdicción Coactiva, de conformidad con el Artículo 58 de la ley 610 de 2000.
- Solicitar a la Contraloría Delegada Para Responsabilidad Fiscal Intervención Judicial Y Cobro coactivo, Incluir en el Boletín de Responsables Fiscales a las personas a quienes se les falló con Responsabilidad Fiscal.
- Remitir copia íntegra del presente proveído a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
- Remitir copia íntegra del presente proveído a la Entidad afectada, para que se surtan los registros contables.

ARTICULO SÉPTIMO: ARCHIVO FISICO. El presente Acto Administrativo y los documentos que hacen parte del Expediente, surtirán los trámites de Gestión Documental, Archivo Físico y Archivo Electrónico por parte del Profesional Sustanciador en la plataforma SIREF o la que para efecto designe la Contraloría General de la República.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

FERNANDO TEJEDA Q

EARLD HERNANDO TEJEDA QUINTERO
Gerente Departamental - presidente de la Colegiatura
Directivo Ponente



GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO
Contralor Provincial



JAIRO MANUEL ESTRADA MOSQUERA
Contralor Provincial

Elaboró: Sandra Patricia Barcos García – Profesional Sustanciador

Revisó: Mónica Fernanda Gómez Salazar– Coordinador de gestión

Aprobado. Acta No. 91 sesión ordinaria del Comité de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle

Fecha: 26 de noviembre de 2024

